



SENADO DE PUERTO RICO

DIARIO DE SESIONES

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUINTA SESION ORDINARIA AÑO 2023

VOL. LXXI	San Juan, Puerto Rico	Jueves, 9 de febrero de 2023	Núm. 7
------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------

A la una y cincuenta minutos de la tarde (1:50 p.m.) de este día jueves, 9 de febrero de 2023, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor José L. Dalmau Santiago.

ASISTENCIA

Senadores:

Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia I. González Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, y José L. Dalmau Santiago, Presidente.

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos hoy jueves, 9 de febrero de 2023, a la una y cincuenta minutos de la tarde (1:50 p.m.).

Señor Portavoz.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

SR. RUIZ NIEVES: Para continuar con el Orden de los Asuntos.

SR. PRESIDENTE: Para que se continúe.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. RUIZ NIEVES: Proponemos que se posponga la Aprobación del Acta de la pasada sesión correspondiente al día 6 de febrero de 2023.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente, próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Compañero Rafael Bernabe, compañero Vargas Vidot, compañero Gregorio Matías.

SR. RUIZ NIEVES: Y este servidor, señor Presidente. Pero estamos solicitando, señor Presidente, que se posponga los turnos hasta terminar la Votación.

SRA. RIVERA LASSÉN: Señor Presidente, para que se me incluya en los turnos, por favor.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la petición del señor Portavoz? Si no hay objeción, así se acuerda.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas:

De la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, tres informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1081; y de los P. de la C. 1418 y 1483, con enmiendas, según los entrillados que los acompañan.

De la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, el cuarto informe parcial sobre la investigación requerida por la R. del S. 9.

De la Comisión de Juventud y Recreación y Deportes, un informe proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 175, sin enmiendas.

De la Comisión de Juventud y Recreación y Deportes, un informe proponiendo la aprobación del P. de la C. 710, con enmiendas según el entrillado que lo acompaña.

De la Comisión de Juventud y Recreación y Deportes, el primer informe parcial sobre la investigación requerida por la R. del S. 652.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. RUIZ NIEVES: Para que se den por recibidos.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente, próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS

La Secretaría da cuenta del siguiente Informe Negativo de Comisión Permanente:

De la Comisión de Juventud y Recreación y Deportes, un informe proponiendo la no aprobación del P. del S. 528.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente, para que se dé por recibido el mismo.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda. Recibido.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente, próximo asunto.

RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones del Senado radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor Ramón Ruiz Nieves:

PROYECTOS DEL SENADO

P. del S. 1132

Por la señora Riquelme Cabrera:

“Para añadir un nuevo subinciso (1) al inciso (a) de la Sección 2021.03 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de facultar al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a otorgar los decretos dispuestos por la referida Sección a médicos especialistas o subespecialistas elegibles luego del 31 de diciembre de 2020, sujeto a que el Secretario del Departamento de Salud emita una Certificación Especial por Necesidad Apremiante de Médicos Especialistas o Subespecialistas, estableciendo de forma clara y precisa, las especialidades y subespecialidades en el área de la medicina que requieren reclutamiento prioritario a base de la necesidad apremiante de la ciudadanía, las condiciones médicas en Puerto Rico y la escasez o ausencia de las mismas; disponer sobre la coordinación con el Secretario del Departamento de Hacienda; establecer deberes y responsabilidades de las agencias concernidas; disponer para la presentación de informes a la Asamblea Legislativa y al Gobernador; y para otros fines relacionados.”

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR)

P. del S. 1133

Por los señores Ruiz Nieves y Torres Berríos:

“Para enmendar la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, a los fines de añadir un nueva Sección 15; para establecer que el dueño o accionista mayoritario de toda clínica dental o práctica en el ejercicio de la medicina dental sea un dentista licenciado por el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y establecer excepciones a la aplicabilidad de dicha Sección; renumerar las secciones subsiguientes; establecer la responsabilidad del Departamento de Salud, en coordinación y consulta con la Junta Dental Examinadora de Puerto Rico y del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, de establecer reglamentación sobre lo requerido en esta Ley; y para otros fines relacionados.”

(SALUD)

RESOLUCIONES DEL SENADO

R. del S. 737

Por la señora Riquelme Cabrera:

“Para ordenar a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación profunda y exhaustiva sobre la viabilidad de reactivar la oportunidad para solicitar los decretos contributivos para Médicos Cualificados y auscultar la posibilidad de establecer unos porcentos variables en base a la práctica del profesional médico, entre otros asuntos.”

(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 738

Por la señora Riquelme Cabrera:

“Para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación profunda y exhaustiva sobre la viabilidad de reactivar los terrenos y la infraestructura de la Central Coloso en Aguada para la siembra y procesamiento de caña, evaluar la viabilidad de desarrollo económico a nivel local, nacional e internacional de la venta y distribución de productos derivados de la caña, evaluar el desarrollo turístico y económico del área que la reactivación de esta industria traería, y otros asuntos.”

(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 739

Por la señora Santiago Negrón:

“Para expresar el más enérgico repudio del Senado de Puerto Rico al programa de censura instaurado en el estado de Florida para remover libros de las escuelas públicas; y para solidarizarse con la clase magisterial de esa jurisdicción.”

(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 740

Por el señor Matías Rosario:

“Para ordenar a las Comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano y de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las denuncias públicas de “plugola” en los medios de comunicación de radio, televisión, prensa escrita, redes sociales o medios digitales; y para otros fines relacionados.”

(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 741

Por la señora Santiago Negrón:

“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales y de Vivienda del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre las gestiones que maneja el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico para

satisfacer la demanda de viviendas y hogares adecuados para individuos y familias; incluyendo los criterios para las opciones de impactar terrenos con potencial agrícola o con valor ecológico, en contraste con la alternativa de satisfacer la demanda de vivienda de interés social y de otro tipo mediante la rehabilitación, reconstrucción o reparación de unidades de vivienda desocupadas, destruidas o dilapidadas; y para otros fines relacionados.”

(ASUNTOS INTERNOS)

La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Resoluciones Conjuntas del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor Ramón Ruiz Nieves:

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO

R. C. del S. 383

Por el señor Dalmau Santiago:

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación llevar a cabo todas las gestiones necesarias con LUMA Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica, o cualquier otra entidad correspondiente, para la instalación de alumbrado en la Carretera PR-18, que conecta a Caguas con San Juan; disponer la procedencia de fondos para las obras ordenadas; y para otros fines relacionados.”

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

R. C. del S. 384

Por los señores Dalmau Santiago y Aponte Dalmau:

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación llevar a cabo todas las gestiones necesarias con LUMA Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica, o cualquier otra entidad correspondiente, para la instalación de alumbrado en la Carretera PR-17 en la jurisdicción de los Municipios de San Juan y Carolina; disponer la procedencia de fondos para las obras ordenadas; y para otros fines relacionados.”

(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA)

R. C. del S. 385

Por el señor Dalmau Santiago; la señora González Huertas; los señores Ruiz Nieves y Soto Rivera y la señora Rosa Vélez:

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación llevar a cabo todas las gestiones necesarias con LUMA Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica, o cualquier otra entidad correspondiente, para la instalación de alumbrado en la Carretera PR-129 en la jurisdicción de los Municipios de Arecibo, Hatillo, Camuy, Lares, Utuado y Adjuntas; disponer la procedencia de fondos para las obras ordenadas; y para otros fines relacionados.”

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

R. C. del S. 386

Por el señor Dalmau Santiago; la señora González Huertas; los señores Ruiz Nieves y Soto Rivera y la señora Rosa Vélez:

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación llevar a cabo todas las gestiones necesarias con LUMA Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica, o cualquier otra entidad correspondiente, para la instalación de alumbrado en la Carretera PR-10 en la jurisdicción de los Municipios de Arecibo, Utuado, Adjuntas y Ponce; disponer la procedencia de fondos para las obras ordenadas; y para otros fines relacionados.”

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

R. C. del S. 387

Por el señor Dalmau Santiago; las señoras González Huertas y Hau; los señores Ruiz Nieves y Torres Berríos y la señora Trujillo Plumey:

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación llevar a cabo todas las gestiones necesarias con LUMA Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica, o cualquier otra entidad correspondiente, para la instalación de alumbrado en la Carretera PR-52 en la jurisdicción de los Municipios de San Juan, Caguas, Salinas, Juana Díaz y Ponce; disponer la procedencia de fondos para las obras ordenadas; y para otros fines relacionados.”

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

R. C. del S. 388

Por el señor Dalmau Santiago, las señoras González Huertas y Hau, los señores Ruiz Nieves y Torres Berríos y la señora Trujillo Plumey:

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación llevar a cabo todas las gestiones necesarias con LUMA Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica, o cualquier otra entidad correspondiente, para la instalación de alumbrado en la Carretera PR-1 en la jurisdicción de los Municipios de Caguas, Guaynabo, San Juan, Cidra, Cayey, Aibonito, Santa Isabel, Ponce y Juana Díaz; disponer la procedencia de fondos para las obras ordenadas; y para otros fines relacionados.”

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

R. C. del S. 389

Por los señores Dalmau Santiago; las señoras González Huertas, García Montes, González Arroyo, Rosa Vélez; y los señores Ruiz Nieves y Soto Rivera:

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación llevar a cabo todas las gestiones necesarias con LUMA Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica, o cualquier otra entidad correspondiente, para la instalación de alumbrado en la Carretera PR-2 en la jurisdicción de los Municipios de San Juan, Guaynabo, Bayamón, Toa Baja, Dorado, Vega Alta, Vega Baja, Manatí, Barceloneta, Arecibo, Hatillo, Camuy, Quebradillas, Isabela, Moca, Aguadilla, Aguada, Añasco, Mayagüez, Hormigueros, San Germán, Sabana Grande, Guánica,

Yauco, Guayanilla, Peñuelas, Ponce; disponer la procedencia de fondos para las obras ordenadas; y para otros fines relacionados.”

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

R. C. del S. 390

Por el señor Dalmau Santiago y la señora Trujillo Plumey:

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación llevar a cabo todas las gestiones necesarias con LUMA Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica, o cualquier otra entidad correspondiente, para la instalación de alumbrado en la Carretera PR-30 en la jurisdicción de los Municipios de Caguas, Gurabo, Juncos, Las Piedras y Humacao; disponer la procedencia de fondos para las obras ordenadas; y para otros fines relacionados.”

(DESARROLLO DE LA REGIÓN ESTE)

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los asuntos.

SR. PRESIDENTE: Para que se continúe.

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO

La Secretaría da cuenta de los siguientes Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo:

Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el Senado ha aprobado los P. del S. 923 y 960.

Del Secretario del Senado, cinco comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando que el Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes en los P. del S. 414, 731 y 742; y las R. C. del S. 50 y 146.

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones informando que dicho cuerpo legislativo ha aprobado el P. de la C. 1204; y la R. C. de la C. 355, y solicita igual resolución por parte del Senado.

Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones informando a la Cámara de Representantes que el Senado ha aprobado los P. de la C. 1107 y 1363; la R. C. de la C. 258; y el Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1081 y al P. de la C. 1100, con enmiendas.

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho cuerpo legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en el P. de la C. 1160.

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho cuerpo legislativo, acordó en su sesión del martes, 7 de febrero de 2023, acordó solicitar la devolución de la R. C. de la C. 439.

Del Secretario del Senado, una comunicación informando a la Cámara de Representantes que el Senado reconsideró en su sesión del lunes, 6 de febrero de 2023, como asunto especial del día y en votación final, el P. de la C. 345, titulado:

“LEY

Para crear la “Ley de Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral en Puerto Rico,” para establecer la política pública de capacitación financiera (“financial literacy”) que se debe fomentar en la fuerza laboral en Puerto Rico para

promover la seguridad financiera y la preparación de las personas que trabajan para su retiro; establecer con carácter mandatorio el programa de capacitación financiera para todos(as) los(as) empleados(as) del sistema público; fomentar alianzas con el sector de recursos humanos de la empresa privada para promover la capacitación financiera para sus empleados(as); crear un Grupo Especial de Trabajo, compuesto por agencias públicas y organizaciones privadas para diseñar y emitir sus recomendaciones para el desarrollo de un programa voluntario de ahorro para el retiro para empleados(as) del sector privado; y para otros fines.”

y lo aprobó nuevamente utilizando como base el texto enrolado por la Cámara de Representantes, con las mismas enmiendas aprobadas por dicho cuerpo legislativo.

Del Secretario del Senado, siete comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando que el Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 414, 665 (Conferencia), 731 y 742; y las R. C. del S. 50, 146 y 185, debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a la Cámara de Representantes, a los fines de que sean firmados por su Presidente.

Del licenciado Carlos E. Rivera Justiniano, Secretario Auxiliar, Secretaría Auxiliar de Asuntos Legislativos y Reglamentos, Oficina del Gobernador, tres comunicaciones informando que el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha aprobado y firmado las siguientes Leyes:

Ley 33-2023

Aprobada el 3 de febrero de 2023.-

(P. de la C. 263) “Para enmendar el Artículo 12 de la Ley 171-2014, según enmendada, la cual suprime a la otrora Oficina de Asuntos de la Juventud y crea adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, un denominado “Programa de Desarrollo de la Juventud”, a los fines de agrupar y consolidar en una sola Ley las disposiciones relativas al “Programa de internados e investigaciones para estudiantes de maestría y doctorado”; derogar la Ley 157-2005; y para otros fines relacionados.”

Ley 34-2023

Aprobada el 3 de febrero de 2023.-

(P. de la C. 1131) “Para declarar la raza de Paso Fino como Patrimonio Nacional y Cultural de Puerto Rico.”

Ley 35-2023

Aprobada el 3 de febrero de 2023.-

(P. de la C. 1350) “Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley 154-2006, según enmendada, la cual declara el mes de mayo de cada año como el “Mes de la Radio” y el día 30 de mayo de cada año como “Día del Locutor”, con el propósito de declarar el último domingo del mes de mayo de cada año como el “Día de la Radio Ponceña”; y para otros fines relacionados.”

Del gobernador Pierluisi Urrutia, una comunicación notificando que ha impartido un veto expreso al P. de la C. 955 (Conferencia):

“3 de febrero de 2023

Hon. José Luis Dalmau Santiago

Presidente

Senado de Puerto Rico

Estimado señor Presidente Dalmau Santiago:

En días recientes la Asamblea Legislativa aprobó el Proyecto de la Cámara 955, cuyo título (según el texto enrolado, tras la aprobación del informe de comité de conferencia) lee como sigue:

“Para crear la “Ley para la Protección de los Consumidores de Plataformas de Ventas en Línea o *Marketplace*”, a los fines de adoptar normas que promuevan la transparencia en las ventas en línea; requerir información que provea garantías de confiabilidad al consumidor; conferir autoridad al Departamento de Asuntos del Consumidor y al Departamento de Hacienda para adoptar la reglamentación correspondiente; y para otros fines relacionados”

Según el historial de esta pieza legislativa, la misma se aprueba con la intención principal de atender un asunto de seguridad pública: combatir el hurto de mercancía en tiendas físicas, que luego es revendida en el ciberespacio.

No obstante, podemos notar cómo el lenguaje del texto enrolado del P. de la C. 955, está en conflicto con la "Consolidated Appropriations Act of 2023", comúnmente denominada "INFORM Consumers Act", específicamente sus disposiciones relativas a los mercados en línea. Este nuevo estatuto federal, establece una norma nacional para brindar transparencia a los consumidores mientras protege la privacidad y la seguridad de las pequeñas empresas que venden en los mercados en línea. Este estándar nacional se aplica a todos los vendedores que son "high-volume third-party sellers" que venden en Estados Unidos.

Es una sólida doctrina federal de que las normas que se establecen a nivel nacional tienen preminencia [sic] sobre las normas que se establecen por los estados y territorios.

Además, como parte del trámite de esta pieza legislativa, nos percatamos de que no se acogieron ciertas recomendaciones de enmienda que presentó el Departamento de Hacienda para lograr uniformidad con el Código de Rentas Internas de Puerto Rico (CRI). El objetivo principal de las enmiendas iba dirigido a atemperar definiciones que se encuentran en el P. de la C. 955 con figuras con características similares que aparecen en el CRI, tales como "Facilitador de Mercado" y "Vendedor de Mercado", que versan sobre las obligaciones bajo las disposiciones del Impuesto sobre Ventas y Uso ("IVU").

Quiero destacar que intentamos que los cuerpos legislativos pidieran esta medida de vuelta para poder hacer las enmiendas de rigor, pues estos esfuerzos resultaron infructuosos.

Por todo lo anterior, he impartido un veto expreso al Proyecto de la Cámara 955.

Atentamente,

{firmado}

Pedro R. Pierluisi”

La senadora Hau ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 227; el senador Bernabe; la senadora Rivera Lassén; y el senador Vargas Vidot han presentado el formulario de

coautoría para la R. C. del S. 132, con la autorización de la senadora Santiago Negrón, autora de las medidas.

El senador Morales ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 538, con la autorización del senador Rivera Schatz, autor de la medida.

El senador Aponte Dalmau; las senadoras García Montes, González Huertas; y el senador Zaragoza Gómez han presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 873, con la autorización de la senadora Hau, autora de la medida.

El senador Bernabe Riefkohl; las senadoras González Arroyo, Rivera Lassén y Trujillo Plumey han presentado el formulario de coautoría para los P. del S. 926 y 927, con la autorización de la senadora Rosa Vélez, autora de las medidas.

La senadora González Arroyo ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 1124, con la autorización de la senadora González Huertas, autora de la medida.

Las senadoras García Montes, Hau, Rosa Vélez; y el senador Ruiz Nieves han presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 1126, con la autorización del senador Dalmau Santiago, autor de la medida.

Las senadoras Hau, Rosa Vélez; y los senadores Ruiz Nieves y Vargas Vidot han presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 1127, con la autorización del senador Villafañe Ramos, autor de la medida.

Las senadoras García Montes, González Huertas, Hau, Rosa Vélez; y los senadores Ruiz Nieves y Torres Berríos han presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 1131, con la autorización de la senadora Trujillo Plumey, autora de la medida.

El senador Dalmau Santiago ha presentado el formulario de coautoría para la R. C. del S. 381, con la autorización del senador Ruiz Nieves, autor de la medida.

Los senadores Aponte Dalmau, Dalmau Santiago; la senadora González Huertas; el senador Matías Rosario; la senadora Rosa Vélez; y los senadores Torres Berríos y Vargas Vidot han presentado el formulario de coautoría para la R. del S. 736, con la autorización de la senadora Jiménez Santoni, autora de la medida.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. RUIZ NIEVES: Proponemos que se reciban los mismos.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, que se den por recibidos los Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo.

Señor Portavoz.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

SR. RUIZ NIEVES: Se ha recibido una comunicación de la Cámara de Representantes informando que dicho Cuerpo acordó solicitar la devolución de la Resolución Conjunta de la Cámara 439. Para que se autorice dicha petición y la medida sea devuelta al Cuerpo Hermano.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda. Que sea devuelta.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. RUIZ NIEVES: Se ha recibido una comunicación del señor Gobernador, honorable Pedro Pierluisi, notificando que ha impartido un veto expreso al Proyecto de la Cámara 955. Para que dicho veto no sea incluido en el Calendario de Votación Final del día de hoy.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. RUIZ NIEVES: Proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.

SR. PRESIDENTE: Adelante con el Orden de los Asuntos.

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones:

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes notificando que, en su sesión del lunes, 6 de febrero de 2023, el Senado acordó conceder su consentimiento para que dicho cuerpo legislativo pueda recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el martes, 31 de enero de 2023, hasta el martes, 7 de febrero de 2023.

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación notificando que, en su sesión del martes, 7 de febrero de 2023, dicho cuerpo legislativo acordó solicitar el consentimiento del Senado para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el martes, 7 de febrero de 2023, hasta el martes, 14 de febrero de 2023.

La senadora Santiago Negrón y el senador Ruiz Nieves han radicado la Petición de Información 2023-0052:

“Petición de Información al amparo de la Regla 18.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico (Resolución del Senado Número 13 del 9 de enero de 2017, según enmendada).

Comparecen los senadores que suscriben para solicitar que el Departamento de Hacienda, a través de su Secretario, Francisco Parés Alicea, haga entrega de la siguiente información o documentos al Senado de Puerto Rico en un término de diez (10) días:

En vista pública celebrada el 2 de febrero de 2023 por la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, al amparo de la Resolución del Senado 647, y a partir del testimonio del Secretario de Agricultura, y de otros deponentes, surgieron varias interrogantes sobre el recaudo y administración del “arancel del café” el cual, según dispone la Ley 166-2001, una vez cobrado por el Servicio de Aduanas Federal debe ser ingresado a una cuenta especial administrada por el Fondo Integral para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico (FIDA). Se ha alegado que hace varios años, probablemente desde el 2014, dichos recaudos no son transferidos al gobierno de Puerto Rico. Le requerimos que en un término que no exceda los 10 días laborables, nos remita la siguiente información:

1. Una relación, a partir del año 2010 y hasta el presente, de los recaudos por concepto del “arancel del café” transferidos anualmente por el Servicio de Aduanas Federal, o por la entidad sobre la cual recayera tal función, al gobierno de Puerto Rico, especificando para cada año la fecha y el monto de cada transferencia.
2. El balance actual de la cuenta especial creada por la Ley 166-2001.
3. Toda comunicación, memorando, directriz, reglamentación, informe o cualquier otro documento relacionado con el recaudo y transferencia del “arancel del café” suscrito, enviado o recibido por el Departamento de Hacienda a partir del año 2010 y hasta el presente.
4. Una relación de todos los productos sujetos al pago del “arancel del café.”

Del honorable Eliezer Ramos Parés, Secretario, Departamento de Educación, una comunicación contestando la Petición de Información 2022-0153 presentada por la senadora García Montes, y aprobada por el Senado el 15 de noviembre de 2022.

Del ingeniero Enrique Rosario Agosto, Director Ejecutivo Regional, Región Este, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, una comunicación contestando la Petición de Información 2023-0002 presentada por la senadora Hau, y aprobada por el Senado el 9 de enero de 2023.

Del honorable Ray J. Quiñones Vázquez, Secretario, Departamento de Recreación y Deportes, una comunicación contestando la Petición de Información 2023-0020 presentada por la senadora Rosa Vélez, y aprobada por el Senado el 12 de enero de 2023.

Del honorable Eliezer Ramos Parés, Secretario, Departamento de Educación, una comunicación contestando la Petición de Información 2023-0022 presentada por la senadora Santiago Negrón, y aprobada por el Senado el 18 de enero de 2023.

Del honorable Eliezer Ramos Parés, Secretario, Departamento de Educación, una comunicación contestando la Petición de Información 2023-0033 presentada por el senador Zaragoza Gómez, y aprobada por el Senado el 18 de enero de 2023.

De la licenciada Zahira A. Maldonado Molina, Directora, Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, una comunicación contestando la Petición de Información 2023-0038 presentada por la senadora Rosa Vélez, y aprobada por el Senado el 23 de enero de 2023.

De la ingeniera Sylvette M. Vélez Conde, Directora Ejecutiva, Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, una comunicación contestando la Petición de Información 2023-0039 presentada por la senadora Santiago Negrón, y aprobada por el Senado el 30 de enero de 2023.

De la licenciada Shylene De Jesús Rivera, Subdirectora Ejecutiva, Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, una comunicación contestando la Petición de Información 2023-0045 presentada por la senadora Rivera Lassén y el senador Bernabe Riefkohl, y aprobada por el Senado el 30 de enero de 2023.

Del honorable Eliezer Ramos Parés, Secretario, Departamento de Educación, una comunicación contestando la Petición de Información 2023-0046 presentada por la senadora Rivera Lassén y el senador Bernabe Riefkohl, y aprobada por el Senado el 30 de enero de 2023.

Del doctor Luis A. Ferrao, Presidente, Universidad de Puerto Rico, una comunicación contestando la Petición de Información 2023-0047 presentada por la senadora Rivera Lassén y el senador Bernabe Riefkohl, y aprobada por el Senado el 30 de enero de 2023.

De la señora Blanca P. Fernández González, Directora Ejecutiva, Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, una comunicación contestando la Petición de Información 2023-0040, presentada por la senadora Santiago Negrón, y aprobada por el Senado el 30 de enero de 2023.

De la señora Blanca P. Fernández González, Directora Ejecutiva, Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, una comunicación solicitando una prórroga hasta el 10 de febrero de 2023 para contestar la Petición de Información 2023-0040, presentada por la senadora Santiago Negrón, y aprobada por el Senado el 30 de enero de 2023.

Del licenciado Jaime F. Rivera Emmanuelli, Director Ejecutivo, Comisión de Juegos, una comunicación solicitando una prórroga de treinta días para presentar el Informe Anual sobre la Implementación del Sistema de Video Juego Electrónico, requerido por la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico”.

De la señora Elizabeth Morales Ochoa, Contralor, Centros Sor Isolina Ferré, Inc., una comunicación remitiendo el informe narrativo y estadístico de julio a diciembre de 2022.

Del señor Alexis A. Berríos Marrero, Director Ejecutivo Interino, Comisión de Juegos, una comunicación remitiendo el informe y evaluación en torno al impacto de la legislación de las tragamonedas sobre el sector hotelero y la industria del turismo, requerido por la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada.

Del señor Raúl Manuel Enrique Núñez Negrón, Director Ejecutivo, Fundación Luis Muñoz Marín, una comunicación remitiendo el informe anual correspondiente al año fiscal 2021-2022, según requerido por la Ley Núm. 68 de 3 de julio de 1986, según enmendada.

Del doctor Luis A. Ferrao, Presidente, Universidad de Puerto Rico, una comunicación remitiendo la Certificación Anual sobre el Cumplimiento de la Ley 136-2003, según enmendada, correspondiente al Año Fiscal 2021-2022.

De Carmen Laracuenta Rodríguez, Municipio de Hormigueros, una comunicación refiriendo el Informe sobre los Fondos Legislativos Asignados y su uso otorgado del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022, según requerido por la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, firmado por el honorable Pedro J. García Figueroa, Alcalde y por Miriam Irizarry Bobé, Directora de Finanzas.

De la ingeniera Sylvette M. Vélez Conde, Directora Ejecutiva del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, una comunicación sometiendo:

1. la Resolución 2022-130 en la que adoptan denegar la transferencia libre de costo de la antigua escuela elemental Félix Rosario Ríos, en el barrio Pueblo, Arecibo, Puerto Rico, a favor del Municipio de Arecibo, según requerido por la Resolución Conjunta 60-2022;
2. la Resolución 2022-131 en la que adoptan denegar la transferencia libre de costo del terreno e instalaciones que albergan la antigua escuela superior Dra. María Cadilla, en Sabana Hoyos, Arecibo, Puerto Rico, a favor del Municipio de Arecibo, según requerido por la Resolución Conjunta 61-2022.

De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor de Puerto Rico, una comunicación remitiendo el Informe de Auditoría M-23-13 del Municipio de Guayama.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. RUIZ NIEVES: Proponemos que se reciban las mismas.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda, que se den por recibidos.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente, se ha recibido una comunicación de la Cámara de Representantes notificando que en su sesión del martes, 7 de febrero de 2023 dicho Cuerpo acordó solicitar el consentimiento del Senado de Puerto Rico para recesar sus trabajos por tres (3) días consecutivos desde el martes, 7 de febrero de 2023 hasta el martes, 14 de febrero de 2023. Para que se consienta en dicha solicitud y petición, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. RUIZ NIEVES: El inciso c., contiene la Petición de Información 2023-0052, presentada por la senadora Santiago Negrón y este servidor, Ruiz Nieves, solicitando al Departamento de Hacienda que provea la información requerida dentro de los términos de diez (10) días. Para que se apruebe dicha Petición y se conceda hasta el 21 de febrero de 2023 para contestar dicha solicitud, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. RUIZ NIEVES: Se ha recibido una comunicación del Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos solicitando una prórroga de treinta (30) días para presentar el Informe Anual sobre la implementación del Sistema de Vídeos de Juegos Electrónicos requeridos por la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987. Queremos recalcar que una vez que el Senado de Puerto Rico no tiene facultad para otorgar prórrogas, alterando así los términos establecidos por la ley. Por lo tanto, se notifica al Cuerpo que esta es la segunda petición de prórroga de tres (3) años que se solicita a la Comisión de Juegos sobre un Informe Anual que está obligado a rendir desde que se le impuso dicha obligación por ley hace tres (3) años. Esto se suma al hecho de que no surge del expediente que hayan solicitado o sometido el informe correspondiente al año 2021, siendo esto un patrón consistente de incumplimiento. Solicitamos que se deje saber a la Comisión de Juegos que no es posible otorgar la prórroga solicitada, ya que por otro lado este asunto será referido a la Oficina de Asesores del señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda. Y se refiere la situación planteada por el compañero Portavoz referente a una prórroga que no está este Senado autorizado en otorgar porque lo establece la ley. Y ante el incumplimiento de la entrega de informes anteriores se le refiere a la Oficina de Asuntos, de Asesores Legales del Presidente.

SR. RUIZ NIEVES: Muchas gracias, señor Presidente.

De igual manera, señor Presidente, solicitamos continuar con el Orden de los Asuntos.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

MOCIONES

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame Anejo A

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame:

Moción 2023-0058

Por la senadora Jiménez Santoni:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Rafael Rivera Rivera, Modesta Irizarry Ortiz, Samuel Lanzó Escobar, Sonia Martínez Quiñones, Edith Verdejo Hernández, Milagro Quiñones Ortiz, Mary Cruz Rivera Clemente, Alexis Correa Allende, Danaliz Dávila Fuentes, Cecilia Cepeda Carrasquillo, Veima I Andrades Correa, Zoleyda Osorio Sánchez, Yael Suarez, Rosa Parrilla Márquez, Alicia Carrasquillo Ortiz, Dalia M. Pizarro Manso, Vilma Villarán Casanova, Belén Morales Cepeda, Hilda Pizarro De Jesús, Elfidia Pizarro Parrilla, Wilfredo Fuentes, Wanda Velázquez García, Angélica Paz Fuentes, Yajaira Rosa Pizarro, Carlos Carrasquillo Rivera, Wanda Calderón Ayala, María Luz Navarro Rivera, Joaquín Sánchez Pizarro, Edgard Garry Williams Rivas, Amarilis Escobar Ortiz, Kenny Díaz Cruz, Vidalina Calderón Fuentes, Nuria V. Escalera, Mary Parrilla Pizarro, Gisela Suárez Fuentes, Carmen J. Calderón López, Glenda L. Cepeda Ramos, Tanisha Gaspar Clemente, María Virginia Carrasquillo Clemente, Irma N. Delgado Arroyo, Armindo Rodríguez Velázquez, Marelyn Rodríguez Ortiz, Mayra Martínez Santiago, Amaury Reyes Ballista, Luz Nazario Fuentes,

Ivette Ruiz Santiago, María Martínez Carrasquillo, Julio Cirino Parrilla, Luis Calderón Pérez, Luis A. Ortiz López, Augusto Andrades Correa, Aracelys Pizarro, Carlos J. Quiñones, Rosa J. Calcaño, Milliam Carrasquillo Cueva, Glenda Lee Rivera Cepeda, Omayra Allende García, Leslie Mercado, Agustín Matos Casado, Zuleima Correa Andrades, Sunchie K. Aguayo Parrilla y a Milagros Miranda Quiñones, líderes comunitarios y voluntarios de Loíza, con motivo de la semana del Líder y los Grupos Comunitarios y de la Autogestión Comunitaria.

Moción 2023-0086

Por la senadora Soto Tolentino:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un segundo mensaje de felicitación y reconocimiento a Carlos J. García Matos; Daniel Padilla Torres; Jay G. Pérez Santiago; José R. Colón Rivera; Luis G. Perales Dones; María L. Serrano Nieves; Alberto Capó Cordero; Jacqueline Acevedo Colón; Edwin Gely Morales; Ángel Núñez Reyes; David De Jesús Echevarría; Salvador Valentín Lebrón; Bernardo De Jesús Silva; Roberto Bermúdez Burgos; Luis M. Rivera Lebrón; Digna J. Rivera De León; Cesar Velázquez Díaz; Racmel Hernández Rivera; Felipe García Rodríguez; Herminio Rodríguez Álvarez; Rosa M. Meléndez Torres; Oscar Sánchez Figueroa; Yarelis N. Díaz Martínez; Javier Rodríguez Méndez; Eric D. Rodríguez González; Janice Elías Rivera; Charitza Sánchez Báez; Odalys Meléndez Santiago; y a Carmen L. Berlinger Pabón, integrantes del Distrito de Patillas, quienes serán reconocidos como Valores del Año del Área de Guayama, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0087

Por la senadora Soto Tolentino:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Roberto L. Diaz Rivera; Yamiliz E. Matos González; Francheska Agrón Rivera; Benny Rodríguez Laracuente; Maribelise Pérez Delgado; Víctor Fontánez Mendoza; Ángel Rodríguez De Jesús; Keila M. Quiñones Martínez; Niviana M. Cartagena Ortiz; Juan C. Cruz Claudio; Orlando M. López López; Marvin Herpin Delgado; Juan Martínez Gerena; Braulio Sánchez Castro; Mayra García Delgado; Tomas Morales Cotto; Gladis Meléndez González; y a los integrantes del Distrito de Las Piedras, quienes serán reconocidos como Valores del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0088

Por la senadora Hau:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Shaquille Rivera Vicente, por motivo de su reconocimiento por el Comité Paralímpico de Puerto Rico como Deportista Masculino Destacado.

Moción 2023-0089

Por la senadora Trujillo Plumey:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento póstumo a la trayectoria musical de Julio César Rojas López.

Moción 2023-0090

Por la senadora Hau:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a los integrantes del equipo Jardineros de Aibonito, así como a toda su fanaticada, por haber conseguido el subcampeonato de la Confederación de la Liga Central del Béisbol Aficionado.

Moción 2023-0091

Por el senador Aponte Dalmau:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de admiración y felicitación a Antonio Colón Correa, por su carrera y triunfos alcanzados como empresario puertorriqueño.

Moción 2023-0092

Por la senadora Rosa Vélez:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Tomás J. Figueroa Acevedo; Wanda E. Rivera García; Alex Novoa González; Edwin P. López Cuevas; Rafael O. Asencio Terrón; Odalys I. Santos Figueroa; Edwin Acevedo Sandoval; Miguel Vélez Vargas; Steve Padilla Cáceres; Rubén Vázquez Padró; Edwin P. López Cuevas; Luis O. Parés Adorno; Joel Rodríguez Benítez; Julio C. Castillo de Jesús; Yomaira Jiménez Tirado; Jesús G. Castillo Cruz; Alex Novoa González; Martín O. Cruz Nieves; Carlos Vélez Santiago; José E. Portalatín González; Daniel Sonera Rivera; Edgardo Serpa Ocasio; Iván Santalis Jiménez; Francisco Cruz Maldonado; Rolando Laviena Torres; Yancel M. Bonet Concepción; Miguel González Figueroa; Edgar M. Molina Lugo; Edgardo Quiles Alicea; Jorge I. Trinidad Gómez; Roberto Mercado Román; Héctor A. Medina Montalvo; Ubaldo Vélez Acevedo; Pedro L. Ramos Adorno; Jorge Vélez Vargas; Marcelino Nieves Crespo; Alexander Lugo Viera; Tomás J. Figueroa Acevedo; Josué Camerón Ruiz; Alexis Rodríguez Cancel; Sammy Hernández Allende; Isaías Ayala Ortiz; Heriberto Arroyo Sierra; Pedro Ríos Matías; Daniel Molina Ocasio; Nelson L. Molina Molina; Aníbal A. Rodríguez Hermína; Héctor L. Figueroa Padua; José de la Rosa Reyes; Eliazar Aquino López; Manuel A. Rodríguez Collazo; Luis M. Reyes Medina; Elvin Irizarry Jiménez; Rafael A. Herrera Nieves; William Méndez Guzmán; Luis A. Serrano Concepción; Joveany Ayala Camerón; Osvaldo Acevedo Soto; Carlos González Velázquez; Félix R. Sánchez Suárez; Juan P. Montalvo Pérez; Axel Ríos Carrasco; Luis Arroyo Montalvo; Ángel J. Natal García; Deborah Figueroa Lugo; Ana K. Zamot Vélez; Nicole Rodríguez Mercado; Brenda L. Mercado Concepción; Glorimar Rivera Rodríguez; Wanda Rivera García; Melba Santiago Pérez; Glorimar Cuevas Paoli; Martha Figueroa Pagán; Linette Berrios Arroyo; Jeanette Pérez Guzmán; Lizmarie Larregui Vázquez; María Otero Rodríguez; Iriana Hernández Román; Maritza Ramírez Morales; Irmara Pérez Terrón; Liza M. Díaz Cruz; Yahaira Montalvo Pabón; Nellie I. Pérez Díaz; Guillermina Figueroa Cortés; Raquel Reillo Rosario; Leslie Y. López López; Odalys I. Santos Figueroa; Nilda T. Maisonet Rivera; Albertina Santiago Acevedo y Elba Cortés Rosario, quienes serán reconocidos como Valores del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0093

Por la senadora Padilla Alvelo:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a José Cintrón Martínez, Jeannette Sánchez Concepción, Orlando J. López Serrano, Raúl D. Hernández Torres, Jaibelle Moya González, Carol E. Hernández Medina, Carmen De Jesús Nieves, Pedro Marrero Padilla, Idalia Zayas Pérez, Johana Cabello Guzmán, Madeline Montero Ramírez, Luis Rosario Valenzuela, Gabriel Vélez Lamourt, Kecia M. Justiniano Soto, Carlos A. Rodríguez Arroyo, Miguel A. Vázquez Negrón, Maricelys González Irizarry, Edwin Narváez Galarza, Orlando Pérez Morán, Keysha Cruz Soto, Juan Alicea López, Katiayaris Morales Pérez, Francisco Traverso Vera, Alberto Miranda Rivera, John Medina Rosas, Gina M. Díaz Santiago, David Beltrán Montes, Marlyn Gracia Rosado, Omar Crespo Galán, Miguel Camacho Díaz, Tamara Rodríguez Feijoo, Benjamín Valentín Pérez, Xiomara Monroing Santiago, Oscar Centeno Cosme, Víctor Díaz Rivera, Jaime Matos Molina, Belitza Onofre Otero, Carmelo Rondón García, Saraí Cruz Castro, Juan C. Rodríguez Rivera, Iván E. Santiago Sánchez, Fernando Fernández González, Jesús M. Alicea Ortiz y Daisy Silva Batista, quienes serán reconocidos como Valores del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0094

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Vanessa Flores Rosado, quien será reconocida como Valor del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0095

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Juan I. Rodríguez Valentín, quien será reconocido como Valor del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0096

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Daniel Zambrana Ramos, quien será reconocido como Valor del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0097

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Félix Rodríguez Matos, quien será reconocido como Valor del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0098

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a José L. Ortiz Maldonado, José M. Rodríguez Pagán, Jesús M. Oyola Nieves, Gilberto Espinosa Cruz, Airell A. Cruz Espinosa, Luis M. Santiago Rodríguez, Enid Aquino Figueroa, Krishna Figueroa Colón, Nelson D. González Rivera, Carmen M. Figueroa, Wilfredo Maldonado Talavera, Sonia Lozada Rosario, Juan C. Gerena Ramírez, Erik Álvarez Román, Juan. R. Otero Rosario, Ángel M. Matos Sánchez, Omar Rivera López, William Quiñones Borgos, Wilmarie Quiñones Pérez, Gamalier Sánchez Flores, María González Pagán, Alexander Morales Olmeda, Arnaldo Echevarría Toro, Katherine M. Vélez Sánchez, Christopher O. Ramírez Sepúlveda, Alfredo A. Sierra Rodríguez, Evelyn M. Velázquez Ayala, Roberto E. Ramos Ortiz, Luis E. León Zayas, Emely Ortiz Valentín, Jonathan Velázquez De Jesús, Juan C. Burgos León, Eimy Olmo Rodríguez, Jaime Garced Rodríguez, Joel Guzmán Pibernus, Gloria Lynn Rodríguez Torres, Leslie Ann Ortiz, Alejandro Almodóvar Quiles, quienes serán reconocidos como Valores del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0099

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Iván Bahr Silva, quien será reconocido como Valor del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0100

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Ivy A. González Ortiz, quien será reconocida como Valor del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0101

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Emmanuel Piñero Rodríguez, quien será reconocido como Valor del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0102

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Alexander Cotto Villanueva, quien será reconocido como Valor del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0103

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Javier González Gómez, quien será reconocido como Valor del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0104

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Javier Pastrana Monserrate, quien será reconocido como Valor del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0105

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Raymond Vázquez Vega, Samuel Burgos Ortiz, Noraida Alicea Villegas, Héctor M. Vélez Rodríguez, Víctor M. León Colón, Emanuel Rosario Cintrón, Efraín Justiniano Alicea, Keven Bracero Rodríguez, Luis A. Ortiz Labrador, José A. Rivera González, Nancy Méndez Acevedo, Samuel Silva De Jesús, Abraham Sánchez Cordero, Antonio L. Sostre Mateo, Víctor Agront Class, Noel A Real Báez, Ángel Ocasio Jiménez, Luis C. Sanabria Vélez, Carlos A. Pérez Rosado, Juan J. Carrasquillo Méndez, Julio E. Maysonet García, Karla Y. García Santana, Johanna Rodríguez Santiago, Hernán Olivera Pagan, Adrián M. Claudio González, Reinaldo González Montes, Elí Alemán Santana, Antonio A. Rodríguez Villegas, Víctor Figueroa Rivera, Alexander Morales López, Juan C. Siaca Fontánez, Gustavo Ortiz Fernández, Aileen R. Ramirez Toledo, Yaritxa E. Matos Martínez, Lissbell Mateo Rivera, Héctor Soto Becerra, Juan R. Valentín Reyes, Jennifer Concepción Matos, Kevin E. Cardé Rosado, Eric Rodríguez Melian, Edier M. Pérez Padilla, Víctor E Ortiz Mercado, Luis M Torres Padilla, Kelvin Torres Padilla, Samuel E. Santiago Santiago, Cristian J. Hiraldo Viera, John B. Pesante Méndez, Manuel O. Joy Marrero, Alberto Román Ramos, Josué Santiago Carrasquillo, Arelie Ortega Goveo y a Jovanie Cruz Soto, quienes serán reconocidos como Valores del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0106

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Kelvin Rivera Colón, quien será reconocido como Valor del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0107

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Billy Irizarry Vega, quien será reconocido como Valor del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0108

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a David Beuchamp Pagán, quien será reconocido como Valor del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0109

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Johanna Feliciano Ortiz, quien será reconocida como Valor del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0110

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Elvin Santana Zayas, quien será reconocido como Valor del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0111

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a José Barreto Calderón, Jesse Ramos Ortiz, José Araya Rivera, Oswald Torres López, y a Juan Román Velázquez, quienes serán reconocidos como Valores del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0112

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Héctor H. Rivera Rolón, quien será reconocido como Valor del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0113

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Brenda L. López Rodríguez, quien será reconocida como Valor del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0114

Por el senador Morales:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Ángel Rosario Meléndez, quien será reconocido como Valor del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0115

Por el senador Matías Rosario:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Benjamín Rodríguez Bermúdez, Esteban Cintrón Valentín, José F. Martínez González, Gilberto Barreto Hernández, Carmen I. Cruz Colón y a Maritza Rosario, quienes serán reconocidos como Valores del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0116

Por la senadora Padilla Alvelo:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Wilfredo Hernández Rivera, Normando Rodríguez Ojeda, Javier Cáceres Pérez, Tomas Nieves Vaello, Roberto Báez Guzmán, Ramón Cuevas Molina, Edwin Pérez Hernández, Stephen Ríos Figueroa, Rafael Casanova Tirado, Víctor M. Domínguez Quiles, Miguel Ferrer Santos, Santos Medina Félix, Raúl Ortiz Torres, José L. Ramírez Vilches, Alfred Rivera Rodríguez, Luis M. Santana Rivera, Amaury Santiago Fonfrías, José A. Then Reyes y a Máximo A. Reynoso Fondeur, quienes serán reconocidos como Valores del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0117

Por la senadora Soto Tolentino:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Roberto Flores Flores, David Correo Zayas, Wally A. Torres Roque, Joely Vicente Cruz, Jesús M. Rodríguez Colón, Blanca I. Román Correa, Anthony Hernández Castro, Jesús M. Torres Ramírez, Reimundo Quiñones Castro, Lizandra Aponte Rodríguez, Alexander Meléndez Rivera, Anthony O. Egea Guadarrama, Hilda González Báez, Yolanda Vázquez Martínez y a quienes integran la Unidad Motorizada y al CIC del Área de Caguas, quienes serán reconocidos como Valores del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0118

Por la senadora Soto Tolentino:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Artemio López Velázquez, por motivo de su homenaje al dedicársele el Festival del Chapín en Naguabo.

Moción 2023-0119

Por la senadora González Huertas:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Adán Pardo Rivera, Alberto I. Torres Ramirez, Alberto L. Torres Ramírez, Alex Ruiz Vázquez, Alexander Hernández Flores, Ana V. Jiménez Puello, Ángel Álvarez Boneta, Ángel Frontanes Yeyé, Ángel I. Sepúlveda Albino, Ángel L. Negrón Maldonado, Ángel M. Ortiz Monche, Ángel Vélez Collazo, Ann Marie Collier, Anthony Miranda Rodríguez, Arelis Nieves Feliciano, Ariel Rodríguez Valentín, Belkis X. Merle MC Dougall, Benjamín J. Nieves Ayala, Betsy Febus Dávila, Brenda L. Vargas Echevarría, Brunilda Borrero Torres, Carlos A. Soto Soto, Carlos Guzmán Velázquez, Carlos Hernández Torres, Carlos J. Feliciano Cruz, Carlos L. Cepero Pagán, Christian Nieves Gutiérrez, Confesor Heredia Morales, Cristóbal Robles Rivera, Daniel Laboy Colón, David Segarra Segarra, Diomara Cintrón Heredia, Domingo Núñez Gracia, Edgardo Castro González, Edgardo Rodríguez Santiago, Eduardo Ruiz Pineda, Edwin González Díaz, Edwin Martínez Vargas, Edwin Torres Maldonado, Efraín Ortiz Rullán, Emeridaly Figueroa Cruz, Erhard Vázquez Morales, Ermelinda Miranda Méndez, Esteban Méndez Soto, Eusebio Lugo Román, Evelyn Mayoly Rodríguez, Fabian J. Nazario González, Félix Guilbe Lugo, Ferdinand De Jesús Sepúlveda, Frankie Robles Candelaria, Gabriel Quiñones Cardona, Geraldine Rodríguez Pagán, Gerardo Rivera Olivencia, Glorimar Ortiz López, Graciela Santiago González, Haydee Soria Reyes, Héctor R. Natal Santiago, Henry J. Cruz Casanova, Herminio Ramos Rivera, Iris M. Maldonado Rosa, Isable González Quiñones, Ismael A. Ruiz Alicea, Itza G. Ramírez Colón, Ivelisse Serrano Torres, James P. Blanchard Irizarry, Janice Vega Vélez, Javier Estrella Cerezo, Jeannette Torres Colón, Jennifer Ruiz León, Jobannie Meléndez Cruz, Jonathan González Martínez, José A. Bonillas Díaz, José A. Colón Mercado, José A. Negrón Colón, José L. Díaz Heredia, José M Pérez Montes, José M. Bracero Sepúlveda, José M. Toro Laboy, José M. Bracero Sepúlveda, Juan Astor Rodríguez, Juan C. Vázquez Torres, Juan E. Pérez Rivera, Juan L. Laracuenta Nieves, Julio C. Nieves Rosado, Katiana Cedeño Martínez, Keila D. Santana Feliciano, Kiomarice Santiago Rodríguez, Leslie K. Vargas Román, Lidia I. Pérez Ruiz, Lourdes M. Colón Oliveri, Luis A. Pérez Oliveri, Luis A. Santiago Malaret, Luis Correa Rodríguez, Luis Maldonado González, Luis O. Correa Pérez, Luisa Torres Ramos, Marcos A. González Vázquez, Margarita Colán Ortiz, María de los Ángeles Ortiz Santiago, María Guzmán Torres, María I. Colón Santiago, María T. Fernández Morales, Maribel Martell Gueits, Maritza Feliciano Badillo, Maritza Gracia Rodríguez, Melissa Silva Rivera, Michael Gracia Rivera, Miguel A. López Cherena, Milagros Nieves Rodríguez, Militza Rodríguez Pérez, Moisés L. Colón Rivera, Myrna S. Serrano Irizarry, Nancy I. Rivera Morales, Nelson Arroyo Rivera, Nelson Ortiz Ortiz, Noel A. Rosado Butler, Noel Rivera Miranda, Nolan Rafucci Rodríguez, Obdulio Padilla Pérez, Oscar E. Varela Negrón, Pedro S., Echevarría Pagán, Radamés Pagán Mercado, Rafael Reyes Mercado, Ramón D. López Muñiz, Ramón L. Santiago Ortiz, Roberto Gómez Pérez, Rosa L. Cornier Albarrán, Rosalina Álvarez Maldonado, Rowina Ponce Orengo, Saúl Santiago Maralet, Sigfredo Cruz Martínez, Taira N. Medina Pérez, Víctor L. Serrano Oquendo, Wanda I. Cortés

Vázquez, Wilberto Morales Miranda, Wilfred Santiago García, Wilfredo Morales Miranda, Wilfredo Nieves Román, Yolanda E. Ortiz Ortiz, Yolanda Reyes González, Yvette Rodríguez Torres, Zulmarie Rodríguez Quiñones y a quienes integran la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles, Plan Zona, y la División de Carreteras del Área de Ponce, quienes serán reconocidos como Valores del Año, por motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico.

Moción 2023-0120

Por la senadora Trujillo Plumey:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Beatriz y Efraín José Archilla, así como a locutores, periodistas, panelistas, personal técnico, operadores de control y grabaciones, gerenciales, administrativos y demás recursos humanos que integran la emisora radial WALO Radio 1240 AM, con motivo de la celebración de su sexagésimo quinto aniversario.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente, proponemos que se apruebe el Anejo A del Orden de los Asuntos.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si o hay objeción, aprobado el Anejo A.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. RUIZ NIEVES: Para unir a su honorable Presidente a las Mociones 2023-0058 hasta las Mociones 2023-0086 y a la 2023-0120.

Señor Presidente, corrigiendo, para unirlo a usted a todas las Mociones del Anejo A.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente, de igual manera, para unir a la compañera Trujillo Plumey a las Mociones 87, 117 y 118.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda. Que se una a la compañera.

SR. RUIZ NIEVES: De igual manera, señor Presidente, para unir a este servidor a las Mociones 0086 hasta las Mociones 00119.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda. Que se una al compañero.

SR. RUIZ NIEVES: De igual manera, señor Presidente, solicitamos autorizar a la Comisión de Ética que continúe los trabajos en reunión ejecutiva hasta las tres pm (3:00 p.m.) en el día de hoy, en la misma convocada en el Salón de Mujeres Ilustres.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?

SR. RUIZ NIEVES: A las tres (3:00), a las tres (3:00).

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.

SR. RUIZ NIEVES: Y, señor Presidente, de igual solicitud, a la Comisión de Bienestar Social hasta las cinco pm (5:00 p.m.) en el Salón de Mujeres Ilustres.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda. Que se continúe con el Orden de los Asuntos.

ASUNTOS PENDIENTES

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente, para que los Asuntos Pendientes permanezcan en dicho estado.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda.

(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 791, P. del S. 977, P. del S. 1047; P. de la C. 1053 (rec.); R. C. de la C. 186).

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. RUIZ NIEVES: Para continuar con el Orden de los Asuntos.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. RUIZ NIEVES: Para comenzar con la lectura del Calendario.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, que se dé lectura al Calendario de Órdenes Especiales del Día de hoy.

CALENDARIO DE LECTURA

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 45, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

“LEY

Para enmendar el Artículo 5.02 de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” con el propósito de expandir los requisitos para ocupar el cargo de Comisionado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace tres años fue aprobada la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de reorganizar las agencias del Gobierno de Puerto Rico enfocadas en la seguridad del pueblo y así, facilitar las operaciones de agencias gubernamentales como el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Sin embargo, este Negociado mantuvo su objetivo principal de “proteger a nuestros habitantes en situaciones de emergencias o desastres que afecten a la Isla y que se le provea de la forma más rápida y efectiva la asistencia necesaria para la protección antes, durante y después de éstos asegurando la protección de vida y propiedades”.

Este Negociado es uno de seguridad y protección de vida que debe, en el mejor interés del Ejecutivo, estar en conexión directa con la Oficina del Gobernador y estar en sintonía con la política pública del gobierno. Por tanto, requiere de una persona que no solamente sea de la entera confianza del Gobernador para dirigir sus esfuerzos en la dirección correcta, si no que también posea un vasto

conocimiento de las áreas que maneja el Negociado además de probada experiencia y destrezas en el manejo de emergencias.

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende menester aclarar y expandir los requisitos necesarios que un candidato debe poseer para ocupar el cargo de Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 5.02 de la Ley ~~Núm.~~ 20-2017, según enmendada para que lea como sigue:

“Artículo 5.02. — Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; Autoridad.

La autoridad suprema en cuanto a la dirección del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres será ejercida por el Gobernador de Puerto Rico, pero la administración y supervisión inmediata estará delegada en el Secretario del Departamento de Seguridad Pública del Gobierno de Puerto Rico.

Se crea el cargo de Comisionado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres quien estará a cargo de las operaciones diarias del Negociado. El Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres será nombrado por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. La posición de Comisionado del Negociado será clasificada bajo el servicio de confianza y la persona nombrada ocupará el cargo a discreción del Gobernador. Empero, la persona que ocupe este cargo *deberá tener conocimiento y destrezas en administración*, evidenciará haber obtenido, como mínimo, un grado académico de maestría de una institución universitaria debidamente acreditada *o contar con vasto conocimiento en la materia, y acreditando, al menos, 6 años de experiencia y destrezas en las áreas que maneja el Negociado y en manejo de emergencias y administración de desastres* **[y deberá tener conocimiento y destrezas en administración o contar con no menos de cuatro (4) años de experiencia en asuntos de seguridad, manejo de emergencias y administración de desastres]**.

El Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres establecerá por reglamento el orden de sucesión en caso de su ausencia, incapacidad o muerte.”

Sección 2.- Cláusula de Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite, o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha resolución, dictamen o sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite, o parte de esta Ley que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite, o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. La Asamblea

Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

Sección 3.- Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.”

“INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, previo estudio y consideración del **P. del S. 45**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, **con las enmiendas** incorporadas en el Entrillado Electrónico que se acompaña y que se hace formar parte de este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 45 propone enmendar el Artículo 5.02 de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” con el propósito de expandir los requisitos para ocupar el cargo de Comisionado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; y para otros fines relacionados

INTRODUCCIÓN

Según reconoce el autor de la medida en la Exposición de Motivos de la misma, la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, fue aprobada con el propósito de reorganizar las agencias del Gobierno de Puerto Rico enfocadas en la seguridad del pueblo y así, facilitar las operaciones de agencias gubernamentales como el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. No obstante, este Negociado mantuvo su objetivo principal de “proteger a nuestros habitantes en situaciones de emergencias o desastres que afecten a la Isla y que se le provea de la forma más rápida y efectiva la asistencia necesaria para la protección antes, durante y después de éstos asegurando la protección de vida y propiedades”.

Este Negociado es uno de seguridad y protección de vida que debe, en el mejor interés del Ejecutivo, estar en conexión directa con la Oficina del Gobernador y estar en sintonía con la política pública del gobierno. Por tanto, requiere de una persona que no solamente sea de la entera confianza del Gobernador para dirigir sus esfuerzos en la dirección correcta, si no, que también posea un vasto conocimiento de las áreas que maneja el Negociado además de probada experiencia y destrezas en el manejo de emergencias.

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende menester aclarar y expandir los requisitos necesarios que un candidato debe poseer para ocupar el cargo de Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación del presente Proyecto, la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano solicitó diversos memoriales explicativos relevantes al proceso de análisis. Como resultado de esto, se analizaron los memoriales explicativos sometidos ante esta Honorable Comisión de las siguientes personas o entidades: el Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y el Departamento de Justicia. Veamos.

Departamento de Seguridad Pública

El **Departamento de Seguridad Pública (DSP)** señaló, en su memorial, coincidir con el autor de la medida, en el sentido de que resulta necesario aclarar y expandir los requisitos necesarios que un candidato debe poseer para ocupar el cargo de Comisionado. Destacó que en el quehacer legislativo y en la redacción y aprobación de medidas legislativas, surgen instancias en las cuales el texto de la Ley queda sujeto a varias interpretaciones, debiendo ser aclarado por los Tribunales, o mediante posteriores enmiendas técnicas presentadas por la propia Asamblea Legislativa.

A manera de ejemplo, resaltó que el texto vigente de la Ley Núm. 20, supra, pudiera impedir que personas altamente capacitadas para ocupar el cargo de Comisionado del NMEAD cualifiquen para ello por no cumplir con los requisitos mínimos del puesto. Ante tales circunstancias, el Negociado es de la opinión que se requiere la intervención de esta Honorable Asamblea Legislativa para aclarar y expandir expresamente los requisitos necesarios para dicho cargo. Sobre este particular, considera el DSP que la enmienda propuesta garantiza que el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres pueda ser dirigido por profesionales que cuenten con otros grados académicos incluyendo bachillerato, como sería el caso de un ingeniero, u otros grados profesionales como abogados, entre otros. Ello incluye, además, aquellos candidatos que no cuenten con una maestría, pero posean vasta experiencia en un trabajo equivalente realizado en agencias federales, en las fuerzas armadas, o incluso en el propio NMEAD; siempre y cuando éstos cuenten con conocimiento y experiencia en las áreas que maneja el Negociado y en manejo de emergencias.

Así las cosas, el Departamento de Seguridad Pública manifestó endosar el Proyecto del Senado 45, por entender que se atienden aspectos técnicos de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, que favorecen la administración del NMEAD y tiene un impacto positivo en el servicio que se le brinda al pueblo puertorriqueño.

Departamento de Justicia

Por su parte, el **Departamento de Justicia**, reveló que no ha identificado impedimento legal alguno que los lleve a sugerir cambios sustantivos a la enmienda propuesta en la medida objeto de evaluación. Expuso que los fines de la medida se encuentran cubiertos por el poder otorgado por nuestra Constitución a la Rama legislativa para “crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones”.¹ Añadió que, conforme a tal facultad, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado que en todo gobierno debidamente constituido debe existir un poder general para aprobar y derogar leyes, así como para crear, cambiar o discontinuar los funcionarios designados para la ejecución de esas leyes.”²

De otra parte, indicó que nuestro más alto foro ha reiterado que el Estado, por medio de la Rama Legislativa, goza de la facultad de conferirle a las instrumentalidades que crea, la estructura organizativa, administrativa y funcional que estime más apropiada a fin de lograr el más óptimo y efectivo funcionamiento de éstas³. Es por esto que el Departamento de Justicia afirmó que la Legislatura ostenta la facultad de reorganizar, eliminar o abolir los organismos y cargos gubernamentales que en virtud de ley hay creado cuando, como política pública, así lo entienda procedente⁴. A tales fines, exteriorizó el Departamento que se encuentra dentro de los poderes de la

¹ Constitución de Puerto Rico, Art. III, Sec.16.

² *Gómez v. Negrón*, 65 D.P.R. 305 (1945).

³ *Pagán v. E.L.A.*, 131 D.P.R. 795 (1992).

⁴ *Torres Rivera, et. al. v. Calderón- Serra, et. al.*, 412 F.3d 205 (1er Cir. 2005).

Asamblea Legislativa la potestad de modificar las cualificaciones para ocupar el cargo de Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

No obstante, sostuvo que la facultad para reglamentar se encuentra sujeta a las limitaciones impuestas por la garantía del debido procedimiento de ley⁵; las cuales requieren que dicha reglamentación no sea irrazonable, arbitraria o caprichosa y que el medio elegido tenga una relación real y sustancial con el objetivo que persigue⁶. Aunque, advirtió que mediante la enmienda propuesta al P. del S. 45 se elimina el criterio objetivo del número de años de experiencia, dejando solamente el requisito de contar con un “vasto conocimiento y experiencia”. Explicó el Departamento de Justicia que debido a que no se define ni se establece qué constituye “vasto conocimiento y experiencia”, la enmienda introduce un fuerte elemento de subjetividad, lo que, a su vez, podría provocar que la regulación resultara arbitraria y chocar con los requisitos del debido proceso de ley. A tales fines, sugirió integrar a la enmienda propuesta la alternativa de que el candidato acredite un número de años de experiencia en asuntos de seguridad, manejo de emergencias y administración de desastres que el legislador considere adecuado. Culminó el Departamento concediendo deferencia en los aspectos administrativos que conlleve la aprobación de esta medida al Departamento de Seguridad Pública.

Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres

Mientras que el **Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD)** manifestó que el Negociado debe estar en conexión directa con la Oficina del Gobernador, así como estar cónsono con la política pública del gobierno, esto en el mejor interés del Ejecutivo y de los ciudadanos. Recordaron que, para ello, resulta necesario contar con una persona que, además de ser de la entera confianza del Gobernador, tenga un vasto conocimiento de las funciones del Negociado, sus operaciones y de las áreas que maneja. Destacó, que además debe contar con probada experiencia y destrezas en el manejo de emergencias que pueda regir el Negociado en la dirección correcta y a la altura de lo que esperan y se merecen todos los ciudadanos y residentes de Puerto Rico.

El NMEAD culminó sus comentarios expresando su apoyo a la medida, toda vez que considera que su aprobación le permitirá continuar sus operaciones en favor de mantener una ágil respuesta a cualquier otra emergencia que se presente, pero principalmente, en la atención de emergencias actuales como lo son los terremotos y la pandemia del COVID-19.

CONCLUSIÓN

Ha sido norma reiterada en la jurisprudencia promulgada por nuestro Ilustre Tribunal Supremo los amplios poderes que ostenta la Asamblea Legislativa de asignarle a las instrumentalidades que crea la estructura organizativa, administrativa y funcional que estime más conveniente, así como el poder de modificarlas; cumpliendo siempre con las garantías de un debido proceso de ley. Si bien es cierto, que este Distinguido Cuerpo posee la potestad de modificar las cualificaciones para ocupar el cargo de Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres u otro puesto similar, también lo es que no puede realizarse de una mediante reglamentación irrazonable, arbitraria o caprichosa.

La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico coincide con la intención del legislador en cuanto a la necesidad de que el puesto de Comisionado de este Negociado sea ocupado por una persona que posea un vasto conocimiento en las áreas que maneja el NMEAD y probada experiencia y destrezas en el manejo de emergencias. No obstante, tampoco puede

⁵ *E.L.A. v. Márquez*, 93 D.P.R. 393 (1966); *A Roig Sucrs. V. Junta Azucarera*, 77 D.P.R. 342 (1954).

⁶ *Morales v. Lizarribar*, 100 D.P.R. 717 (1972); *Central San Vicente v. Junta Azucarera*, 78 D.P.R. 799 (1955).

conferírsele amplitud excesiva a estos requisitos en ánimos de prevenir un posible argumento de arbitrariedad en la aplicación de la Ley. Tal particular sentaría un mal precedente en nuestro sistema legislativo, con tan solo la apariencia de que este Honorable Cuerpo aprobó una legislación que promueva que personas específicas cualifiquen a un puesto.

Por lo cual, acogemos la recomendación realizada por el Departamento de Justicia a los fines de “integrar a la enmienda, como alternativa a que el candidato cuente con vasto conocimiento y experiencia; la alternativa de que el candidato acredite el número de años de experiencia en asuntos de seguridad, manejo de emergencias y administración de desastres que el legislador considere adecuado.” Es nuestra posición que el término de 6 años de experiencia en materia relacionada al manejo de emergencias y administración de desastres resulta un equivalente razonable al requisito de ostentar un grado académico de maestría. De esta forma, expandimos los requisitos que debe poseer el candidato que ocupe el cargo de Comisionado, pero nos aseguramos de delimitar las cualificaciones mínimas para el puesto sin que exista un fuerte elemento de subjetividad, asegurándonos así de cumplir con el debido proceso de ley en la aprobación de esta medida.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene a bien someterle a este Alto Cuerpo el Informe Positivo del **Proyecto del Senado 45**, recomendando su aprobación **con enmiendas**.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisión de Seguridad Pública
y Asuntos del Veterano”

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 533, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, sin enmiendas:

“LEY

Para enmendar el inciso (34) del apartado (a) de la Sección 1031.02 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de eximir a los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia y a los Oficiales de Servicios Juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación de tributación por las partidas de ingreso devengadas por concepto de horas extras trabajadas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la aprobación de la Ley 58-2013, se eximió a los miembros de la Policía de Puerto Rico del pago de contribuciones sobre los ingresos recibidos por concepto del pago de las horas extras trabajadas. Sin embargo, nada se dispuso en torno a la aplicabilidad de dicho estatuto a los Oficiales de Custodia y a los Oficiales de Servicios Juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación, entre otros funcionarios.

Como cuestión de realidad, estos oficiales tienen en ocasiones, que laborar una cantidad de horas extras que exceden significativamente su jornada de trabajo regular; asunto que de ordinario le

es requerido durante situaciones que ponen en riesgo su vida y seguridad. Sabido es que por razones de índole fiscal no se contempla al presente otorgarles a nuestros oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación un aumento salarial. Sin embargo, mediante esta medida se reconoce la labor que realizan diariamente, así como también sirve de mecanismo de justicia salarial para los mismos.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (34) del apartado (a) de la Sección 1031.02 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Sección 1031.02. — Exenciones del Ingreso Bruto.

(a) Las siguientes partidas de ingreso estarán exentas de tributación bajo este Subtítulo:

(1) ...

...

(34) El ingreso devengado por concepto de las horas extras trabajadas por un miembro del Negociado de la Policía de Puerto Rico, según este servidor público es definido en el Artículo 1.02 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”. Asimismo, a partir del 1 de enero de 2019 estarán exentos de toda tributación, los salarios que se les paguen retroactivamente a los miembros del referido Negociado, por concepto de los aumentos en los tipos básicos de las escalas y por los aumentos de sueldos otorgados en virtud de la Ley 227-2004, según enmendada, y cualesquiera otros ingresos que estos generen por promociones pasadas de acuerdo a las escalas salariales, y que aún se les adeuden. Para los salarios pagados por los conceptos antes mencionados durante el año 2018, que no hayan sido incluidos en el Comprobante de Retención de dicho año, se concederá un crédito, equivalente al cien por ciento (100%) de dicho ingreso, en el año 2019. Estas exclusiones no les aplican a los empleados civiles del antes mencionado Negociado. *A su vez, estará igualmente exento de tributación el ingreso devengado por concepto de horas extras trabajadas por un miembro del Cuerpo de Oficiales de Custodia u Oficial de Servicios Juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación.* “

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de aprobación.”

“INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación sin enmiendas del P. del S. 533.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 533 (en adelante, “P. del S. 533”) dispone para enmendar el inciso (34) del apartado (a) de la Sección 1031.02 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de eximir a los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia y a los Oficiales de Servicios Juveniles del Departamento de

Corrección y Rehabilitación de tributación por las partidas de ingreso devengadas por concepto de horas extras trabajadas; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA MEDIDA

La exposición de motivos del P. del S. 533 describe el trato desigual entre los policías del Negociado de la Policía de Puerto Rico (en adelante, “NPPR”), en comparación con las y los Oficiales de Custodia, así como las y los Oficiales de Servicios Juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, “DCR”). Los policías, en virtud de la Ley Núm. 58-2013 fueron eximidos del pago de contribuciones sobre los ingresos recibidos por concepto del pago de las horas extras trabajadas. Sin embargo, los y las Oficiales de Custodia, como las y los Oficiales de Servicios Juveniles no disfrutaban de esta disposición.

La medida reseña que estos y estas trabajadoras, excluidos de la Ley Núm. 58-2013, laboran “una cantidad de horas extras que exceden significativamente su jornada de trabajo regular; asunto que de ordinario le es requerido durante situaciones que ponen en riesgo su vida y seguridad”. Además, puntualiza que ante la remota posibilidad de otorgarles a los y a las empleados del DCR un aumento salarial, enmendar el inciso (34) del apartado (a) de la sección 1031.02 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como *Código de rentas internas para un nuevo Puerto Rico*, para eximir a los y a las Oficiales de Custodia, así como a las y los Oficiales de Servicios Juveniles del DCR del pago de contribuciones por los ingresos del pago de las horas extra es un acto de justicia salarial.

La Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal (en adelante, “Comisión de Hacienda”) del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 533, solicitó memoriales explicativos al DCR, al Departamento de Hacienda (en adelante, “DH”), a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante, “OGP”), a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (en adelante, “AAFAF”) y al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (en adelante, “DTRH”). Al momento de la redacción de este informe no se habían recibido los memoriales explicativos del DCR, AAFAF, OGP, ni del DH.

Carlos J. Rivera Santiago

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

El **Lcdo. Rivera**, Secretario del DTRH, según el memorial explicativo que dirigió a esta Comisión, manifestó que el DTRH no interviene en aspectos salariales, fiscales, ni de beneficios aplicables a los servidores públicos. Se limitó a expresar que se le soliciten los comentarios sobre esta medida al DCR; al DH, en tanto esta es la agencia que impone y recauda las contribuciones; a la AAFAF, para que se exprese en cuanto a la consistencia de esta medida con el plan certificado; y a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (en adelante, “DTRH”), en tanto tiene a su cargo unificar los planes de clasificación y retribución del gobierno de Puerto Rico.

Juan Carlos Blanco Urrutia

Oficina de Gerencia y Presupuesto

El **Lcdo. Blanco**, Director Ejecutivo de la OGP, se expresó en torno al P. del S. 533, que el proyecto “conciene principalmente al recaudo de contribuciones. Por consiguiente, la OGP está indispuesta de comentar en cuanto al impacto presupuestario o fiscal de la medida, por no contar con los datos sobre la cantidad que se les retiene a los y las Oficiales de Custodia y a los y las Oficiales de Servicios Juveniles, del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Tampoco puede determinar la cuantía a la que bajarían los recaudos de impuestos por concepto de la exención contributiva a las horas extra trabajadas, por estos funcionarios y funcionarias. Finalizó recomendado que se ausculte la

opinión del DH sobre la viabilidad del proyecto y el impacto, si alguno, en los recaudos del gobierno de Puerto Rico.

Fernando L. Sánchez

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal

El señor **Sánchez**, Director de Asuntos Gubernamentales de la AAFAF, expresó mediante memorial explicativo dirigido a esta Comisión, en torno al P. del S. 533, estar a favor de la justicia salarial para los Oficiales de Custodia y los Oficiales de Servicios Juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Sin embargo, llamó la atención en cuanto al Principio de Neutralidad Fiscal establecido en la sección 17.3.3 del Plan Fiscal Certificado del Gobierno de Puerto Rico. Esta sección requiere que toda reducción en impuestos venga acompañada por medidas que aumenten los recaudos o, que reduzcan el gasto presupuestario, en igual proporción. En aras de evitar que la JSF frustre la intención de esta medida, como pasó con la Ley Núm. 47-2020, el director de Asuntos Gubernamentales de la AAFAF recomendó solicitar la evaluación y comentarios del DH, de modo que esta agencia determine si la medida conlleva un impacto en los ingresos del fisco.

Ana I. Escobar Pabón

Departamento de Corrección y Rehabilitación

La señora Escobar, Secretaria de DCR, describió en su ponencia que el Plan de Reorganización⁷ creó un denominado Cuerpo de Oficiales de Custodia integrado por oficiales correccionales y oficiales de servicios juveniles. Estos están a cargo de custodiar a los miembros de la población correccional y conservar el orden y la disciplina, proteger a la persona y a la propiedad, supervisar y ofrecer orientación social a los miembros de la población correccional y a los jóvenes transgresores, entre otras funciones. Además, pueden perseguir a miembros de la población correccional evadidos y liberados contra quienes pesa una orden de arresto emitida y aprehenderlos a cualquier hora y en cualquier lugar, realizar investigaciones criminales y como funcionarios del orden público, realizar arrestos sin orden judicial, entre otras.

Resaltó que, los oficiales correccionales como los oficiales de servicios juveniles son la primera línea para el cumplimiento de la misión que se le ha delegado al DCR y por consiguiente, realizan tareas que ponen en riesgo su vida, familia y propiedad, enfrentando altos niveles de estrés, agotamiento y una variedad de otras consecuencias. Debido a sus funciones, la señora Escobar expresó que, constantemente y por necesidad de servicios, inevitablemente, estos oficiales deben trabajar horas en exceso a su jornada laboral de manera que el DCR pueda cumplir con su responsabilidad.

Finalizó su ponencia, puntualizando la similitud que tienen las facultades y responsabilidades establecidas por ley entre los Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (en adelante, “Agentes de la Policía”) y el Cuerpo de Oficiales de Custodia del DCR. A diferencia de los segundos, a los Agentes de la Policía se les eximió del pago de contribuciones sobre los ingresos recibidos por concepto del pago de las horas extras trabajadas por estos. Por tanto, favoreció la aprobación del P. del S. 533.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 del Código Municipal de Puerto Rico, Ley 107-2020, según enmendada, luego de evaluar la medida, esta Comisión estima que, el P. del S. 533 no tendrá

⁷ Véase Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, según enmendado, conocido como el “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”

impacto fiscal sobre los presupuestos de los municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales.

En lo que representa al estado, el impacto fiscal no puede ser cuantificado ya que los montos por los cuales se pudiera cobrar contribuciones son según la necesidad del servicio, por lo que el gobierno no pudiera establecer algún monto en consideración al momento de realizar sus estimados de ingresos. El mismo no debe ser significativo, por lo que entendemos que no afectaría considerablemente el Plan Fiscal según certificado.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Hacienda reconoce la encomiable, importante y riesgosa labor que día a día realizan los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia del DCR, al cumplir las funciones y responsabilidades que conlleva su cargo. Son estos, los llamados a ser la primera línea en el cumplimiento de la misión que se le ha delegado al DCR. Pero, lamentablemente, debido a la falta de recursos y en aras de cumplir la misión del sistema correccional del país, se ven en la obligación de constante e inevitablemente, trabajar horas en exceso a su jornada laboral. De manera, que se logre custodiar a los miembros de la población correccional y se mantenga el orden y la disciplina en las instituciones correccionales y en los centros de detención del país.

Definitivamente, los ingresos recibidos por concepto del pago de las horas extra trabajadas no debería ser un ingreso tributable. Estos oficiales no deben verse afectados por la falta de recursos del DCR. Al contrario, el pago de horas extra debe ser un aliciente a un cumplimiento adicional a sus funciones, las cuales representan un riesgo a su vida, familia y propiedad. Además, no podemos ser testigos de la injusticia al tratamiento contributivo distinto entre funciones similares.

Por consiguiente, el equiparar los beneficios de los Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico con los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia del DCR, con respecto a eximir a éstos del pago de contribuciones sobre los ingresos recibidos por concepto de pago de las horas extras trabajadas, es otro paso en la dirección correcta a la justicia salarial.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del P. del S. 533.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)

Hon. Juan Zaragoza Gómez

Presidente

Comisión de Hacienda, Asuntos Federales
y Junta de Supervisión Fiscal”

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 894, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

“LEY

Para crear la “Ley de salario base para los y las profesionales del trabajo social en Puerto Rico” a los fines de establecer un salario base para los profesionales del trabajo social tanto en el sector público como en el sector privado; establecer la responsabilidad de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico para viabilizar

el cumplimiento de esta ley en el sector público; facultar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para velar por el cumplimiento de esta ley en el sector privado; establecer mandato de creación de escalas salariales; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El trabajo social es una profesión comprometida con la democracia participativa, la justicia social y el enfrentamiento de la desigualdad e inequidad social. Fundamenta su acción ético-política en la defensa y ampliación de los derechos humanos. Enmarca su ejercicio profesional en conocimientos y destrezas teórico-metodológicas y técnico-operativas producto de la investigación social y la práctica profesional en contextos históricos y culturales específicos. Se inserta en la investigación social; el análisis y formulación de política social; la gestión, administración y evaluación de programas sociales y comunitarios y de acciones profesionales de asistencia y acompañamiento social, socio-educativas, terapéuticas, docentes y forenses, entre otras que inciden en el fortalecimiento de la autonomía, el ejercicio de la ciudadanía y el bienestar integral del ser humano en todos sus contextos.⁸

La Federación Internacional de Trabajadores Sociales afirma que las y los trabajadores sociales trabajan en comunidades con personas que encuentran formas positivas de avanzar en los desafíos que enfrentan en sus vidas. Ayudan a las personas a construir el tipo de entornos en los que quieren vivir, a través de la codeterminación, la coproducción y la responsabilidad social. De igual forma, destaca que los derechos humanos y la justicia social son fundamentales en el pensamiento y las acciones de cualquier profesional del trabajo social. La declaración de principios éticos guía a cada profesional del trabajo social a desafiar las desigualdades, la discriminación en todas sus formas y a facilitar el empoderamiento de las personas para que estén a cargo de sus vidas.⁹

Al presente, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social (CTSPR) de Puerto Rico representa a más de siete mil (7,000) profesionales que se desempeñan tanto en el sector público como en el privado. A esto se suman las nuevas licencias que anualmente otorga la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social. Se estima que el sesenta y siete por ciento (67%) de estos profesionales se desempeñan en el sector gubernamental, mientras que el treinta y tres por ciento (33%) se desempeña en diversos ámbitos del sector privado. De estos, un 62% cuenta con grado de bachillerato y 38% con maestría o doctorado, según datos del CPTSPR. A su vez, el ochenta y ocho por ciento (88%) de la matrícula de la profesión son mujeres, caracterizando al trabajo social como un perfil feminizado.

A pesar del reconocimiento de la importancia de la profesión en nuestra sociedad, quienes ejercen el trabajo social lo hacen en condiciones laborales precarias e inseguras. El aumento dramático en el volumen de trabajo provocado por la dinámica de desigualdad e inequidad social, los despidos masivos de personal de apoyo y la congelación de plazas en el sector público, así como la falta de recursos y servicios esenciales, han menoscabado las condiciones de trabajo, con efectos detrimentales en la calidad y el acceso de los servicios sociales que por derecho tiene la ciudadanía. Particularmente afectando la salud, seguridad y bienestar de los sectores más desprotegidos y vulnerados como la niñez, juventud, adultos mayores, familias en condición de pobreza y comunidades marginadas, entre otros. Un fenómeno similar se viene observando en las organizaciones sin fines de lucro donde, según el Estudio de las Organizaciones Sin Fines de Lucro en Puerto Rico, 2015, la situación económica ha afectado los recaudos y por ende ha habido una reducción significativa de empleomanía y servicios

⁸ Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico; Guía de orientación al colegiado y colegiada; 2019-2020

⁹ <https://www.ifsw.org/about-ifsw/>

en comparación a 2006¹⁰. Por lo cual, podemos augurar que el trabajo social en el sector privado, también, se ha visto seriamente precarizado.

Investigaciones realizadas por el CPTSPR durante los pasados diez (10) años demuestran la precariedad salarial de los y las profesionales del trabajo social. En un estudio realizado en el 2014 sobre condiciones laborales en la Región de América Latina y el Caribe, el setenta por ciento (70%) de la muestra de Puerto Rico informó que su salario era \$2,499 (\$14.42 / h) o menos indistintamente de su grado académico.

Según el informe de Estadísticas de Empleo y Salarios por Ocupación de Puerto Rico 2020, la mediana de salario mensual para todas las ocupaciones de Trabajo Social en el país es de \$2,484 o \$14.35 la hora. La ocupación de trabajo social con la mediana más alta está agrupada bajo la categoría “Todos los demás Trabajadores Sociales” con una mediana de salario mensual de \$2,754 (\$15.89/hora). Mientras, la ocupación de trabajo social con la mediana salarial mensual más baja es en “Salud Mental y Abuso de Sustancias” con \$2,078 (\$11.99/hora). En el caso de los Estados Unidos la mediana de salario mensual en trabajo social es de \$4,199 (\$50,390 al año, \$24.23 la hora). Por otra parte, el Plan de Clasificación de Puestos y de Retribución Uniforme para el Gobierno Central - Agrupación de Clases de Puestos por Escalas de Sueldos publicado a principios de este año por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en su página Web, ubica el puesto de trabajo social, con número de codificación 9181, en la escala número 34 la cual comienza en un salario tipo mínimo de \$3,989 (\$23.01 / hora) para una persona con licencia provisional, lo que se refiere a personas con bachillerato en trabajo social y menos de tres años de experiencia profesional, entre otras categorías estipuladas en el Artículo 8 de la Ley 171 de 1940, según enmendada.

El promedio y las medianas de sueldos actuales para el trabajo social en Puerto Rico (2020) y los Estados Unidos (2021) se detallan a continuación:

Tabla Escalas de sueldos por clases de puesto en Trabajo Social					
Tipo TS	Empleos	Salario Promedio por hora	Mediana Salario por hora	Mediana Salario Mensual PR*	Mediana Salario Mensual EEUU**
Infancia, Familia, Escolar	3,530	14.83	14.46	2,506	4,096
Cuidado de salud	1,150	16.59	15.00	2,600	5,070
Salud Mental y Abuso de Sustancias	360	14.28	11.99	2,078	4,095
Demás TS	1,120	18.38	15.89	2,754	5,099
Total o Promedio	--	\$16.02	\$14.35	\$2,484	\$4,199

¹⁰Estudio de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, 2015: <https://www.estudiotecnicos.com/projects/orgssinlucro/pdf/Informe%20final%20OSFL%202015.pdf>

*Datos tomados del Informe de Estadísticas de Empleo y Salarios por Ocupación de Puerto Rico 2020,
<https://www.mercadolaboral.pr.gov/lmi/pdf/OES/2020/Estadisticas%20de%20Empleo%20por%20Ocupacion.pdf>
**Occupational Handbook Outlook, Social Workers, 2021 -
<https://www.bls.gov/ooh/community-and-social-service/social-workers.htm#tab-5>

Dado las emergencias socioambientales y la pandemia del COVID-19 que hemos vivido en años recientes, los y las profesionales del trabajo social se hacen más relevantes, ya que las crisis familiares, de salud física y mental, de vivienda y en el escenario escolar van en aumento. En periodos de emergencias o desastres, los y las profesionales del trabajo social no cesan funciones. Por el contrario, deben atender emergencias realizando una variedad de funciones para asistir y acompañar a las personas, familias y comunidades afectadas con serias necesidades y que requieren atención a nivel material, psicológico, social y económico. Desde intervenciones en crisis e identificación y gestión de recursos, hasta apoyo psicosocial o socioeducativo, entre muchas otras funciones. Es por las razones que la profesión se ha mantenido indispensable día y noche, por más de 80 años, en la defensa de los derechos humanos y para asegurar la prestación de servicios esenciales a la población, incluyendo durante desastres socioambientales y emergencias de salud pública.

Las y los profesionales del Trabajo Social no han contado con un salario digno a pesar de su esencial labor, en la medida que no existe un salario base y procesos para regularlo, muchas profesionales deciden abandonar la profesión identificando otras ocupaciones de menores responsabilidades y riesgos o emigrando de Puerto Rico. Las serias dificultades de reclutamiento y retención de profesionales del trabajo social, empeora seriamente la provisión de servicios esenciales a la ciudadanía en áreas de salud, seguridad, protección, bienestar, prevención, vivienda y educación, entre otras, vulnerando así sus derechos sociales y económicos. Se debe comprender y valorar la estrecha relación entre las condiciones laborales de los y las profesionales del trabajo social y los derechos de la ciudadanía a servicios sociales esenciales, de calidad y accesibles. Por ello, esta Asamblea Legislativa reconoce a las y los profesionales del trabajo social como recursos esenciales para la atención integrada de las necesidades de los sectores más vulnerados del país y como recursos imprescindibles en la consecución de las condiciones de bienestar social y equidad a las que aspiramos como sociedad.

Por lo cual, se propone una nueva base salarial, incluyendo a quienes son contratados por servicios profesionales, que responda a las condiciones y necesidades económicas vigentes. Esto, a fines de mejorar sus condiciones de vida, fortalecer la capacidad para ofrecer servicios sociales y reducir la fuga de talento a otras jurisdicciones.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Título

Esta Ley se conocerá y podrá citarse como “Ley de salario base para los profesionales del trabajo social en Puerto Rico”

Artículo 2. – Definiciones.

Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado y alcance que para cada uno se exprese, excepto cuando del contexto claramente se indique un significado diferente:

- a) Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) - entidad que representa los intereses de la profesión y que protege a los profesionales en el ejercicio

del trabajo social en virtud de la Ley Núm. 171 de 11 de mayo de 1940, según enmendada.

- b) Homologación - proceso realizado por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social para el reconocimiento de grados y títulos académicos del trabajo social obtenidos en instituciones fuera de Puerto Rico.
- ~~e) mediante el cual formulan políticas nacionales y/o sectoriales, uniformizan las características técnicas y/o requisitos de calificación de los requerimientos en general relacionados con el ámbito de su competencia.~~
- ~~d) c)~~ Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social - cuerpo autorizado para expedir licencias para la práctica de Trabajo Social en Puerto Rico, en virtud de la Ley Núm. 171 del 11 de mayo de 1940, según enmendada.
- e) d) Profesionales del trabajo social - Profesionales licenciados para ejercer en Puerto Rico por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto, en virtud de la Ley Núm. 171 de 11 de mayo de 1940, según enmendada y que rigen su acción profesional por el Código de Ética.
- ~~f) e)~~ Sector Público - La designación de sector público incluye a agencias estatales, los municipios y el poder judicial.
- ~~g) f)~~ Sector Privado - La designación de sector privado incluye organizaciones con o sin fines de lucro.
- ~~h) g)~~ Servicios profesionales - Aquellos servicios cuya prestación principal consista del producto intelectual, creativo o artístico o el manejo, los conocimientos y la experiencia sobre destrezas altamente especializadas en trabajo social.

Artículo 3. – Declaración de Política Pública

Será política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico promover una escala salarial justa, digna y apropiada para todos los y las profesionales del trabajo social de conformidad con la preparación académica, ~~no importando~~ la naturaleza del puesto, y ejerciendo en función de los requisitos académicos, competencias, responsabilidades, deberes asignados a esta profesión en los diversos escenarios en los que laboran, tanto en el sector público como en el privado.

Artículo 4. – De conformidad con la preparación académica, la escala salarial base para las y los profesionales en posiciones regulares tanto en el sector público como el sector privado, será la siguiente:

- a) Profesional del trabajo social con grado académico de bachillerato o su homologación según reconocido por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social: \$3,989 mensuales o \$20.77/hora, lo que sea mayor respecto a las horas mensuales requeridas.
- b) Profesional de trabajo social que, al momento de ponerse en vigor esta ley, ya estén bajo un contrato de trabajo social con una licencia provisional conferida por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social al tener un título de bachiller que no es en trabajo social de una universidad o colegio reconocidos y tener además dieciocho (18) o más créditos de estudios postgraduados en trabajo social: \$3,989 mensuales o \$20.77/hora, lo que sea mayor respecto a las horas mensuales requeridas.
- c) Profesional del trabajo social con grado académico de maestría o su homologación según reconocido por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social: \$4,232 mensuales o \$24.41/hora o, lo que sea mayor respecto a las horas mensuales requeridas.

- d) Profesional del trabajo social con grado académico de doctorado o su homologación según reconocido por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social: \$4,800 mensuales o \$27.69/hora, lo que sea mayor respecto a las horas mensuales requeridas.

Artículo 5- De conformidad con la preparación académica, la tarifa a pagar por hora a las y los profesionales del trabajo social contratados por servicios profesionales con tiempo determinado por un número de horas mensuales o anuales en contratos anuales o semianuales, tanto en el sector público como privado será la siguiente:

- a) Profesional del trabajo social con grado académico de bachillerato o su homologación según reconocido por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social: Treinta y cinco dólares (\$35) por hora.
- b) Profesional del Trabajo Social con grado académico de maestría o su homologación según reconocido por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social: Cuarenta y cinco dólares (\$45) por hora.
- c) Profesional del trabajo social con grado académico de doctorado o su homologación según reconocido por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social: Cincuenta y cinco dólares (\$55) por hora.

Artículo 6. - Las tarifas establecidas en el artículo anterior no limitan la estipulación de tarifas distintas según negociado entre las partes, por aquellos servicios profesionales que se facturan por horas, servicios o casos, o en contratos de corto plazo o por tarea específica.

Artículo 7- Estos salarios bases serán aplicables a cualquier plaza regular o contrato de servicios profesionales que requiera preparación formal en trabajo social, ~~no importando~~ la naturaleza del puesto, y ejerciendo en función de los requisitos académicos, competencias, responsabilidades y deberes asignados a esta profesión en los diversos escenarios en los que laboran, independientemente de la designación de la plaza o proyecto.

Artículo 8.- Las disposiciones de salarios base dispuestas en esta ley no representan cambios a las clasificaciones o designaciones de plazas o puestos vigentes en el sector público.

~~Artículo 9.- La designación de sector público incluye a agencias estatales, los municipios y el poder judicial. La designación de sector privado incluye organizaciones con o sin fines de lucro.~~

Artículo ~~940~~ 1040.- Toda plaza o contrato de servicios profesionales que a la fecha de aprobación de esta Ley tenga una asignación de salario base mayor a la establecida en esta Ley a la fecha de su aprobación, no podrá ser reducida, tampoco podrán ser reducidas las horas de labor asignada con el propósito de reducir el salario asignado.

Artículo ~~1044~~ 1044.- Responsabilidad de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico para velar por el cumplimiento de esta ley en el sector público.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico tendrán el deber ministerial de identificar, separar y garantizar anualmente los fondos necesarios para la consecución de lo dispuesto en esta ley respecto a la escala salarial para las y los profesionales del trabajo social que se desempeñan en el sector público. La Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico deberán ser proactivas en la identificación de los fondos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. Durante el periodo de análisis del presupuesto para cada año fiscal, deberán realizar las gestiones necesarias para certificar la disponibilidad de los fondos necesarios hasta que se logre dar cumplimiento con lo aquí dispuesto.

Artículo 11.42- Responsabilidad del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para velar por el cumplimiento de esta ley en el sector privado.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos queda facultado para establecer un procedimiento mediante Reglamento a tales efectos por el cual pueda eximirse de esta Ley a un patrono del sector privado, siempre que el mismo demuestre que dicho aumento tendría un efecto detrimental para las finanzas de la entidad, tomando en consideración entre otras cosas, los costos operacionales de la empresa y la cantidad de empleados. Todo patrono que se beneficie de esta exención, tendrá que preparar un plan de aumento de salario proyectado para comenzar a cumplir con esta Ley ~~al cabo-en o antes~~ de tres (3) años a partir de la vigencia de esta Ley. Este plan de aumento de salario será presentado al Secretario del Trabajo quien lo custodiará y dará seguimiento para que su implementación sea factible. ~~Este plan de aumento de salario~~ El mismo, será sometido al Secretario dentro del término de noventa (90) días, contados a partir de la fecha en que el Secretario haya eximido a ese patrono de cumplir con las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 1243.-El Secretario del Departamento del Trabajo adoptará un reglamento para la imposición de multas a ~~quienes~~ patronos del sector privado que violenten alguna disposición de esta Ley. Las multas comenzarán en mil (1,000) dólares y no serán mayores a cinco mil (5,000) dólares por infracción.

Artículo 1344.- En un término no mayor de un (1) año, tanto los patronos del sector público como del sector privado deberán establecer un sistema de escalas salariales para las y los profesionales del trabajo social a partir del salario base establecido en esta ley. Estas escalas salariales deben tomar en consideración, entre otros aspectos, años de experiencia, funciones de supervisión, administración y dirección, incluyendo coordinación o facilitación de trabajos entre trabajadores sociales en servicios directos y conocimientos especializados.

Artículo 1445.- Las escalas salariales establecidas deberán ser revisadas cada cinco (5) años.

Artículo 1546.-Legitimación Activa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico.

Se otorga al Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico legitimación activa para iniciar procedimientos administrativos y/o judiciales contra personas naturales y jurídicas, incluyendo el Estado, con el propósito de asegurar el cumplimiento de la presente Ley. Esta legitimación para procedimientos administrativos y/o judiciales será a los fines de velar por el cumplimiento de esta ley y no asigna responsabilidad de representación en casos individuales de naturaleza sindical.

Artículo 1647.-Separabilidad

Si cualquier artículo, disposición, párrafo, inciso o parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional por cualquier Tribunal competente, se entenderá que el resto de sus disposiciones mantendrán su validez y vigencia.

Artículo 17.48- Cláusula Derogatoria.

Toda ley o parte de ley vigente que sea incompatible con lo dispuesto en la presente ley, queda derogada.

Artículo 1849.-Vigencia.

Esta Ley entrará en vigor el 1 de julio de 2023, ~~doce (12) meses a partir de la fecha de su aprobación. 90) días después de su aprobación.~~

“INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación con enmiendas del P. del S. 894.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 894 (en adelante, “P. del S. 894”), según radicado, tiene como fin crear la “Ley de salario base para los y las profesionales del trabajo social en Puerto Rico” a los fines de establecer un salario base para los profesionales del trabajo social tanto en el sector público como en el sector privado; establecer la responsabilidad de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico para viabilizar el cumplimiento de esta ley en el sector público; facultar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para velar por el cumplimiento de esta ley en el sector privado; establecer mandato de creación de escalas salariales; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA MEDIDA

Según la exposición de motivos del P. del S. 894, el trabajo social es una profesión comprometida con la democracia participativa, la justicia social y el enfrentamiento de la desigualdad e inequidad social. Fundamenta su acción ético-política en la defensa y ampliación de los derechos humanos. Enmarca su ejercicio profesional en conocimientos y destrezas teórico-metodológicas y técnico-operativas producto de la investigación social y la práctica profesional en contextos históricos y culturales específicos. Se inserta en la investigación social; el análisis y formulación de política social; la gestión, administración y evaluación de programas sociales y comunitarios y de acciones profesionales de asistencia y acompañamiento social, socio-educativas, terapéuticas, docentes y forenses, entre otras que inciden en el fortalecimiento de la autonomía, el ejercicio de la ciudadanía y el bienestar integral del ser humano en todos sus contextos.

Al presente, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (en adelante, “CTSPR”) de Puerto Rico representa a más de siete mil (7,000) profesionales que se desempeñan tanto en el sector público como en el privado. A esto se suman las nuevas licencias que anualmente otorga la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social. Se estima que el sesenta y siete por ciento (67%) de estos profesionales se desempeñan en el sector gubernamental, mientras que el treinta y tres por ciento (33%) se desempeña en diversos ámbitos del sector privado. De estos, un 62% cuenta con grado de bachillerato y 38% con maestría o doctorado, según datos del CPTSPR. A su vez, el ochenta y ocho por ciento (88%) de la matrícula de la profesión son mujeres, caracterizando al trabajo social como un perfil feminizado.

La profesión del Trabajo Social es reconocida por su importancia, pero las condiciones laborales son precarias e inseguras. El aumento en el volumen de trabajo a causa de la desigualdad e inequidad social, los despidos masivos, la congelación de plazas en el sector público y la falta de recursos esenciales han menoscabado las condiciones de trabajo y han afectado calidad y el acceso a servicios sociales que por derecho tiene la ciudadanía. En especial, la salud, la seguridad y el bienestar de los sectores más vulnerados y desprotegidos, como: niños, jóvenes, adultos mayores, familias en condición de pobreza, comunidades marginadas, entre otros.

Investigaciones realizadas por el CPTSPR durante los pasados diez (10) años demuestran la precariedad salarial de los y las profesionales del trabajo social. En un estudio realizado en el 2014

sobre condiciones laborales en la Región de América Latina y el Caribe, el setenta por ciento (70%) de la muestra de Puerto Rico informó que su salario era \$2,499 (\$14.42 / h) o menos indistintamente de su grado académico. Según el informe de Estadísticas de Empleo y Salarios por Ocupación de Puerto Rico 2020, la mediana de salario mensual para todas las ocupaciones de Trabajo Social en el país es de \$2,484 o \$14.35 la hora, mientras que en los Estados Unidos la mediana de salario mensual en trabajo social es de \$4,199 (\$50,390 al año, \$24.23 la hora).

A raíz de esta desigualdad laboral y en busca de salarios dignos, el CPTSPR hace referencia al Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (en adelante, “OATRH”) para la implementación de una nueva escala salarial. La OATRH ubica el puesto de trabajo social, con número de codificación 9181, en la escala número 34 la cual comienza en un salario tipo mínimo de \$3,989 (\$23.01 / hora) para una persona con licencia provisional, lo que se refiere a personas con bachillerato en trabajo social y menos de tres años de experiencia profesional, entre otras categorías estipuladas en el Artículo 8 de la Ley 171 de 1940, según enmendada.

Los y las profesionales del Trabajo Social han laborado en emergencias socioambientales, en la pandemia COVID-19 y se hacen más relevantes, ya que las crisis familiares, de salud física y mental, de vivienda y en el escenario escolar van en aumento. En periodos de emergencias o desastres, los y las profesionales del trabajo social no cesan funciones. Este profesional asiste y acompaña a las personas familias y comunidades afectadas con serias necesidades y que requieren atención a nivel material, psicológico, social y económico. Actualmente se enfrentan serias dificultades de reclutamiento y retención de profesionales del trabajo social, empeorando seriamente la provisión de servicios esenciales a la ciudadanía en áreas de salud, seguridad, protección, bienestar, prevención, vivienda y educación, entre otras.

Por lo cual, se propone una nueva base salarial, incluyendo a quienes son contratados por servicios profesionales, que responda a las condiciones y necesidades económicas vigentes. Esto, a fines de mejorar sus condiciones de vida, fortalecer la capacidad para ofrecer servicios sociales y reducir la fuga de talento a otras jurisdicciones.

La Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal (“Comisión de Hacienda”) del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 914, solicitó memoriales explicativos a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (en adelante, “AAFAF”), a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante, “OGP”), al Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (en adelante, “CPTSPR”), al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (en adelante, “DTRH”), a la Universidad de Puerto Rico (en adelante, “UPR”), a la Asociación de Economistas (en adelante, “AE”), a la Junta de Supervisión Fiscal (en adelante, “JSF”), al Departamento de la Familia (en adelante, “DF”), al Departamento de Economía de la UPR (en adelante, “DEUPR”), al Departamento de la Vivienda (en adelante, “DV”), al Departamento de Seguridad Pública (en adelante, “DSP”) y al Departamento de Educación (en adelante, “DE”). Al momento de la redacción de este informe, no se habían recibido los memoriales de AAFAF, OGP, UPR ni DEUPR.

Terilyn Sastre Fuentes

Departamento de la Familia

La, entonces secretaria interina del Departamento de la Familia la Lcda. Terilyn Sastre Fuentes, indicó mediante memorial explicativo dirigido a esta Comisión que: “entendemos que lo ordenado en la P. del S. 894 no puede implementarse en cuanto y en tanto se refiere al servicio público”. Comentó que el DF reconoce que este Proyecto contempla un fin loable y necesario, ya que existe una necesidad apremiante de reclutar trabajadores sociales adicionales para el manejo de casos

referidos y el ofrecer una mejor compensación a estos trabajadores. A su vez, indicó que el DF no tiene la capacidad legal para alterar el plan de clasificación y retribución, tal cual presenta el P. del S. 894, ya que aun se encuentra siendo evaluado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (en adelante, “JSAF”).

La Lcda. Sastre sostuvo que, a pesar de lo anterior, su Administración asume el rol activo en solicitar más recursos y mejor compensación para el cuerpo de trabajadores sociales. Esta incluyó algunos ejemplos de solicitudes por parte del Gobernador en beneficio de estos profesionales, incluyendo el aumento de diez millones (\$10,000,000.00) de dólares en el presupuesto para el año fiscal 2022-2023 para la contratación y aumento de salarios para los trabajadores sociales. Este no fue aprobado y fue reducido a dos millones seiscientos sesenta mil (\$2,660,000.00) dólares para la contratación de cien (100) trabajadores sociales. Sastre concluyó sugiriendo la solicitud del insumo de la OATRH, ya que esta medida se encuentra bajo sus deberes ministeriales.

William O. Rodríguez Rodríguez
Departamento de la Vivienda

Por su parte, el Lcdo. William O. Rodríguez Rodríguez, secretario del Departamento de la Vivienda, expresó que: “Dado que nuestra agencia no hace determinaciones de sueldo, carecemos del conocimiento o la pericia para establecer o evaluar escalas salariales.” A su vez, resaltó el valor y contribución de los profesionales que laboran en el Departamento de la Vivienda “con su espíritu de servicio, compromiso y vocación sirven de contacto con las personas y grupos sociales más vulnerables para generar confianza y cercanía.” Agregó que los trabajadores sociales se encuentran en todas las oficinas de administración de los residenciales proveyendo servicios de intervención, ayuda o apoyo a los residentes. Finalizó recomendando solicitar la opinión de la OGP y la AAFAF, ya que son las agencias con pericia en el tema.

Gabriel Maldonado González
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

El licenciado Gabriel Maldonado González, secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, condicionó su aval a la media a que se incluyeran enmiendas presentada en su ponencia. Además, indicó que es importante compensar adecuadamente a todos los trabajadores, incluyendo al trabajador social por su rol vital en el bienestar de la sociedad. Las enmiendas sugeridas son las siguientes:

1. El Artículo 3 indica conceder una escala salarial basada en grado académico “...**no importando la naturaleza del puesto...**”. Esto **podría ser inconstitucional** al conceder distintos salarios por el mismo puesto, provocando indicios de inconstitucionalidad al no reconocer igual paga por igual trabajo.
2. El esquema que establece el P. del S. 894 **deja a un lado** los criterios de competencia, experiencia y responsabilidad para fines de establecer la compensación del trabajador. Asimismo, **impediría** la implementación de sistema bona fide de compensación que premien la antigüedad o el mérito en el empleo, o los sistemas de compensación a base de los resultados obtenidos por los empleados en el desempeño de sus funciones.
3. El Artículo 4 establece un salario mínimo mensual y por hora según la preparación académica. **No queda claro** cómo se determinó el salario propuesto para estos profesionales, ya que la gráfica incluida muestra la mediana salarial en Estados Unidos y Puerto Rico, no la media o promedio. **Se recomienda** incluir más información que

- sustente las compensaciones para el sector privado, especialmente las tarifas superiores por los contratos por servicios profesionales.
4. El Artículo 7 dispone que los salarios base serán aplicables a cualquier plaza o contrato “...que requiera preparación en trabajo social, no importando la naturaleza del puesto...”. Esto **pudiera conllevar** a que un empleado quien se les requiera algunos créditos en trabajo social esté cobijado por las disposiciones del P. del S 894, aunque no se dedique propia o directamente a funciones similares a las de un trabajador social.
 5. El Artículo 5 establece una compensación mínima para los trabajadores sociales que brindan servicios mediante contrato. Esta es una disposición atípica en nuestro derecho contractual, ya que dispone de antemano una tarifa. Es importante **aclarar** si la disposición va dirigida para todos los trabajadores sociales que proveen servicios mediante contratos de servicios profesionales o si se trata de trabajadores sociales que son empleados por un término fijo o transitorios en el sector público.
 6. El Artículo 5 **podría afectar** la contratación de profesionales del trabajo social que posean maestría o doctorado, ya que puede preferirse la contratación de quienes posean un bachillerato por contemplar un gasto menor. La tarifa impuesta se basa exclusivamente en preparación académica. Esto **limita** la libertad de un trabajador social para establecer voluntariamente una tarifa menor.
 7. El Artículo 6 propone establecer una excepción a la tarifa mínima establecida, por lo que **podría conllevar controversias legales**.
 8. El P. del S. 894 **tampoco atiende** el efecto que podría tener lo propuesto sobre las relaciones contractuales pactadas por un termino extendido o pagadas por anticipación. Esto **podría vulnerar** la protección constitucional al menoscabo de obligaciones contractuales.
 9. El Artículo 9 es **redundante** con respecto a la aplicabilidad de las disposiciones al sector publico y privado, ya que fueron señaladas en los incisos (g) y (f) del Artículo 2.
 10. El Artículo 13 **no aclara** que las multas que podrá imponer el DTRH serán dirigidas a las infracciones que cometan los patronos del sector privado, ya que la agencia de ordinario no impone multas al sector público por no tener personalidad jurídica propia.
 11. **Corregir** el Artículo 2 (c), ya que parece ser una continuación del inciso (b), por lo que crea confusión.
 12. **Corregir** el Artículo 19, ya que estable dos (2) términos de vigencia.
 13. **Corregir** el Artículo 4 (b), ya que menciona el término “bachiller”, para que lea “bachillerato” y no pierda uniformidad la medida.

Por otro lado, el señor Maldonado le proveyó total deferencia a la opinión de la OATRH para el aumento salarial de los trabajadores sociales del sector público.

Indira Luciano Montalvo

Departamento de Economía, UPRRP

En su ponencia, la Dra. Indira Luciano Montalvo, catedrática del Departamento de Economía de la UPR en Río Piedras, se mostró a favor de la presente medida. Esta expuso que la presente medida es un movimiento acertado en favor de los trabajadores sociales, pero indicó no estar de acuerdo “en regular las escalas salariales en el sector privado y adjudicar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos su cumplimiento”. Esto, ya que la regulación en el mercado laboral es necesaria para corregir fallas que puedan redundar en ineficiencias e inequidad, pero una sobre-regulación puede

provocar nuevas fallas. El elevar las escalas salariales en el sector público conllevaría a evaluar las mismas en el sector privado, sin la necesidad de una sobre-regulación.

La Dra. Luciano recomendó la importancia de identificar los fondos de las agencias para el aumento de este profesional sin que afecte el funcionamiento de esta. Una redistribución de fondos podría afectar el funcionamiento de esta y una disminución de trabajadores sociales para cumplir con la escala salarial podría repercutir en sobrecarga de trabajo. A su vez, expuso que el análisis de viabilidad de la medida “debe considerar no solo los beneficios individuales, sino también los sociales y los costos asociados”. Indicó que realizar comparaciones con jurisdicciones en Estados Unidos para justificar el aumento debe realizarse con jurisdicciones realmente comparables considerando el ingreso, nivel de pobreza y costo de vida.

Finalmente, Luciano culminó recomendando tres (3) puntos adicionales: (1) identificar indicadores que puedan medir los resultados y que sirvan de base para su revisión cada cinco años, (2) completar la definición que se encuentra incompleta en la línea quince y (3) aclarar la vigencia de la medida.

Jaime A. El Koury **Junta de Supervisión Fiscal**

El señor Jaime A. El Koury, asesor general de la Junta de Supervisión Fiscal, indicó que la medida, según redactada, es incompatible con el plan fiscal. Además, comentó que la JSF apoyado medidas que abordan las necesidades del público, pero el presente proyecto aumentaría el gasto del Gobierno más de lo previsto. Agregó que; “The Civil Service Reform provides for a new uniform classification and compensation plan, which includes salary adjustments and staffing of key positions, and addresses compensation issues for all central government employees.” Además, estableció que el P. del S. 894 persigue un enfoque fragmentario al tratar de aumentar los salarios básicos de una clase de trabajadores públicos sin implementar primero un proceso uniforme de compensación mediante la iniciativa de Reforma de la Administración Pública por el Plan Fiscal.

Larry Emil Alicea Rodríguez **Colegio de Profesionales del Trabajo Social**

Por su parte, el Dr. Larry Emil Alicea Rodríguez, presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, avaló la medida. Este indicó que la organización que preside representa a más de siete mil (7,000) profesionales del trabajo social, los cuales fundamentan su acción profesional por medio de principios, valores, un código de ética y una acción ético-política en la defensa y ampliación de los derechos humanos. Abundó en los requisitos para poder ejercer la profesión en Puerto Rico, las horas contacto a realizar y la colegiación. A su vez, comentó: “Esta profesión requiere un amplio conocimiento de la realidad social, de las políticas públicas y sociales, de bases teóricas de las Ciencias Sociales, de protocolos y modelos de intervención, sumado al cumplimiento estricto de una Código de Ética Profesional.”

Además, el Dr. Alicea puntualizó que los profesionales del trabajo social son un eje primordial en la defensa de los derechos humanos de todos los sectores, tanto a nivel micro, mezzo y macro. A su vez, se garantiza y asegura una prestación de servicios en búsqueda de justicia social, económica y ambiental, donde: “A pesar de esto, los y las profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico cuentan con salarios ínfimos e indignos, además de trabajar en condiciones laborales precarizadas e inseguras”. De igual forma, se presentaron varias estadísticas, siendo estas:

- a) El ochenta y ocho por ciento (88%) de las personas que ejercen la profesión en Puerto Rico son mujeres.

- b) El sesenta y dos por ciento (62%) poseen un grado de bachillerato, mientras que el treinta y ocho por ciento (38%) un grado de maestría o doctorado.
- c) El sesenta y siete por ciento (67%) laboran en el sector público y el treinta y tres por ciento (33%) en el sector privado.
- d) En el año 2016, un estudio de necesidades realizado a la matrícula del CPTSPR, se identificó que el setenta y siete por ciento (77%) de la muestra (732 profesionales del sector público y privado) seleccionaron el bajo salario como su necesidad o reto principal.
- e) Un estudio organizacional encomendado a la Universidad Carlos Albizu en el año 2020 encontró que el setenta y tres por ciento (73%) de las personas participantes del Departamento de la Familia informó que hay pobre apoyo organizacional, caracterizado por la falta de recursos humanos, fiscales y tecnológicos, mientras que el treinta y tres por ciento (30%) indicó tener la intención de renunciar a sus puestos de trabajo entre otras razones por la remuneración salarial, la pobre seguridad en algunos escenarios de trabajo, falta de recursos fiscales y de infraestructura.
- f) En el mes de agosto de 2022, se realizó una encuesta entre profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico donde participaron 1,420 profesionales. Los números afirman que la mayoría trabaja en escenarios públicos, tanto estatales como municipales. El sesenta y siete por ciento (67%) se ubicó en la categoría de empleos permanentes, mientras que el dieciocho por ciento (18%) en empleos temporeros. Un diecinueve por ciento (19%) reportó que tener más de un empleo.

Respecto a los aspectos laborales, el Dr. Alicea expuso que estudios e investigaciones sobre las condiciones laborales de los profesionales del trabajo social revelan: (1) han empeorado durante los últimos años, (2) se han precarizado los servicios y recursos de bienestar social, (3) el salario no está acorde con la complejidad y responsabilidad de las labores que llevan a cabo; (4) tienen temor a perder su empleo en cualquier momento por el poco personal y la sobrecarga de trabajo; (5) su calidad de vida se ve afectada de forma negativa en el área familiar y en la salud física y mental; (6) incurren en recursos e ingresos personales para costear materiales y equipos para poder llevar a cabo su trabajo.

Por otra parte, el Dr. Alicea indicó que el no establecer un salario base a abierto la puerta a que profesionales del trabajo social emigren en búsqueda de un salario justo y digno, como en Estados Unidos, donde puedan superar los ochenta mil (\$80,000.00) dólares anuales. A su vez, reseñó la media y mediana del salario de estos profesionales, siendo:

- a) Mediana de salario mensual para todas las ocupaciones de Trabajo Social en el país: \$2,484 o \$14.35 p/h.
- b) Media o salario promedio mensual para todas las ocupaciones de Trabajo Social en el país: \$2,776.80 o \$16.02 p/h.
- c) Media del ingreso bruto: \$2,368.
- d) Mediana del ingreso bruto: \$2,300.
- e) Media del ingreso bruto en el sector público en Puerto Rico para el Gobierno Estatal y Municipal es de \$2,552.
- f) Media del sector privado, el cual incluye a empleos en la empresa privada, Organizaciones Sin Fines de Lucro y la práctica profesional privada: \$2,175.

Finalmente, se realizaron unas características descriptivas del empleo, una comparación por género (estando las mujeres por debajo que los hombres en salario) y se presentaron los espacios laborales donde se agrupan la mayoría de los profesionales: (1) Gobierno Estatal; (2) Gobierno Municipal; (3) Empresa privada; (4) Organizaciones Sin Fines de Lucro. A su vez, se presentaron

experiencias acerca de salario, beneficios marginales, condiciones laborales, costo de vida y seguridad laboral. El Dr. Alicea concluyó recalcando la precarización de las condiciones laborales para estos profesionales, el impacto negativo de las medidas de austeridad para la profesión y la necesidad de creación de “política pública para establecer una escala salarial justa, digna y adecuada para los y las profesionales del trabajo social en el sector público, en el privado y para aquellos que trabajan mediando contratos por servicios profesionales”.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 del Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107-2020, según enmendada, luego de evaluar la medida, esta Comisión estima que, el P. del S. 894 no tendrá impacto fiscal sobre los presupuestos de los municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Esta Comisión reconoce el compromiso y la labor realizada por los trabajadores sociales en nuestro país, principalmente, en los últimos años donde hemos sufrido emergencias socioambientales que han agravado tanto, la situación económica como la situación mental de la sociedad. Lo que ha complicado la labor que realizan estos servidores y servidoras públicas que día a día se enfrentan a la encomiable labor de brindar una mayor estabilidad a cientos de ciudadanos. Además, reconocemos la aportación que llevan a cabo los trabajadores sociales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y el bienestar social del individuo a través de investigaciones, estudios y programas sociales. Entendemos que los trabajadores sociales, tanto del sector público como privado, deben ser compensados con un salario que se equipare con la ardua labor que realizan en beneficio de la sociedad puertorriqueña.

Como segunda parte de nuestro análisis, la Comisión de Hacienda revisó las escalas salariales propuestas en la presente medida y las comparó con las incluidas por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en su borrador del plan de clasificación y retribución (2022)¹¹, y concluyó que el Proyecto del Senado 894 no es significativamente incompatible con la escala recomendada en este borrador producto del análisis de la OARTH. Por lo que, esta se ajusta a los fondos aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal mediante el Plan Fiscal Certificado de 2022 para la implementación del Plan de Clasificación y Retribución propuesto dentro de la Reforma del Servicio Público.

A su vez, la determinación de implementar escalas salariales por la vía administrativa, a través del plan de retribución elaborado por la OARTH, o mediante legislación, como pretende esta medida, queda a la entera discreción de la Asamblea Legislativa por diseño constitucional. El derecho administrativo nace mediante la delegación de poderes de la Asamblea Legislativa por razón de conocimiento especializado que debe tener la agencia a quien se le delega el poder. No obstante, esto no impide que la Asamblea Legislativa legisle nueva política pública que imponga controles a los poderes delegados. Mas aún, al momento de este informe, OATRH no ha publicado los cambios al Borrador de Plan que se encuentra publicado en su página web. Esto a pesar de anunciar que la implementación de dicho plan no publicado será el 1 de febrero de 2023, retroactivo al 1 de enero de 2023.

¹¹ Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos. (2022). *Plan de Clasificación de Puestos y de Retribución Uniforme para el Gobierno Central*. <https://oath.pr.gov/ServiciosProgramas/Planes/Plan%20de%20Clasificacin/Agrupacion%20de%20Clases%20de%20Pu%20estos%20por%20Escalas%20de%20Sueldos%20final.pdf>

Por otra parte, esta Comisión ha modificado la fecha de implementación al 1 de julio de 2023 para que, de ser necesarios, ajustes presupuestarios a las agencias para asumir el impacto fiscal, se pueda atender mediante el presupuesto del año fiscal 2023-2024.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. del S. 894, con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Hon. Juan Zaragoza Gómez
Presidente
Comisión de Hacienda, Asuntos Federales
y Junta de Supervisión Fiscal”

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 992, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

“LEY

Para enmendar la Sección 1031.01 (b)(10)(A)(iii) del Subcapítulo A del Capítulo 3 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de excluir del ingreso bruto la cantidad total de cualquier deuda condonada por concepto de préstamos estudiantiles por el Gobierno de los Estados Unidos de América; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La situación económica de Puerto Rico ha requerido que, por décadas, miles de estudiantes universitarios tengan la necesidad de solicitar préstamos estudiantiles para poder financiar sus estudios. Estos préstamos son otorgados por el Gobierno Federal, quien luego de que el estudiante finaliza sus estudios comienza a realizar gestiones para recobrar la deuda. Esto ha causado que, con el pasar del tiempo, muchos de nuestros estudiantes culminen sus grados universitarios sumergidos en deudas y con pocas posibilidades de obtener un ingreso que les permita cumplir a cabalidad con el pago de esta. Lo que redundo en complicaciones económicas a largo plazo.

Lo anterior ha generado preocupación general. El tema de la condonación de los préstamos estudiantiles por el Gobierno Federal ha sido eje de debate durante los pasados años. Sin embargo, adquirió un papel fundamental durante la campaña primarista a la Presidencia de los Estados Unidos del Partido Demócrata en las elecciones del 2020 y de igual forma fue incluida como parte de las propuestas del actual presidente Joe Biden en las pasadas elecciones.

Durante la pandemia del Covid-19, como medida de alivio para las personas que tienen deuda por concepto de préstamos estudiantiles, se han anunciado varias pausas en los pagos de los préstamos estudiantiles. El 24 de agosto de 2022, el presidente Joe Biden anunció la condonación de hasta veinte mil (\$20,000) dólares para los estudiantes que hayan realizado estudios universitarios con el financiamiento público de la beca Pell y diez mil (\$10,000) dólares para aquellos que no hayan sido elegibles. A su vez, también se anunció una extensión final en el pago de préstamos hasta el 31 de

diciembre de 2022. Este anuncio además de representar un alivio para nuestros estudiantes, promueve el desarrollo económico al tiempo que los ciudadanos beneficiados tendrán menos obligaciones financieras y mayor poder adquisitivo disponible para invertir en otras áreas de la economía de Puerto Rico.

Eso por esto que, aun cuando el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011” atiende la condonación de préstamos estudiantiles, la Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar dicha disposición con el fin de aclarar que la exclusión del ingreso se aplicará a toda condonación de deuda de préstamos estudiantiles otorgada por el Gobierno Federal.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se enmienda la Sección 1031.01 (b)(10)(A)(iii) del Subcapítulo A del Capítulo 3 de la Ley 1-2011, conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendada, para que lea como sigue:

“Sección 1031.01. — Ingreso Bruto

(a) Definición General...

...

(b) Exclusiones del Ingreso Bruto.- Las siguientes partidas serán excluidas de la definición de ingreso bruto:

(1) ...

...

...

(10) Ingreso derivado de la condonación de deudas –

(A) Exclusión —No estará sujeto a contribución sobre ingresos bajo este Subtítulo el ingreso derivado de la condonación de deudas, en todo o en parte, si dicha condonación es por razón de cualesquiera de los siguientes casos:

(i) ...

...

(iii) La deuda condonada, en todo o en parte, es un préstamo estudiantil a nivel graduado o subgraduado y es condonado por el Gobierno de los Estados Unidos de América o es un préstamo estudiantil y la condonación es a tenor con una disposición de dicho préstamo que permita la condonación, en todo o en parte, si el contribuyente trabaja por un período de tiempo determinado en ciertas profesiones o para determinados patronos (que no sea el prestamista).

(v) ...

~~(vi) — La deuda condonada, en todo o en parte, es un préstamo estudiantil a nivel graduado o subgraduado y es condonada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.~~

(B) Reducción de atributos contributivos...

...”

Artículo 2. – Vigencia

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.”

“INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación con enmiendas del P. del S. 992.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para enmendar la Sección 1031.01 (b)(10)(A)(*iii*) del Subcapítulo A del Capítulo 3 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de excluir del ingreso bruto la cantidad total de cualquier deuda condonada por concepto de préstamos estudiantiles por el Gobierno de los Estados Unidos de América; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA MEDIDA

La situación económica de Puerto Rico ha requerido que, por décadas, miles de estudiantes universitarios tengan la necesidad de solicitar préstamos estudiantiles para poder financiar sus estudios. Estos préstamos son otorgados por el Gobierno Federal, quien luego de que el estudiante finaliza sus estudios comienza a realizar gestiones para recobrar la deuda. Esto ha causado que, con el pasar del tiempo, muchos de nuestros estudiantes culminen sus grados universitarios sumergidos en deudas y con pocas posibilidades de obtener un ingreso que les permita cumplir a cabalidad con el pago de esta. Lo que redundará en complicaciones económicas a largo plazo.

Lo anterior ha generado preocupación general. El tema de la condonación de los préstamos estudiantiles por el Gobierno Federal ha sido eje de debate durante los pasados años. Sin embargo, adquirió un papel fundamental durante la campaña primarista a la Presidencia de los Estados Unidos del Partido Demócrata en las elecciones del 2020 y de igual forma fue incluida como parte de las propuestas del actual presidente Joe Biden en las pasadas elecciones.

Durante la pandemia del Covid-19, como medida de alivio para las personas que tienen deuda por concepto de préstamos estudiantiles, se han anunciado varias pausas en los pagos de los préstamos estudiantiles. El 24 de agosto de 2022, el presidente Joe Biden anunció la condonación de hasta veinte mil (\$20,000) dólares para los estudiantes que hayan realizado estudios universitarios con el financiamiento público de la beca Pell y diez mil (\$10,000) dólares para aquellos que no hayan sido elegibles. A su vez, también se anunció una extensión final en el pago de préstamos hasta el 31 de diciembre de 2022. Este anuncio, además de representar un alivio para nuestros estudiantes, promueve el desarrollo económico al tiempo que los ciudadanos beneficiados tendrán menos obligaciones financieras y mayor poder adquisitivo disponible para invertir en otras áreas de la economía de Puerto Rico.

Eso por esto que, aun cuando el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011” atiende la condonación de préstamos estudiantiles, la Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar dicha disposición con el fin de aclarar que la exclusión del ingreso se aplicará a toda condonación de deuda de préstamos estudiantiles otorgada por el Gobierno Federal.

La Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal (“Comisión de Hacienda”) del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 992, solicitó memoriales explicativos al Colegio de Contadores Públicos Autorizados (en adelante, “Colegio de CPA”), al Departamento de Hacienda (en adelante, “DH”), a la Autoridad de Asesoría Financiera y

Agencia Fiscal (en adelante, “AAFAF”) y a la Junta de Supervisión Fiscal (en adelante, “JSF”). Al momento de la redacción de este informe

Aixa González Reyes

Colegio de Contadores Públicos Autorizados

La presidenta del Colegio de CPA, la señora **González**, expresó concederle total deferencia al DH por su impacto fiscal y al estar sujeto bajo sus deberes ministeriales, reconociendo que es una medida que trae justicia a nuestros estudiantes. De igual forma, comentó que la medida no afecta los recaudos del Fondo General, ya que “no nos parece que este ingreso hubiese figurado en el análisis de recaudos por contribución sobre ingresos a la hora de estimar sus ingresos en el Presupuesto General de Gastos”. A su vez, puntualizó el hecho de que la condonación no debe convertirse en un ingreso tributable, sino en un alivio, y recomendó realizar una evaluación sobre el tratamiento contributivo sobre los intereses pagados de los préstamos estudiantiles desembolsados antes de la condonación. Esto ante una posible devolución bajo el cumplimiento de ciertos criterios.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 del Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107-2020, según enmendada, luego de evaluar la medida, esta Comisión estima que, el P. del S. 992 no tendrá impacto fiscal sobre los presupuestos de los municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

En vista del anuncio, por parte del presidente Joe Biden, de la condonación de hasta veinte mil (\$20,000) dólares para los estudiantes que hayan realizado estudios universitarios con el financiamiento público de la beca Pell y diez mil (\$10,000) dólares para aquellos que no hayan sido elegibles, la Comisión de Hacienda entiende prioritario impulsar la presente medida antes de que finalice el año contributivo en diciembre.

Existe la posibilidad de que algunas personas resulten beneficiadas con esta iniciativa. De no aprobarse la presente medida, estas prestatarias deberán tributar al Estado por la cantidad condonada de su deuda estudiantil.

Por otra parte, la Comisión de Hacienda, coincide con el parecer del CCPA en cuanto a que la medida no conlleva un impacto fiscal, toda vez que, de la información evaluada, no se desprende que, al momento de estimar los ingresos en el Presupuesto General de Gastos, este posible ingreso haya figurado en el análisis de recaudos por contribución sobre ingresos. Además, fundamentalmente, los ingresos no recaudados responden a una concesión extraordinaria, los mismos no están contemplados en el plan fiscal, ni representan para el Estado una pérdida de ingresos con los que contaba en años anteriores. Como consecuencia, la medida es fiscalmente neutral. Por lo que, debemos resaltar que, cualquier tipo de condonación a estos fines no debe convertirse en un ingreso tributable, sino mantenerse en lo que realmente es; un alivio.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. del S. 992, con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Hon. Juan Zaragoza Gómez
Presidente
Comisión de Hacienda, Asuntos Federales
y Junta de Supervisión Fiscal”

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1000, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

“LEY

Para enmendar el Artículo 2.048 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; enmendar la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los artículos 5 y 7, y añadir un nuevo Artículo 10-B, en el Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”; y enmendar los artículos 1 y 6 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, mediante la cual se autoriza al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública a expedir los denominados “certificados de antecedentes penales”, con el propósito de restituir la facultad del Departamento de Corrección y Rehabilitación para expedir el denominado “Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar”, y para permitir el empleo de exconfinados en el servicio público municipal, salvo por las excepciones enumeradas en esta Ley, en aras de fomentar su reinserción en la comunidad como personas productivas y útiles y restaurar el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, en su parte pertinente nos indica que, será la política pública del Estado “...reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”. A esos efectos, es la política pública del Gobierno de Puerto Rico, la creación de un sistema integrado de seguridad y administración correccional donde las funciones y deberes se armonicen en un proceso facilitador a la imposición de penas y medidas de seguridad, así como a la custodia de los ciudadanos que han sido encontrados incurso en la comisión de un delito o falta y que establezcan procesos de rehabilitación moral y social del miembro de la población correccional o transgresor, a fin de fomentar su reincorporación a la sociedad.

Con la aprobación del “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, se reenfocaron y redirigieron las funciones de la Agencia, hacia la custodia y la rehabilitación, proveyendo un tratamiento adecuado por personal capacitado, de tal forma que, conforme a los ajustes institucionales de la clientela, se pueda evidenciar su rehabilitación.

Dicho lo anterior, el Departamento de Corrección y Rehabilitación es la Agencia de la Rama Ejecutiva encargada de implementar la política pública del Gobierno de Puerto Rico en el sistema

correcional para menores transgresores y para adultos. Su misión es proveer custodia y rehabilitación a los miembros de la población correccional, imputados y menores transgresores, por medio de la implementación de servicios de calidad, la integración, combinación e innovación de programas educativos, de fe y de reinserción comunitaria.

La administración y operación de la agencia recae en los componentes de su estructura organizacional, la cual está compuesta por la Oficina del Secretario, la Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos, la Secretaría Auxiliar de Gerencia y Administración, la Secretaría de Presupuesto y Finanzas, la Oficina de Prensa y Protocolo, la Secretaría Auxiliar de Asuntos Legales e Investigativos, las Oficinas Regionales, la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios y la Secretaría Auxiliar de Seguridad. A nuestro juicio, este diagrama organizacional ha propiciado una línea de administración y jerarquía más clara, a tono con una adecuada visión de gerencia.

Por otra parte, y de conformidad con el antes citado Plan de Reorganización, el Departamento de Corrección y Rehabilitación propende, asiste y garantiza la continuidad de los servicios del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ), el Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas (PEATC), el Programa de Salud Correccional y la agencia adjunta conocida como la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Respecto a la rehabilitación de los miembros de la población correccional, la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios ha establecido diversos servicios, entre los que destacan, alimentos, salud física, mental y dental, educativos, vocacionales, trabajo social institucional y comunitario, socio penales institucional y comunitario, récord penal, remedios administrativos, recreativos y religiosos, entre otros.

De igual manera, el Departamento diseñó un sistema diversificado de instituciones, programas y recursos humanos para que se viabilice un mejor tratamiento individualizado. Para esto, se creó el Programa Integral de Reinserción Comunitaria, a través del cual se integraron varios componentes del sistema correccional, para trabajar en lo que es su mayor prioridad: la rehabilitación de los que han delinquido, sin menoscabar la seguridad pública. Forman parte de este esfuerzo el Negociado de Rehabilitación y Tratamiento, el cual les provee servicios biopsicosociales; el Negociado de Instituciones Correccionales; la Oficina de Capellanía que brinda ayuda espiritual; y el Negociado de Comunidad, a través del cual, los técnicos de servicios socio penales supervisan a las personas integradas en las distintas instituciones.

Como si lo anterior no fuera poco, se estableció una Oficina de Colocación de Empleos con la finalidad de ofrecer servicios de evaluación, clasificación, ubicación y seguimiento en cuanto a empleos de confinados y exconfinados que extingan sus penas en la libre comunidad y/o se beneficien de algún programa de desvío, libertad a prueba o bajo palabra y/o supervisión electrónica, entre otros. Cónsono con esto, el Departamento tiene la encomienda de preparar un informe anual sobre los servicios prestados por la Oficina, las necesidades de los confinados relacionadas al empleo, proyecciones de clientela a ser impactada el próximo año, número de clientela servida, servicios ofrecidos, satisfacción de la clientela y de los patronos que ofrecieron sus servicios, el cual se le hace llegar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Asimismo, tiene la obligación de buscar la colaboración de distintos patronos del sector privado, con o sin fines de lucro, para emplear a los confinados y exconfinados; además, efectúa monitorías y evaluaciones de la Oficina, de manera que pueda identificar las deficiencias e implementar las medidas de acción correctiva de inmediato; se lleva a cabo un proceso que facilita la colección de datos e información estadística con respecto a la necesidad de adiestramientos de los confinados, los servicios de empleo ofrecidos, para que haya un marco de referencia real sobre la situación y necesidades de los confinados y se puedan desarrollar sus planes de acción de forma

integral con las entidades concernidas. También, se trabaja con la preparación de análisis de estudios, inventarios de plazas de trabajo disponibles en el sector privado, se suscriben acuerdos contractuales de cooperación con empresas privadas para que los confinados y exconfinados puedan realizar su experiencia de empleo y se les brinde la oportunidad de ser retenidos en los mismos.

Lamentablemente, a pesar de los arduos esfuerzos generados desde el Departamento de Corrección y Rehabilitación a favor de la reinserción comunitaria de los confinados y exconfinados, existen leyes que impiden que se logre la cabal consecución de la política pública contenida en la Constitución de Puerto Rico. Para el año 2004, fue promulgada la ahora extinta Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación. En síntesis, esta Ley establecía que la filosofía, la política correccional y los recursos del Gobierno de Puerto Rico tenían que asignarse y utilizarse para lograr la rehabilitación moral y social de los confinados y confinadas a fin de que el sistema correccional cumpla con el mandato constitucional dispuesto. A esos efectos, la Ley buscaba que las agencias gubernamentales y las organizaciones comunitarias, crearan programas dinámicos y participativos para facilitar y potenciar el desarrollo de las capacidades de los convictos y confinados para fomentar su reinserción en la comunidad como personas productivas y útiles y restaurar el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad.

En torno a lo dicho en el párrafo que antecede, la Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación proveyó para la emisión de un certificado de rehabilitación que acreditaba que el sentenciado recluso en una institución penal se había rehabilitado. Esto, daba base para presentar una solicitud ante el Tribunal que dictó sentencia para que se diera por cumplida el resto de la pena privativa de libertad. Se sabe que las disposiciones relativas a la Ley que permite la emisión de certificados de antecedentes penales tienen como consecuencia que los ex confinados que recién cumplen su sentencia no puedan obtener un certificado de buena conducta y, por ende, tampoco un empleo. Este Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar se hizo para que funcionara de forma complementaria al certificado de antecedentes penales. Específicamente, les permite tener mayores oportunidades de obtener un empleo para lograr la tan deseada reinserción comunitaria.

Al igual que en la Ley del Mandato Constitucional, la existencia de dicho certificado fue reconocido en el Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, en el derogado Código Penal de Puerto Rico de 2004 y en la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, que es la que autoriza la expedición de los antes mencionados “certificados de antecedentes penales”.

Sin embargo, tal y como se mencionara anteriormente, tanto la Ley 149-2004, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, así como la Ley 377-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación”, fueron derogadas, lo que ha dejado incertidumbre con respecto a cómo proceder con la otorgación de los certificados de rehabilitación y capacitación para trabajar. Por ello, se entiende prudente y razonable aclarar el estado de derecho con respecto a este documento, y restituir la facultad del Departamento de Corrección y Rehabilitación para expedir el denominado “Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar”, luego de haber sido derogada la Ley 377, antes citada.

En adición a lo anterior, y como un mecanismo adicional para fomentar la reinserción del ex confinado en la comunidad como personas productivas y útiles y restaurar el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad, es la intención de esta Ley, permitirles el empleo en el servicio público municipal, salvo por varias excepciones. Entre las excepciones, se dispone que cualquier persona calificada que interese participar en las funciones públicas del municipio no podrá formar parte del “Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores” o del “Registro de Personas Convictas por Corrupción y Delitos Relacionados”; no podrá haber incurrido en conducta

deshonrosa; no podrá haber sido destituido del servicio público por causa que le inhabilite; no haber sido convicto de delito que implique depravación moral o infracción de los deberes oficiales; no podrá ser adicto al uso habitual y excesivo de sustancias controladas o bebidas alcohólicas; y no podrá haber sometido o intentado someter información falsa o engañosa en solicitudes de examen o de empleo.

De presentarse algunas de estas circunstancias, estas no aplicarían cuando el candidato haya sido habilitado para el servicio público por el Secretario del Departamento del Trabajo o cuando éste ostente un Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar.

Sin duda, las disposiciones contenidas en la presente Ley ayudan a dar cumplimiento al mandato expreso incluido en la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico. Con la ampliación de los programas de trabajo del Departamento de Corrección y Rehabilitación se impacta a la población sentenciada interesada en ser partícipes del mejoramiento económico de Puerto Rico, a través de su reinserción al mundo laboral.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2.048 de la Ley 107-2020, según enmendada, para que se lea como sigue:

“Artículo 2.048— Disposiciones sobre Reclutamiento y Selección

Todo municipio deberá ofrecer la oportunidad de ocupar puestos de carrera o transitorios a cualquier persona cualificada que interese participar en las funciones públicas del municipio. Esta participación se establecerá en atención al mérito del candidato, sin discrimen por razón de raza, color, sexo, nacimiento, edad, orientación sexual, identidad de género, origen o condición social, ni por ideas políticas o religiosas.

(a) Condiciones generales para ingreso — Se establecen las siguientes condiciones generales para ingreso al servicio público municipal:

- (1) Estar física y mentalmente capacitado para desempeñar las funciones del puesto.
- (2) Ser ciudadano de Estados Unidos de América o extranjero legalmente autorizado a trabajar en Estados Unidos de América.
- (3) *No formar parte del “Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores” o del “Registro de Personas Convictas por Corrupción y Delitos Relacionados”.*

[(3)] (4) No haber incurrido en conducta deshonrosa.

[(4)] (5) No haber sido destituido del servicio público por causa que le inhabilite.

[(5)] (6) No haber sido convicto de delito **[grave o por cualquier otro delito]** que implique depravación moral o infracción de los deberes oficiales.

[(6)] (7) No ser adicto al uso habitual y excesivo de sustancias controladas o bebidas alcohólicas.

[(7)] (8) No haber sometido o intentado someter información falsa o engañosa en solicitudes de examen o de empleo.

Las últimas cinco (5) causales no se aplicarán cuando el candidato haya sido habilitado para el servicio público por el Secretario del Departamento del Trabajo o cuando éste ostente un Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar, conforme lo dispuesto en el Artículo 10-B del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”.

(b) ...
 ...”

Sección 2.- Se enmienda la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, para que se lea como sigue:

“Sección 6.8. — Habilitación en el Servicio Público.

Es necesario que las personas que formen parte del Servicio Público no hayan incurrido en conducta impropia sancionada por el ordenamiento jurídico. No obstante, el Estado tiene un gran interés gubernamental de que todas aquellas personas que en determinado tiempo quedaron inhabilitadas para ocupar puestos en el servicio público puedan, por sus propios méritos, superar la situación que los inhabilitó e integrarse o reintegrarse, según sea el caso, al servicio. A continuación, se disponen las normas que harán viable ese propósito.

- 1 ...
2. La persona que sea inelegible para el servicio público a tenor con lo dispuesto en el inciso 1 de la presente Sección, tendrá derecho a solicitar ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos su habilitación luego de transcurrido un (1) año desde la fecha en que ocurrió el hecho o se determinaron las circunstancias que causaron su inhabilidad, excepto en los siguientes casos:
 - a. ...
 - ...
 - d. ...
 - e. *Toda persona que ostente un Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar, podrá someter su solicitud de habilitación en cualquier momento.*

...”

Sección 3.- Se enmienda el inciso (1) del Artículo 5 del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, para que se lea como sigue:

“Artículo 5.- Funciones, Facultades y Deberes del Departamento.

El Departamento tendrá las siguientes funciones, facultades y deberes:

- a) ...
- ...
- l) establecer, formalmente, una Oficina de Colocación de Empleos con la finalidad de ofrecer servicios de evaluación, clasificación, ubicación y seguimiento en cuanto a empleos de confinados y exconfinados que extingan sus penas en la libre comunidad y/o se beneficien de algún programa de desvío, libertad a prueba o bajo palabra y/o supervisión electrónica, *o que ostenten un Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar*, entre otros; disponiéndose que el Departamento preparará un informe anual sobre los servicios prestados por la Oficina, las necesidades de los confinados y *exconfinados* relacionadas al empleo, proyecciones de clientela a ser impactada el próximo año, número de clientela servida, servicios ofrecidos, satisfacción de la clientela y de los patronos y *municipios* que ofrecieron sus servicios, el cual hará llegar al (a la) Gobernador(a) y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, no más tarde de sesenta (60) días de haberse concluido cada año fiscal; asimismo, la Agencia tendrá la obligación de buscar la colaboración de distintos patronos del sector privado, con o sin fines de lucro, *así como la de los municipios*, para emplear a los confinados y exconfinados; además, efectuará monitorías y evaluaciones de la Oficina, de manera que pueda identificar las deficiencias e implementar las medidas de acción

correctiva de inmediato; llevará a cabo un proceso que le facilite la colección de datos e información estadística con respecto a la necesidad de adiestramientos de los confinados y *exconfinados*[,] y los servicios de empleo ofrecidos, de manera que **[una vez establecida la oficina, sus directivos tengan]** *se pueda contar con un marco de referencia real sobre la situación y necesidades de los confinados y exconfinados y se puedan desarrollar [sus] planes de acción de forma integral con las entidades concernidas; de igual forma, se coordinará con la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y con los municipios, para la preparación de análisis de estudios, inventarios de las plazas de trabajo disponibles en el sector privado y en los municipios, los acuerdos contractuales de cooperación con las empresas privadas y municipios, para que los confinados y exconfinados puedan realizar su experiencia de empleo y se les brinde la oportunidad de ser retenidos en los mismos; estableciéndose que la participación por parte del sector privado, con o sin fines de lucro, y la de los municipios no será obligatorio, sino de carácter voluntario; y*

...”

Sección 4.- Se enmienda el inciso (jj) del Artículo 7 del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, para que se lea como sigue:

“Artículo 7.- Facultades, Funciones y Deberes del Secretario.

El Secretario tendrá entre otras, las siguientes funciones, facultades y deberes:

a) ...

...

jj) formular junto con el Secretario de Justicia la reglamentación necesaria para expedir y tramitar la **[certificación de rehabilitación]** *el Certificado ~~Certificación~~ de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar, según establecida en el [Código Penal de Puerto Rico de 2004] Artículo 10-B de este Plan de Reorganización;*

...”

Sección 5.- Se añade un nuevo Artículo 10-B en el Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, que se leerá como sigue:

“Artículo 10-B.- *Certificación de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar*

Se dispone que el tribunal que dictó sentencia podrá dar por cumplida la sentencia de cualquier persona convicta de delito grave, incluyendo a los sentenciados con anterioridad a la vigencia del presente Plan de Reorganización, sujeto al procedimiento de certificación de rehabilitación y capacitación para trabajar que se describe en los párrafos subsiguientes.

De concluir el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, a base de las evaluaciones realizadas, que el sentenciado recluido en una institución penal se ha rehabilitado, levantará una certificación y radicará a nombre del sentenciado y en consulta con el Secretario de Justicia una solicitud ante el tribunal para que se dé por cumplida el resto de la pena privativa de libertad.

Será requisito para la expedición de dicha certificación, que el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación cuente con una evaluación y recomendación psicológica a los efectos de que el sentenciado está capacitado para convivir libremente en la sociedad y de que los otros profesionales que lo evaluaron informen detalladamente y por escrito sus determinaciones de la condición de rehabilitado del sentenciado; especialmente si ya no existe ningún peligro de que se manifieste la peligrosidad representada por el acto por el cual cumple sentencia.

Para ser elegible a este procedimiento, las personas que hayan dejado extinguida la sentencia y que cumplan con los siguientes criterios:

- (a) Haber extinguido su sentencia (en confinamiento, en libertad bajo palabra, penas alternas, libertad a prueba o programas de desvío y comunitarios);*
- (b) Haber observado buen comportamiento mientras extinguía la sentencia y estar clasificado en custodia mínima al momento de extinguir su sentencia;*
- (c) En los casos de penas alternas, haber extinguido satisfactoriamente las condiciones impuestas por el Tribunal. En los casos de libertad bajo palabra, haber cumplido con las condiciones impuestas por la Junta de Libertad Bajo Palabra;*
- (d) No haber sido objeto de sanciones disciplinarias durante su último año de confinamiento;*
- (e) No haber sido revocado del privilegio de libertad a prueba o libertad bajo palabra por comisión de nuevo delito o violación de condiciones impuestas durante su último año de confinamiento;*
- (f) No haber arrojado resultados positivos en pruebas de detección de sustancias controladas durante su último año de confinamiento o durante su proceso de supervisión y no estar activo en el uso de sustancias controladas;*
- (g) No tener pendiente ningún proceso judicial criminal en su contra, tanto en los tribunales de jurisdicción estatal como federal. Tampoco, haber sido acusado de la comisión de delitos en el periodo de tiempo que ha permanecido en la libre comunidad.*

Los secretarios de los departamentos de Corrección y Rehabilitación; y Justicia, conjuntamente, adoptarán la reglamentación que establezca el procedimiento para evaluar el ajuste del confinado, y para expedir y tramitar la certificación de rehabilitación.

El tribunal celebrará vista y tendrá plena facultad para decidir la solicitud tomando en consideración la prueba que se le presente, la opinión de la víctima o sus familiares, y las objeciones que el Secretario de Justicia pueda plantear. Dicha prueba contendrá necesariamente la certificación del Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación debidamente justificada, mediante una evaluación del ajuste integral y del comportamiento social durante la reclusión y el cumplimiento del plan de rehabilitación. De resolver favorablemente la certificación de rehabilitación, el tribunal ordenará al Comisionado del Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico que no incluya la convicción en el Certificado de Antecedentes Penales, pero mantenga la misma en el historial del convicto únicamente para fines de reincidencia.”

Sección 6.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, para que se lea como sigue:

“Artículo 1.-Expedición - Autorización [a] al Negociado de la Policía.

Se autoriza [a] al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico la expedición de una certificación, denominada “Certificado de Antecedentes Penales”, contentiva de una relación de las sentencias condenatorias que aparezcan archivadas en el expediente de cada persona que por haber sido sentenciada en cualquier tribunal de justicia de Puerto Rico, o de cualquier otra jurisdicción local, estatal o federal de los Estados Unidos de América, ya tenga un expediente abierto en dicha dependencia o en cualquier otra dependencia análoga o sistema de datos oficial de cualquier jurisdicción local, estatal o federal de los Estados Unidos de América.

En el caso de personas con historial delictivo y/o que no cumplan con los términos de cinco años en los casos de delitos graves, y de seis meses en los casos de delitos menos graves, según dispuesto respectivamente en los Artículos 3 y 4 de esta Ley, podrán obtener un certificado de rehabilitación y capacitación para trabajar que podrá sustituir, el certificado de buena conducta. El

proceso de evaluación para la obtención del mismo será determinado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, **[el cual podrá utilizar como guía el ya dispuesto para otorgar el certificado de rehabilitación establecido bajo el Artículo 104 de la Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, según enmendada]** conforme lo dispuesto en el Artículo 10-B del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”. El patrono se reservará el derecho de solicitar el certificado de buena conducta, en adición al certificado de rehabilitación y **[rehabilitación]** capacitación para trabajar.

La posible expedición del certificado de rehabilitación y capacitación para trabajo aquí contemplado no será de aplicación para personas que formen parte del “Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales **[Violentos]** y Abuso Contra Menores” o del “Registro de Personas Convictas por Corrupción y *Delitos Relacionados*”.”

Sección 7.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, para que se lea como sigue:

“Artículo 6.-Sentencia revocada.

No se incluirá en el certificado de antecedentes penales que se expida, toda sentencia:

- (a) ...
- (b) ...
- (c) que se dé por cumplida por un tribunal conforme **[el Artículo 104 del nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico]** a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico” o a lo dispuesto en el Artículo 10-B del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011” **[el Artículo 7 de la Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación];**
- (d) que haya sido habilitada por la Oficina **[Central de Asesoramiento Laboral y Administración de Recursos Humanos (OCALARH)]** de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), o;
- (e) que haya sido eliminada del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores.”

Sección 8.- Salvedad.

Si cualquier palabra, inciso, sección, artículo o parte de esta Ley fuese declarado inconstitucional o nulo por un tribunal, tal declaración no afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones y partes de esta Ley, sino que su efecto se limitará a la palabra, inciso, oración, artículo o parte específica y se entenderá que no afecta o perjudica en sentido alguno su aplicación o validez en el remanente de sus disposiciones.

Sección 9.- Derogación Tácita.

Por la presente queda derogada cualquier ley, regla de procedimiento o norma que se encuentre en conflicto con las disposiciones aquí contenidas.

Sección 10.- Cláusula de Supremacía.

Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.

Sección 11.- Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.”

“INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del **P. del S. 1000**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El **Proyecto del Senado 1000** propone enmendar el Artículo 2.048 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; enmendar la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los artículos 5 y 7, y añadir un nuevo Artículo 10-B, en el Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”; y enmendar los artículos 1 y 6 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, mediante la cual se autoriza al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública a expedir los denominados “certificados de antecedentes penales”, con el propósito de restituir la facultad del Departamento de Corrección y Rehabilitación para expedir el denominado “Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar”, y para permitir el empleo de exconfinados en el servicio público municipal, salvo por las excepciones enumeradas en esta Ley, en aras de fomentar su reinserción en la comunidad como personas productivas y útiles y restaurar el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

La Constitución de Puerto Rico establece claramente lo que será la política pública del Estado con respecto al tratamiento de la población penal, en lo pertinente a su rehabilitación moral y social. La misma, establece en su Sección 19 del Artículo VI que será deber del Gobierno:

“...reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”.

A tenor con lo anterior, múltiples han sido los esfuerzos del Gobierno en aras de cumplir cabalmente con el mandato constitucional esbozado y lograr la consecución en la rehabilitación social y moral del confinado y su eventual reinserción como miembro productivo de la sociedad. Esta labor recae primordialmente en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, agencia de la Rama Ejecutiva encargada de implementar y hacer cumplir la política pública en el sistema correccional para menores y adultos transgresores.

Dentro de los múltiples programas que tiene el Departamento para lograr los objetivos antes citados, se encuentra la Oficina de Colocación de Empleos, la cual tiene la finalidad de ofrecer servicios de evaluación, clasificación, ubicación y seguimiento en cuanto a empleos de confinados y exconfinados que extingan sus penas en la libre comunidad y/o se beneficien de algún programa de desvío, libertad a prueba o bajo palabra y/o supervisión electrónica, entre otros.

Así mismo, dicha Oficina tiene la obligación de buscar la colaboración de distintos patronos del sector privado, con o sin fines de lucro, para emplear a los confinados y exconfinados; además,

efectúa monitorías y evaluaciones de la Oficina, de manera que pueda identificar las deficiencias e implementar las medidas de acción correctiva de inmediato; se lleva a cabo un proceso que facilita la colección de datos e información estadística con respecto a la necesidad de adiestramientos de los confinados, los servicios de empleo ofrecidos, para que haya un marco de referencia real sobre la situación y necesidades de los confinados y se puedan desarrollar sus planes de acción de forma integral con las entidades concernidas. También, se trabaja con la preparación de análisis de estudios, inventarios de plazas de trabajo disponibles en el sector privado, se suscriben acuerdos contractuales de cooperación con empresas privadas para que los confinados y exconfinados puedan realizar su experiencia de empleo y se les brinde la oportunidad de ser retenidos en los mismos.

En la actualidad, existen estatutos legales que impiden el que se logre cabalmente el mandato constitucional. En el año 2004, se introdujo la Ley Núm. 377-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación”, que establecía la filosofía, la política correccional y los recursos del Gobierno de Puerto Rico tenían que asignarse y utilizarse para lograr la rehabilitación moral y social de los confinados y confinadas a fin de que el sistema correccional cumpla con el mandato constitucional dispuesto. A esos efectos, la Ley buscaba que las agencias gubernamentales y las organizaciones comunitarias, crearan programas dinámicos y participativos para facilitar y potenciar el desarrollo de las capacidades de los convictos y confinados para fomentar su reinserción en la comunidad como personas productivas y útiles y restaurar el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad. Así mismo, la citada Ley establecía los mecanismos para la emisión de un certificado de rehabilitación que acreditaba que el sentenciado recluso en una institución penal se había rehabilitado.

Se sabe que las disposiciones relativas a la Ley que permite la emisión de certificados de antecedentes penales tienen como consecuencia que los ex confinados que recién cumplen su sentencia no puedan obtener un certificado de buena conducta y, por ende, tampoco un empleo. Este Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar se hizo para que funcionara de forma complementaria al certificado de antecedentes penales. Específicamente, les permite tener mayores oportunidades de obtener un empleo, para lograr la tan deseada reinserción comunitaria.

Al igual que en la Ley del Mandato Constitucional, la existencia de dicho certificado fue reconocido en el Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, en el derogado Código Penal de Puerto Rico de 2004 y en la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, que es la que autoriza la expedición de los antes mencionados “certificados de antecedentes penales”.

Sin embargo, las derogaciones del Código Penal de Puerto de 2004 y la Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación, han dejado incertidumbre con respecto al proceder en la otorgación de los certificados de rehabilitación y capacitación para trabajar; lo cual limita las oportunidades de los ex confinados en conseguir un empleo y lograr una reinserción cabal en la sociedad.

Por último, la medida legislativa objeto de estudio permite el empleo en el servicio público municipal a los ex confinados que cualifiquen para ello, estableciendo ciertas excepciones. Entre las mismas, se encuentra el que cualquier persona cualificada que interese participar en las funciones públicas del municipio no podrá formar parte del “Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores” o del “Registro de Personas Convictas por Corrupción y Delitos Relacionados”; no podrá haber incurrido en conducta deshonrosa; no podrá haber sido destituido del servicio público por causa que le inhabilite; no haber sido convicto de delito que implique depravación moral o infracción de los deberes oficiales; no podrá ser adicto al uso habitual y excesivo de sustancias controladas o bebidas alcohólicas; y no podrá haber sometido o intentado someter información falsa o engañosa en solicitudes de examen o de empleo.

El presente proyecto de Ley busca el que se aclare el estado de derecho con respecto a la otorgación del “Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar” a los ex confinados que cualifiquen para el mismo. De esta manera, estaríamos ampliando las oportunidades para que estos jóvenes, hombres y mujeres transgresores que hayan cumplido su pena, tengan una nueva oportunidad en la sociedad y logren una rehabilitación plena que los haga miembros productivos de su entorno.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación del presente Proyecto, la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico solicitó memoriales explicativos al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Departamento de Justicia (DJ) y al Departamento de Seguridad Pública (DSP). A continuación, se esbozan las posiciones de las agencias que sometieron memoriales explicativos al momento de presentar este informe.

Departamento de Corrección y Rehabilitación

El Departamento de Corrección y Rehabilitación, por conducto de su Secretaria Hon. Ana I. Escobar Pabón, sometió mediante memorial explicativo su postura en torno al Proyecto del Senado 1000.

En su exposición la Secretaria establece que la ley le asigna al Departamento la obligación de establecer programas de rehabilitación efectivos, contando con la participación propia de los miembros de la población correccional, sus familiares y las víctimas del delito, les impone, además, la obligación de evaluar periódicamente los modelos de rehabilitación buscando una mejor efectividad sobre los participantes, establecer programas de educación y trabajo, talleres recreativos, actividades deportivas, garantizar programas de salud correccional y salud mental a la clientela y brindar a sus participantes el tratamiento adecuado para hacer posible su rehabilitación moral y social.

En cuanto al estado de derecho actual, indica el DCR que la rehabilitación se define como:

“el desarrollo de los miembros de la población correccional, partiendo de la decisión individual y voluntaria de éstos, mediante la prestación de servicios por parte del Gobierno y la colaboración de los diversos sectores de la comunidad, a fin de fomentar una conducta cónsona con las normas institucionales y de sana convivencia y, de reintegrarse a la libre comunidad, hacerlo como personas útiles y respetuosas de las leyes”.

En dicho sentido, se entiende que la rehabilitación es una pieza clave en todos los procesos dentro del sistema que, eventualmente, incidirá en múltiples aspectos que afectan a nuestra sociedad.

Sobre el tema de la rehabilitación, el Departamento de Corrección y Rehabilitación expresa que:

“En cuanto a este particular, la Exposición de Motivos de la medida propuesta expresa que *“aun a pesar de los arduos esfuerzos generados desde el Departamento de Corrección y Rehabilitación a favor de la reinserción comunitaria de los confinados y exconfinados, existen leyes que impiden que se logre la cabal consecución de la política pública contenida en la Constitución de Puerto Rico”*. En específico, afirma que la eliminación del llamado “certificado de rehabilitación”, previamente instituido con la ya derogada “Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación”, ha dejado incertidumbre con respecto a cómo proceder con la otorgación de los certificados de rehabilitación y capacitación para trabajar con respecto a los miembros de la población correccional según van extinguiendo sus penas. Por tal razón, se estima razonable el

aclarar el estado de derecho actual con respecto a este documento, y restituir la facultad de DCR para expedir el denominado “Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar”, luego de haber sido derogada la Ley Núm. 377-2004.”

En torno al P. del S. 1000, explica el DCR que la medida procura hacer múltiples enmiendas para atemperar el estado de derecho laboral vigente con la propuesta legislativa. En específico, se enmienda la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico”, para incluir el “Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar” como una de las opciones de habilitación en el servicio público en cualquier momento, así como para atemperar la ley con una excepción a las normas generales de ingreso al servicio público de los municipios para ampliar las oportunidades de aquellos que ostenten favorablemente un certificado de rehabilitación. Así mismo, se propone enmendar la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974 (la cual autoriza al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública a expedir los denominados “certificados de antecedentes penales”), para disponer sobre la no inclusión en los certificados de antecedentes penales de aquellas sentencias debidamente cumplidas, conforme lo dispondrá el nuevo Artículo 10-B del Plan de Reorganización del DCR propuesto por el P. del S. 1000.

A tenor con lo anterior, el Departamento de Corrección y Rehabilitación indica que la intención legislativa de la pieza legislativa objeto de estudio va directamente a atender asuntos estrictamente relacionados con la rehabilitación de los confinados. En dicho sentido, el DCR siempre apoyará iniciativas que fomenten el proceso de rehabilitación del confinado y que les permita reinsertarse en la sociedad como individuos productivos y diestros. Como cuestión de hecho, menciona el DCR que el mismo cuenta con múltiples programas e iniciativas para proveer oportunidades de desarrollo y trabajo desde el enfoque de la rehabilitación a la población correccional. Sin lugar a dudas, exponen que la iniciativa legislativa plasmada en el P. del S. 1000 es cónsona con la política pública del DCR y lo dispuesto en su Plan de Reorganización. Desde su punto de vista, como agencia encargada de ejecutar el mandato constitucional de la rehabilitación moral y social de los confinados, el P. del S. 1000 provee una herramienta adicional para ayudar al confinado en ese proceso de reincorporarse a la sociedad, a la vez que brinda a los municipios un espacio para lograr reclutar y reinsertar en la sociedad a personas totalmente capacitadas para poder aportar a la fuerza laboral.

Departamento de Justicia (DJ)

El Departamento de Justicia, por medio de memorial explicativo suscrito por el Secretario, Hon. Domingo Emanuelli Hernández, sometió su análisis en torno al Proyecto del Senado 1000.

Expone el Departamento que a través de los años, se han aprobado y derogado leyes con el propósito de ayudar a los confinados en sus procesos de rehabilitación y reinserción en la libre comunidad. Con la presente medida, se persigue aclarar el estado de derecho y restituir la facultad del DCR para expedir la “Certificación de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar”, según se establece en el Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”. Además, se pretende permitir que los municipios empleen a los confinados y ex confinados, salvo unas excepciones entre las que se encuentra: que no podrá formar parte del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores; que no podrá haber incurrido en conducta deshonrosa; ni haber sido convicto de delito que implique depravación moral.

Por otro lado, establece el Departamento que la Sección 6.8 de la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico” (en adelante Ley de la OATRH) dispone que es necesario que las

personas que formen parte del servicio público no hayan incurrido en conducta impropia sancionada por el ordenamiento jurídico. A estos efectos, en el inciso (1) del Artículo 6.8, se establece que serán inelegibles para empleo o contrato de servicios profesionales en el servicio público toda persona que haya incurrido en conducta deshonrosa, adictos por uso habitual y excesivo de sustancias controladas o bebidas alcohólicas, haya sido convicto por delito grave o por cualquier delito que implique depravación moral o haya sido destituido del servicio público. Sin embargo, toda persona que sea inelegible para el servicio público, según dispuesto en el inciso (1), tendrá derecho a solicitar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) su habilitación, luego de transcurrido un (1) año desde la fecha en que ocurrió el hecho o se determinaron las circunstancias que causaron su inhabilidad, excepto en los siguientes casos:

- a. En los casos de adictos al uso habitual y excesivo de sustancias controladas o de alcohol, no es aplicable el requisito del año desde la fecha en que surgió la inhabilidad. El factor a considerarse, antes de que el Departamento del Trabajo asuma jurisdicción, será la certificación expedida por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción indicando que la persona está recomendada favorablemente para habilitación.
- b. Todo empleado público convicto a quien se le conceda una sentencia suspendida o el beneficio de libertad bajo palabra que cumpla su sentencia en la libre comunidad bajo aquellas limitaciones impuestas por los organismos del Sistema Correccional Gubernamental, podrá someter su solicitud de habilitación en cualquier momento al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos o en su defecto, la Agencia para la cual presta servicios vendrá obligada a someterla. El empleado continuará desempeñándose en su puesto hasta tanto el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos determine lo contrario.
- c. Toda persona indultada, podrá someter su solicitud de habilitación en cualquier momento.
- d. Toda persona convicta a quien se le conceda una sentencia suspendida o el beneficio de la libertad bajo palabra, que cumpla sentencia en la libre comunidad bajo aquellas limitaciones impuestas por los organismos del Sistema Correccional Gubernamental, podrá someter su solicitud de habilitación en cualquier momento.

El P. del S. 1000 pretende añadir un inciso (e) al Artículo 6.8(2) de la Ley de la OATRH para disponer que toda persona que ostente un Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar, podrá someter su solicitud de habilitación en cualquier momento. Además, la Sección 5 de la medida dispone que los secretarios del DCR y del Departamento de Justicia deberán adoptar un reglamento en conjunto que establezca el procedimiento para evaluar el ajuste del confinado y expedir y tramitar la certificación de rehabilitación.

El Departamento de Justicia culmina su análisis indicando que, en términos generales, el propósito de la presente medida trata de un ejercicio válido y loable de la Asamblea Legislativa para aprobar legislación en bienestar de los ciudadanos, enfocándose en la rehabilitación de los confinados y ex confinados. Por lo tanto, no observan impedimento legal para la continuación del trámite legislativo de la medida.

Departamento de Seguridad Pública (DSP)

El Departamento de Seguridad Pública, por conducto de su Secretario, Hon. Alexis Torres Ríos, sometió un memorial explicativo indicando lo siguiente:

“resulta meritorio remitirnos de manera general a la Ley Núm. 254, ante. La misma tiene como objetivo ulterior autorizar al Negociado de la Policía de Puerto Rico a emitir la expedición de una certificación denominada “certificado de antecedentes penales”, que contemple una relación de sentencias condenatorias que aparezcan archivadas en el expediente de cada persona por haber sido sentenciada en cualquier tribunal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (Refiérase al Artículo 1 de la Ley Núm. 254, ante).

Este certificado de antecedentes penales cobija la siguiente información: el nombre completo del peticionario; número del caso y tribunal que dictó la sentencia; fecha de la sentencia; delito(s) por el cual se condenó al solicitante; pena impuesta; si la sentencia se encuentra en etapa de apelación, entre otros. (Remítase al Artículo 2 de la Ley Núm. 254, supra).

Valga destacar que mediante la aprobación de la Ley 314-2004, se enmendó la Ley 254, ante, para establecer que toda persona que hubiera sido convicta por un delito menos grave podrá solicitar del Superintendente (actualmente denominado como Comisionado del NPPR) la eliminación de la convicción del certificado de antecedentes penales, cumpliendo con requisitos tales como que hubieran transcurrido seis (6) meses desde que el peticionario cumplió la sentencia, sin que el mismo cometiera otro delito; y que tenga buena reputación en la comunidad. (Refiérase al Art. 3 de la Ley Núm. 254, supra). En el caso de delitos graves, el tiempo requerido por dicha ley para proceder a la eliminación es de cinco (5) años, contados a partir que la persona extinguió la pena impuesta. Todo, en vías de atemperar la mencionada Ley a los postulados de rehabilitación comprendidos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”

Así mismo, indica el DSP que la medida dispone que para poder expedir la la Certificación de Rehabilitación y Capacitación de Trabajo, será requisito el que el Secretario de Corrección y Rehabilitación cuente con “...una evaluación y recomendación psicológica a los efectos de que el sentenciado está capacitado para convivir libremente en la sociedad y de que los otros profesionales que lo evaluaron informen detalladamente y por escrito sus determinaciones de la condición de rehabilitado del sentenciado; especialmente si ya no existe ningún peligro de que se manifieste la peligrosidad representada por el acto por el cual cumple sentencia.

Para ser elegible a este procedimiento, las personas que hayan dejado extinguida la sentencia y que cumplan con los siguientes criterios: haber extinguido su sentencia (en confinamiento, en libertad bajo palabra, penas alternas, libertad a prueba o programas de desvío y comunitarios); haber observado buen comportamiento mientras extinguía la sentencia y estar clasificado en custodia mínima al momento de extinguir su sentencia; en los casos de penas alternas, haber extinguido satisfactoriamente las condiciones impuestas por el Tribunal. En los casos de libertad bajo palabra, haber cumplido con las condiciones impuestas por la Junta de Libertad Bajo Palabra, entre otros requisitos.

Apoyamos dicho lenguaje, así como también, que los Secretarios de los Departamentos de Corrección y Rehabilitación; y de Justicia, conjuntamente, adoptarán la reglamentación que establezca el procedimiento para evaluar el ajuste del confinado, así como para expedir y tramitar la certificación de rehabilitación.

Lo anterior, porque somos de opinión que la presente legislación, cumple con el balance de interés público que debe promulgar nuestro ordenamiento constitucional: el derecho a la rehabilitación del individuo, en justa armonía con la obligación del Estado de propender a la seguridad del colectivo.”

Culmina el DSP su análisis indicando que avalan los cambios pretendidos al Código Municipal, para permitir que los Municipios puedan contratar a una persona ex convicta, cuando la misma ostente un Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar, conforme lo dispuesto en el Artículo 10-B del Plan de Reorganización 2-2011, antes citado. Ello, porque le permitiría su reinserción a la sociedad, para así lograr su autosuficiencia y la de su entorno familiar. Bajo idénticas máximas, avalan la adopción de las enmiendas a la Ley 8, antes citada, a los fines de establecer que toda persona que ostente un Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar, podrá someter su solicitud de habilitación en cualquier momento. En cuanto a las enmiendas pretendidas a la Ley 254, antes citada, apoyan las mismas, por cuanto tienen como fin atemperar su lenguaje a la existencia del Departamento de Seguridad Pública, al establecer de manera específica que el NPPR está adscrito al mismo.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

La presente medida no contiene ningún tipo de impacto a las arcas fiscales de los municipios de Puerto Rico.

CONCLUSIÓN

El Proyecto del Senado 1000 busca loablemente, el que se corrija una incertidumbre legal producto de las derogaciones de la Ley Núm. 377-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación” y del Código Penal de 2004. La presente pieza legislativa busca restituir al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación la facultad para expedir el Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar, en aras de brindar mayores herramientas en los esfuerzos de rehabilitación de los confinados y buscar el que sean productivos al momento de reinsertarse en la sociedad.

A su vez, la medida pretende ampliar la oferta de trabajo a esta población autorizando el que éstos puedan trabajar en los municipios de la Isla. Esta iniciativa, no solo ayudaría a los ayuntamientos en proveer mayores y mejores servicios a la ciudadanía, sino que tendría un efecto positivo en el desarrollo económico de Puerto Rico.

Esta iniciativa legislativa busca hacer justicia a quienes ya han pagado su deuda con la sociedad. Con esta medida se pretende darles un nuevo comienzo teniendo como norte las obligaciones impuestas por la propia Constitución y las iniciativas establecidas para lograr el proceso de rehabilitación y reinserción social de nuestra población correccional.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto del Senado 1000**, recomendando su aprobación con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)

Thomas Rivera Schatz

Presidente

Comisión de Seguridad Pública
y Asuntos del Veterano”

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 719, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

“RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre el establecimiento e implantación de la política pública declarada en la Ley Núm. 129-2005, según enmendada, conocida como “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y en la Ley Núm. 62-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El desarrollo de iniciativas para fortalecer nuestra economía y la creación de empleos, han sido punta de lanza para encaminar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así, han sido muchas las medidas legislativas impulsadas a través de los años con el fin de promover el desarrollo económico local. Ejemplo de ello lo fue la aprobación de la Ley Núm. 129-2005, según enmendada, conocida como “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y la Ley Núm. 62-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante”.

La Ley Núm. 129, *supra*, estableció como política pública del Estado Libre Asociado la creación de un programa de reservas con el fin de que las instrumentalidades del gobierno central asignaran un quince por ciento (15%) del total de la partida destinada a compras de su presupuesto general, para que fuese destinado a realizar compras en el sector de las microempresas, y de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), siempre que la situación fiscal así lo permitiera o produjera ahorros al fisco. La ley también dispone que las agencias del Gobierno de Puerto Rico deberán adjudicar la mitad de dicha porción presupuestaria a mujeres empresarias propietarias de microempresas, pequeñas o medianas empresas, según definidas en la ley, siempre que dicha adjudicación sea beneficiosa al erario público, y que cumpla con los requisitos legales aplicables. Por su parte, la Ley Núm. 62, *supra*, aumentó el total de la reserva a veinte por ciento (20%).

Posteriormente, la Ley Núm. 248-2015 dispuso que el por ciento de la reserva se aumentaría de forma escalonada comenzando con un treinta por ciento (30%) para el año fiscal 2016-2017; treinta y dos por ciento (32%) para el año fiscal 2017-2018; treinta y cinco por ciento (35%) para el año fiscal 2018-2019; treinta y ocho por ciento (38%) para el año fiscal 2019-2020 y cuarenta por ciento (40%) para el año fiscal 2020-2021. Sin embargo, este aumento escalonado se aplicaría si la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) determina que la situación fiscal permite el aumento o si produce un ahorro al fisco.

Además, se estableció la obligatoriedad al Secretario de Hacienda de reservar al menos un tres por ciento (3%) del flujo de efectivo que recibe y destinar el mismo al pago de la partida de compra de materiales a las micro, pequeñas y medianas empresas cuyas facturas se hayan procesado correctamente por parte de los departamentos, agencias, instrumentalidades, municipios y demás dependencias públicas.

De otra parte, la Ley Núm. 62, *supra*, dejó claro que el plan de desarrollo económico de la Isla tendría como punto focal al pequeño y mediano comerciante. A esos fines, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispuso que todo incentivo para crear empleos, o mantener los existentes, así como toda la ayuda disponible para los empresarios y que los apoye a ~~afrentar~~ *manejar* sus costos operacionales, debe tener como prioridad, en primera instancia, las microempresas y al pequeño y mediano comerciante.

En vista de que la Ley Núm. 129 establece que tanto la reserva del 20% como los incrementos progresivos a la misma para compras del gobierno a las PyMEs, estarán sujetos a que la OGP determine si la situación fiscal imperante lo permite, y que la Ley Núm. 62 brindó prioridad a los pequeños y medianos negocios, corresponde a esta Asamblea Legislativa determinar si la política pública antes descrita se está cumpliendo debidamente *de forma efectiva*. Asimismo, que se lleve a cabo un estudio del nivel de compras locales de las agencias y corporaciones públicas. A tales efectos, se ~~aprueba~~ *recomienda la aprobación de* la presente Resolución.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre el establecimiento e implantación de la política pública declarada en la Ley Núm. 129-2005, según enmendada, conocida como “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y en la Ley Núm. 62-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante”.

Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe al Senado de Puerto Rico con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de noventa (90) días después de la aprobación de esta Resolución.

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.”

“INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos, previa consideración, recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 719, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

La R. del S. 719 propone realizar una investigación abarcadora sobre el establecimiento e implantación de la política pública declarada en la Ley Núm. 129-2005, según enmendada, conocida como “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y en la Ley Núm. 62-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante”.

Esta Comisión entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una situación que puede ser atendida por la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico, según dispuesto en la Regla 13 “Funciones y Procedimientos en las Comisiones” del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 719 con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Marially González Huertas
Presidenta
Comisión de Asuntos Internos”

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 45, y se da cuenta del Informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

“LEY

Para enmendar el Artículo 597 ~~del Capítulo XII~~ del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933, según enmendado; y el ~~inciso (1) del~~ Artículo 2 de la Ley Núm. 282-1999, según enmendada, conocida como “Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario”, ~~a fin de eliminar el requisito de que los albaceas tengan que obtener~~ a los fines de acelerar la ejecución de la última voluntad del testador mediante la eliminación de las cartas testamentarias; requiriéndose en su lugar la otorgación de un acta notarial como requisito para aceptar el nombramiento de ejecutor de la herencia hecho en un testamento; disponer sobre la validez de las cartas testamentarias expedidas por un Notario autorizado o por el Tribunal en o antes del 31 de diciembre de 2023; y para otros fines relacionados. ~~atemperar a dicho efecto las normas vigentes.~~

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Artículo 597 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico ~~(32 LPRA sec. 2571)~~ establece la figura de las cartas testamentarias y el procedimiento para obtener estas, “sin lo cual {el albacea} no podrá hacerse cargo de los bienes del finado”. Se trata de la introducción de una figura del “common law” en nuestro ordenamiento de derecho civil. Aunque nuestra figura del albaceazgo es heredada del Código Civil de España, la realidad es que en ese país no existe tal cosa como una expedición de cartas testamentarias.

La aprobación del Artículo 597, *supra*, se remonta a 1905, con la promulgación de la Ley de Procedimientos Legales Especiales de ~~aquel~~ aquel año. Se trata de una figura extraña al Derecho Civil en materia de sucesiones sucesoral que, además, carece de un historial legislativo que nos indique cuál fue la intención del legislador al añadir a nuestro ordenamiento jurídico esa figura ~~del “common law”~~ de la carta testamentaria. Parecería que su adopción en 1905, se debió más a la visión dominante de entonces de sustituir las instituciones civilistas puertorriqueñas por las de tradición u origen angloamericano como parte de un proyecto de asimilación cultural, dirigida a estabilizar la dominación política del territorio recientemente conquistado. Hoy puede parecer chocante que fuese así, pero las declaraciones claras de algunas instituciones y de pensadores de la época lo demuestran. Por dar solo dos ejemplos, en *Esbrí v. Serrallés*, 1 DPR 321, 337 (1902), se afirmó: “Las doctrinas y principios Americanos deben regular las Cortes de Puerto Rico hasta en la interpretación de la Leyes de España que aun (sic) se encuentren en los Estatutos de Puerto Rico.” Por su parte, el pensador Roscoe Pound en su obra *El espíritu del “Common Law”* afirmó: “Muchos síntomas permiten creer que, en Filipinas y Puerto Rico, la aplicación de un código romano con el método del *common law* dará lugar a un sistema angloamericano en lo sustancial, aunque sea hispanoamericano por sus palabras.” La aprobación del Artículo 597, *supra*, se inscribió en ese contexto.

Ese enfoque fue descartado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en *Valle v. Amer. Inter. Ins. Co.*, 108 DPR 692, 695-697 (1979), decisión que sigue vigente en lo que a la aplicación de Derecho Civil se refiere. Específicamente, la citada opinión judicial revocó “todo lo que entrañe la utilización de preceptos del derecho común para resolver problemas de derecho civil”. En consecuencia, los problemas de Derecho Civil en Puerto Rico, incluyendo cómo hacer efectivo el albaceazgo, se resuelven mediante los preceptos y principios del Derecho Civil, no del derecho

angloamericano. Nuestro ordenamiento tiene los preceptos y recursos propios para resolver esos problemas y son estos los que debemos usar.

Otra consideración, esta vez de orden económico, nos mueve a aprobar esta medida. Bajo el vigente Artículo 597, *supra*, el ~~albacea~~ *ejecutor de la herencia* tiene que realizar ciertos trámites y gestiones ante el notario que autorizó el testamento del que surge el *su* nombramiento ~~del albacea~~, “sin lo cual no podrá [el albacea] hacerse cargo de los bienes del finado”, y luego tiene que presentar una petición al Tribunal de Primera Instancia, acompañada de los documentos apropiados, para que este expida las llamadas “cartas testamentarias”, “las cuales -reza el citado artículo- constituirán prueba de su autoridad”. Es decir, absurdamente el testamento no es prueba de la autoridad que el testador dio al *ejecutor de la herencia* ~~albacea~~.

Lo anterior supone gastos para la persona o personas que interesan se obtengan las llamadas cartas testamentarias. Primero, tiene que contratar y pagar un abogado que realice todos los trámites previos a la presentación de la petición al tribunal o realizarlos ellos mismos, a su costa y sin los conocimientos necesarios para cumplir correctamente este tipo de requisitos técnicos y complejos. Segundo, tienen que incurrir en los costos de un caso judicial. Tercero, tienen que esperar que el tribunal actúe para poder hacerse cargo de los bienes, ejecutar las disposiciones testamentarias, *entre otros* ~~etc.~~. Estos procedimientos son costosos, innecesarios y lentos.

Nuestro sistema de derecho civil invistió de autoridad pública al Notario para que dé fe de actos, contratos y negocios privados. Un testamento debidamente autorizado por un notario público es prueba suficiente, por sí mismo, de la voluntad del testador y de la autoridad de la persona ~~allí~~ nombrada ~~como~~ *ejecutor de la herencia* ~~albacea~~. ¿Qué aportan a esa autoridad el largo, engorroso y costoso trámite judicial? Nada. ~~La~~ *Para esta Asamblea Legislativa la* autoridad testamentaria del *ejecutor de la herencia* ~~albacea~~ se demuestra con una copia certificada del testamento *y con la oportuna aceptación del cargo hecho a su favor mediante la otorgación de un acta notarial*. Finalmente, suprimir la intervención del tribunal en estos trámites ayuda a descongestionar el calendario judicial.

No pasa igual con el administrador judicial, porque este es nombrado por el tribunal, no por el testador. Por tanto, en esta medida se preservan algunos elementos del Artículo 597 del Código de Enjuiciamiento Civil relacionados al administrador judicial.

Por todo lo cual, mediante esta Ley se elimina ~~Esta medida propone eliminar~~ la figura innecesaria y extraña de las “cartas testamentarias”, ~~aligerar~~ *se aligeran* los trámites de los interesados en el manejo de la herencia y ~~ayudar~~ *se ayuda* a descargar a los tribunales de instancia ~~del en el~~ manejo de *sus* casos. *Además, a través de esta Ley se atempera el Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico a la figura del “ejecutor de la herencia” incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Título VI de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, toda vez que es sobre dicha figura que subyacen los cargos de albacea, administrador y contador partidor como clases de ejecutores de la herencia.*

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 597 del Capítulo XII del Código de Enjuiciamiento Civil, según enmendado, para que se lea como sigue:

“CAPÍTULO XII.- ACEPTACIÓN DEL CARGO DE EJECUTOR DE LA HERENCIA ALBACEA O ADMINISTRADOR

Artículo 597.- Aceptación del Cargo; expedición de copia certificada del testamento.

Todo ~~albacea~~ *ejecutor de la herencia* que *desea aceptar* ~~acepte~~ el nombramiento hecho a su favor en un testamento, deberá *requerir* ~~entregar~~ al *notario* ~~funcionario~~ en cuya oficina se *encuentra*

~~halla~~ protocolado el testamento, o ante cualquier otro notario, en caso de que este haya cesado su práctica por razón de fallecimiento o cualquier otro motivo, la otorgación de un acta notarial aceptando el cargo ~~una aceptación del cargo juramentada~~, comprometiéndose a cumplir, del mejor modo que le fuere dable, sus obligaciones como ejecutor de la herencia albacea, sin lo cual no podrá hacerse cargo de los bienes del finado. El notario o funcionario que reciba la aceptación del cargo ~~juramentada~~, la archivará junto al testamento y, a solicitud del ejecutor de la herencia albacea, expedirá una copia certificada del testamento, junto a la correspondiente Certificación Acreditativa de Testamento, acompañada de una copia del acta notarial donde aceptó el cargo ~~de la aceptación del cargo juramentada~~, también certificada. La copia así certificada del testamento y acta notarial será prueba suficiente de la autoridad del ejecutor de la herencia albacea para ejercer su cargo y funciones. En caso de que no se haya nombrado ~~albacea~~ ejecutor de la herencia y se demuestre al tribunal que es necesario o apropiado el nombramiento de un administrador judicial, se procederá conforme a lo dispuesto en los Artículos 556 al a 567, ~~según enmendados~~, del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933, según enmendado. Tan pronto como un administrador haya prestado su fianza y juramento oficial, el juez o tribunal que lo hubiere nombrado expedirá a su favor una resolución judicial bajo su sello, en testimonio de su autoridad.

Todas las cartas testamentarias expedidas, conforme a derecho, por un Notario autorizado o por el Tribunal de Primera Instancia en o antes del 31 de diciembre de 2023 mantendrán su vigencia y validez.”

Sección 2.-Se enmienda el ~~inciso (1) del~~ Artículo 2 de la Ley Núm.-282-1999, según enmendada, para que se lea como sigue:

“Artículo 2.-Asuntos No Contenciosos.

El notario, además de conocer de los asuntos y procedimientos que al presente se le atribuyen por ley, podrá tramitar los siguientes asuntos y procedimientos:

- 1.- De la Ley de Procedimientos Legales Especiales, antes el Código de Enjuiciamiento Civil: procedimientos de testamentaría y abintestato: declaratoria de herederos (Artículos 552 y 553).
- 2.- ...
3. ...
4. ...
5. ...”

Sección 3. – Todos los casos sobre expedición de cartas testamentarias pendientes de ser resueltos por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico podrán, a preferencia de la parte solicitante, continuar su curso ordinario en dicho foro. Todas las cartas testamentarias expedidas conforme a derecho por un Notario autorizado o por el Tribunal de Primera Instancia en o antes del 31 de diciembre de 2023 mantendrán su vigencia y validez.

Sección ~~43~~.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.”

“INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. de la C. 45, recomienda su aprobación, con enmiendas, según incluidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 45 tiene como propósito “enmendar el Artículo 597 del Capítulo XII del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, según enmendado; y el inciso (1) del Artículo 2 de la Ley Núm. 282-1999, según enmendada, conocida como “Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario”, a fin de eliminar el requisito de que los albaceas tengan que obtener cartas testamentarias; y atemperar a dicho efecto las normas vigentes”.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión informante solicitó y obtuvo comentarios del Colegio Notarial de Puerto Rico. Asimismo, tras evaluar el trámite otorgado al P. de la C. 45 por la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, complementamos nuestro análisis con los comentarios emitidos por el Colegio de Abogados de Puerto Rico (“CAPR”) y su Instituto del Notariado Puertorriqueño, resultando, a nuestro juicio, suficientes para evaluar e informar positivamente esta medida.

ANÁLISIS

El Código Civil de Puerto Rico dispone que, tras la muerte de una persona natural, corresponde determinar si la sucesión de esta será testamentaria, intestada o mixta. En cuanto a la primera, se configura cuando la voluntad del causante queda plasmada en un testamento. En ausencia de testamento, entonces la sucesión es conocida como intestada, para lo cual, regirán las disposiciones estatutarias y jurisprudenciales que determinan la transmisión de derechos y obligaciones a los herederos que así resulten llamados.¹²

Nuestro ordenamiento jurídico define el testamento como aquel “negocio jurídico solemne, personalísimo, unilateral y esencialmente revocable mediante el cual una persona natural dispone, total o parcialmente, el destino de sus bienes para después de su muerte **y ordena su propia sucesión...**”¹³ (Énfasis suplido) En Puerto Rico, los testamentos se clasifican como abiertos, especiales u ológrafos. El testamento abierto requiere ser otorgado ante un Notario, sin necesidad de testigos, mientras que el testamento ológrafo es redactado, fechado y firmado por el propio testador. Como parte de ese acto personalísimo, el Código Civil de Puerto Rico permite al testador designar un ejecutor de la herencia. Consecuentemente, quien resulte designado como tal, tendrá la responsabilidad de realizar aquellas encomiendas y facultades declaradas por el testador, lo cual podrá hacer a título universal o particularmente, según corresponda.

Estatutariamente se dispuso al albacea como uno de los ejecutores de la herencia, definiéndose como “la persona designada expresamente por el testador para ejecutar o vigilar la ejecución de su última voluntad”¹⁴. Sin embargo, asumir este cargo es voluntario, y por tanto, renunciabile.¹⁵ Por ende, solo haremos alusión a esta figura cuando ocurre una sucesión testada, esto es, cuando el causante ha otorgado anterior a su fallecimiento un testamento. Cabe destacar que, para que una persona ostente autoridad suficiente que le permita actuar como albacea, nuestro actual estado de derecho le requiere obtener del Tribunal de Primera Instancia¹⁶, o de un Notario, unas cartas testamentarias donde se consagre o valide su aceptación al cargo y responsabilidades.¹⁷

¹² 31 L.P.R.A. § 10911-10916

¹³ *Id.*, § 11251

¹⁴ *Id.*, L.P.R.A. § 11511

¹⁵ *Id.*, § 11541

¹⁶ 32 L.P.R.A. § 2590

¹⁷ 4 L.P.R.A. § 2155

Según estadísticas de la Oficina de Administración de los Tribunales (“OAT”), para el año fiscal 2018-2019 se resolvió un total de cincuenta y cuatro (54) causas de acción sobre cartas testamentarias. Bajo la causa de acción combinada de declaratoria de herederos y/o cartas testamentarias, el Poder Judicial resolvió diez mil novecientos sesenta y dos (10,962) casos.¹⁸ En contraste, durante el 2017-2018 el Tribunal resolvió doscientos setenta y nueve (279) solicitudes para dichos fines; y para el año fiscal 2016-2017 se atendió la suma de cuatrocientas noventa y seis (496) solicitudes de expedición de cartas testamentarias.¹⁹

Así las cosas, el P. de la C. 45 pretende enmendar el Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico y la Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario, a los fines de eliminar el trámite requerido a los ejecutores de la herencia de obtener cartas testamentarias para legitimar su autoridad. Dicha propuesta descansa en el entendido de que del testamento emana autoridad suficiente para designar a una persona como ejecutor, pues, por ejemplo, ante testamentos abiertos, ya ha ocurrido la intervención de un Notario, y por ende, la dación de fe pública. Sin embargo, a nuestro juicio, es saludable mantener un procedimiento ante los Notarios, para que ante el requerimiento de un ejecutor de herencia se otorgue un acta notarial aceptando dicho formalmente cargo. Entendemos que de esta forma minimizamos situaciones de especulación, evitando que se desconozca si uno o varios designados como ejecutores de herencia realmente aceptaron dicho nombramiento. Actuar en contrario, y dejar esta ventana abierta solo propiciaría escenarios donde una sucesión testada se mantenga en incertidumbre. Tampoco es saludable que una persona por el mero hecho de ostentar copia certificada de un testamento realice gestiones de administración de un caudal hereditario sin que coexista una expresión formal y oficial de su parte validando haber aceptado dicho cargo.

Además, incluimos una importante enmienda para evitar que aquellas personas que hayan presentado una petición al Tribunal para que se les expida las cartas testamentarias, así puedan continuar con tales procedimientos, y una vez expedidas dichas cartas testamentarias estas mantengan su vigencia y legalidad. Igualmente, se añade lenguaje para asegurar la legalidad y vigencia de cartas testamentarias expedidas por el Tribunal con anterioridad a la aprobación de esta Ley.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Colegio Notarial de Puerto Rico

El presidente del Colegio Notarial, Arsenio Comas Rondón, en memorial suscrito en conjunto con Manuel Pérez Caballer, favorecen el P. de la C. 45, con enmiendas. En esencia, no muestran objeción a que se elimine la competencia notarial plasmada en el inciso (1) del Artículo 2 de la “Ley de Asuntos No Contenciosos ante Notario”, toda vez que incluso se suprime la expedición de cartas testamentarias en el foro judicial.

Ahora bien, recomiendan se mantenga un procedimiento ante el Notario, mediante la autorización de acta notarial como mecanismo para aceptar el cargo de ejecutor de herencia. Desde su punto de vista es vital se mantenga un mecanismo de aceptación, ya que “el otorgamiento del acta de aceptación del cargo se custodia y perpetúa en el Protocolo del Notario como Instrumento Público y evita la complicación de tener que archivar en el protocolo del notario autorizante del testamento un documento privado adicional que no es instrumento público.” Y es que, según exponen, “en un acta notarial se da fe de la veracidad del contenido del instrumento, así como de la identidad y capacidad

¹⁸ Anuario Estadístico 2018-2019, disponible en <https://poderjudicial.pr/documentos/informes/Anuario-Estadistico-2018-2019.pdf>

¹⁹ Anuarios Estadísticos 2017-2018 y 2016-2017, disponibles en: <https://poderjudicial.pr/documentos/informes/Anuario-Estadistico-2017-2018.pdf> y <https://poderjudicial.pr/documentos/informes/Anuario-Estadistico-2016-2017.pdf>

jurídica del otorgante”. Esto contrasta con la declaración jurada, actual mecanismo utilizado para aceptar o repudiar el cargo, siendo este un documento “donde solo se da fe limitada de la firma, lugar y fecha de otorgamiento”.²⁰

Colegio de Abogados de Puerto Rico

En memorial suscrito por la Lcda. Daisy Calcaño López y la Lcda. Olga B. Rosas Vélez, el CAPR en conjunto con el Instituto del Notariado Puertorriqueño, **expresan favorecer la aprobación del P. de la C. 45**. En síntesis, comenta que “el testamento autorizado por un notario público es prueba suficiente de la autoridad de la persona allí nombrada albacea”. En este sentido, concurren con los argumentos vertidos en la Exposición de Motivos de la medida, al tiempo que añaden que otra manera de demostrar la validez de un testamento es mediante certificación expedida por la Oficina de Inspección de Notaría (“ODIN”). El costo de dicho trámite, contrario a un proceso judicial, implica la cancelación de un Sello de Rentas Internas de apenas cinco dólares (\$5.00).

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico certifica que, el P. de la C. 45 no impone una obligación económica en el presupuesto de los Gobiernos Municipales.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. de la C. 45, con enmiendas.

Respetuosamente sometido;

(Fdo.)

Hon. Gretchen M. Hau

Presidenta

Comisión de lo Jurídico”

SR. RUIZ NIEVES: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. RUIZ NIEVES: Para un breve receso.

SR. PRESIDENTE: Breve receso en Sala.

RECESO

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos.

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para comenzar con la discusión del Calendario de Órdenes Especiales.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

²⁰ Memorial Explicativo del Colegio Notarial de Puerto Rico, en la página 3.

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA

Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 45, titulado:

“Para enmendar el Artículo 5.02 de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” con el propósito de expandir los requisitos para ocupar el cargo de Comisionado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; y para otros fines relacionados.”

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 45 propone enmiendas en su informe, para que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe? Si no hay objeción, aprobadas.

SR. APONTE DALMAU: La medida propone enmiendas en Sala, para que se lean.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

ENMIENDAS EN SALA

En la Exposición de Motivos:

Página 1, párrafo 1, línea 3,

eliminar “de Puerto Rico” y sustituir por “Central”

Página 1, párrafo 1, línea 7,

eliminar “la Isla” y sustituir por “Puerto Rico”

En el Decrétase:

Página 2, línea 2,

después de “enmendada” insertar “,”

Página 2, línea 8,

después de “Pública” eliminar todo su contenido y sustituir por un “.”

Página 2, línea 9,

eliminar todo su contenido

Página 3, líneas 17 y 18,

eliminar todo su contenido y sustituir por “Si cualquier parte de esta”

Página 3, línea 21,

después de “la” eliminar todo su contenido

Página 3, línea 22,

eliminar todo su contenido

Página 4, línea 1,

eliminar todo su contenido y sustituir por “parte específica de esta Ley que así hubiere sido anulada o”

Página 4, líneas 3 y 4,

eliminar todo su contenido y sustituir por “cualquier parte de esta fuera”

Página 4, línea 10,

después de “partes, o” insertar “,”

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para aprobar las enmiendas en Sala.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción a las enmiendas en Sala presentadas, aprobadas.

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para aprobar el Proyecto del Senado número 45, según ha sido enmendado.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, aprobado.

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, la medida propone enmiendas en su título, para que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el informe? Si no hay objeción, aprobadas.

SR. APONTE DALMAU: Hay una enmienda en Sala al título, para que se lea.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

ENMIENDA EN SALA

En el Título:

Línea 2, después de “Puerto Rico” insertar “,”

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la enmienda presentada en Sala? Si no hay objeción, aprobada.

SR. APONTE DALMAU: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 533, titulado:

“Para enmendar el inciso (34) del apartado (a) de la Sección 1031.02 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de eximir a los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia y a los Oficiales de Servicios Juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación de tributación por las partidas de ingreso devengadas por concepto de horas extras trabajadas; y para otros fines relacionados.”

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 533 tiene enmiendas en Sala, para que se lean.

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala.

ENMIENDAS EN SALA

En la Exposición de Motivos:

Página 1, párrafo 1, línea 1, eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes”

Página 1, párrafo 2, línea 1, después de “ocasiones” eliminar “,”

Página 2, línea 1, eliminar “nuestros” y sustituir por “los”

En el Decrétase:

Página 2, línea 2, eliminar “Núm.”

Página 2, línea 10, eliminar “miembro” y sustituir por “integrante”

Página 2, línea 11, después de “enmendada” eliminar “,” y sustituir por “.”

Página 2, línea 12, eliminar todo su contenido

Página 2, línea 13, después de “tributación” eliminar “,”

Página 2, línea 14, eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes”

Página 2, línea 18,
Página 3, línea 6,

eliminar “a” y sustituir por “con”
eliminar “miembro” y sustituir por “integrante”

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para aprobar las enmiendas en Sala.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas presentadas en Sala? Si no hay objeción, aprobadas.

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para aprobar el Proyecto del Senado 533, según ha sido enmendado.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 533, según ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí. En contra, no. Aprobado.

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, la medida propone enmiendas en Sala al título, para que se lean.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

ENMIENDAS EN SALA

En el Título:

Línea 1,
Línea 3,

eliminar “Núm.”
eliminar “miembros” y sustituir por
“integrantes”

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda. Aprobadas.

SR. APONTE DALMAU: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 894, titulado:

“Para crear la “Ley de salario base para los y las profesionales del trabajo social en Puerto Rico” a los fines de establecer un salario base para los profesionales del trabajo social tanto en el sector público como en el sector privado; establecer la responsabilidad de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico para viabilizar el cumplimiento de esta ley en el sector público; facultar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para velar por el cumplimiento de esta ley en el sector privado; establecer mandato de creación de escalas salariales; y para otros fines relacionados.”

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, vamos a dejar en un turno posterior el Proyecto del Senado 894.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Proyecto del Senado 894 será considerado en un turno posterior.

SR. APONTE DALMAU: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 992, titulado:

“Para enmendar la Sección 1031.01 (b)(10)(A)(iii) del Subcapítulo A del Capítulo 3 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de excluir del ingreso bruto la cantidad total de cualquier deuda condonada por concepto de préstamos estudiantiles por el Gobierno de los Estados Unidos de América; y para otros fines relacionados.”

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 992 propone enmiendas en el informe, para que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción a la petición del señor Portavoz que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe, aprobadas.

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, la medida propone enmiendas en Sala, para que se lean.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

ENMIENDAS EN SALA

En la Exposición de Motivos:

Página 1, párrafo 1, línea 5,

Página 2, párrafo 1, línea 5,

Página 2, párrafo 2, línea 8,

Página 2, párrafo 2, línea 9,

eliminar “de nuestros”

eliminar “de igual forma” y sustituir por “, de igual forma,”

eliminar “nuestros” y sustituir por “el estudiantado,”

eliminar “estudiantes,”

En el Decrétase:

Página 2, línea 2,

Página 2, línea 3,

antes de “Código” insertar “””

después de “2011” insertar “””

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la aprobación de las enmiendas presentadas en Sala? Si no hay objeción, aprobadas.

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para aprobar el Proyecto del Senado 992, según ha sido enmendado.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 992, los que estén a favor dirán que sí. En contra, no. Aprobado.

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, la medida propone enmiendas en su título, para que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Son enmiendas al título sugeridas en el informe, ¿alguna objeción? Si no hay objeción a las mismas, aprobadas.

SR. APONTE DALMAU: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 1000, titulado:

“Para enmendar el Artículo 2.048 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; enmendar la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los artículos 5 y 7, y añadir un nuevo Artículo 10-B, en el Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”; y enmendar los artículos 1 y 6 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, mediante la cual se autoriza al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública a expedir los denominados “certificados de antecedentes penales”, con el propósito de restituir la facultad del Departamento de Corrección y Rehabilitación para expedir el denominado “Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar”, y para permitir el empleo de exconfinados en el servicio público municipal, salvo por las excepciones enumeradas en esta Ley, en aras de fomentar su reinserción en la comunidad como personas productivas y útiles y restaurar el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.”

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1000 propone enmiendas en Sala, para que se lean.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

ENMIENDAS EN SALA

En la Exposición de Motivos:

Página 2, párrafo 1, línea 1,

después de “Constitución” insertar “del Estado Libre Asociado”

Página 2, párrafo 1, línea 2,

eliminar “nos”; después de “pública” eliminar “del Estado”

Página 2, párrafo 1, línea 5,

eliminar “del Gobierno de” y sustituir por “en”

Página 2, párrafo 1, línea 10,

eliminar “miembro” y sustituir por “integrante”

Página 2, párrafo 3, línea 2,

eliminar “del Gobierno de” y sustituir por “en”

Página 2, párrafo 3, línea 4,

eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes”

Página 3, línea 4,

eliminar “A nuestro juicio, este” y sustituir por “Este”

Página 3, párrafo 2, línea 1,

eliminar “miembros” y sustituir por “integrantes”

Página 4, líneas 2 y 3,

eliminar “y/o” y sustituir por “o” en ambas instancias

Página 4, párrafo 2, línea 4,

después de “Constitución” insertar “del Estado Libre Asociado”

Página 5, línea 1,

eliminar “de Puerto Rico”

Página 6, párrafo 3, línea 3,

después de “Constitución” insertar “del Estado Libre Asociado”

En el Decrétase:

Página 8, línea 12,

después de “enmendado” eliminar todo su contenido y sustituir por “.”

Página 8, línea 13,

eliminar todo su contenido

Página 8, línea 21,

eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno”

Página 10, línea 4,

eliminar “y/o” y sustituir por “o” en ambas instancias

Página 13, línea 14,

eliminar “estatal” y sustituir por “local”

Página 14, línea 18,

eliminar “y/o” y sustituir por “o”

Página 14, línea 22,

eliminar “,”

Página 15, línea 5,

después de “enmendado” eliminar todo su contenido y sustituir por “.”

Página 15, línea 6,

antes de “El” eliminar todo su contenido

Página 15, línea 10,

después de “contemplado” insertar “,”

Página 15, línea 22,

eliminar “conocida como “Código Penal de Puerto Rico”

Página 16, línea 1,

después de “enmendado” eliminar todo su contenido

Página 16, línea 2,

eliminar todo su contenido

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para aprobar las enmiendas en Sala.

SR. PRESIDENTE: Vamos a aprobar las enmiendas al título surgidas del informe, debo decir, las enmiendas en el informe. Si no hay objeción, aprobadas.

Las enmiendas en Sala presentadas por Secretaría, si no hay objeción, aprobadas.

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para aprobar el Proyecto del Senado 1000, según ha sido enmendado.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, aprobado.

SR. APONTE DALMAU: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del Senado 719, titulada:

“Para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre el establecimiento e implantación de la política pública declarada en la Ley Núm. 129-2005, según enmendada, conocida como “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y en la Ley Núm. 62-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante”.”

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, la Resolución del Senado 719 propone enmiendas en Sala, para que se lean.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Ramón Ruiz Nieves, Presidente Accidental.

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Señor Portavoz.

SR. APONTE DALMAU: La Resolución del Senado 719 propone enmiendas en el informe, para que se aprueben.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueban.

SR. APONTE DALMAU: Para que se lean las enmiendas en Sala.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante.

ENMIENDAS EN SALA

En la Exposición de Motivos:

Página 1, párrafo 1, línea 1,

Página 1, párrafo 1, líneas 5 y 7,

Página 2, párrafo 1, línea 1,

Página 2, párrafo 1, línea 7,

Página 2, párrafo 1, línea 10,

Página 2, párrafo 1, línea 11,

Página 2, párrafo 2, línea 1,

Página 2, párrafo 2, línea 7,

Página 2, párrafo 4, línea 1,

Página 2, párrafo 4, línea 2,

Página 3, párrafo 1, línea 1,

eliminar “nuestra” y sustituir por “la”

eliminar “Núm.” en ambas instancias

eliminar “Núm. 129” y sustituir por “129-2005”

eliminar “de Puerto Rico”

después de “público” eliminar “,”

eliminar “Núm. 62” y sustituir por “62-2014”

eliminar “Núm.”

eliminar “(OGP)”

eliminar “Núm. 62” y sustituir por “62-2014”

eliminar “de la Isla” y sustituir por “del País”

eliminar “Núm. 129” y sustituir por “129-2005,

supra,”; eliminar “20%” y sustituir por “veinte

(20) por ciento”

eliminar “Núm. 62” y sustituir por “62-2004,

supra,”; después de “negocios” eliminar “,”

Página 3, párrafo 1, línea 4,

En el Resúlvase:

Página 3, línea 2,

Página 3, línea 3,

Página 3, línea 4,

eliminar “abarcadora”

eliminar “Núm.”

después de “enmendada,” eliminar todo su contenido

Página 3, línea 5,

eliminar todo su contenido y sustituir por “y en la Ley 62-2014, según enmendada.”

Página 3, líneas 6 y 7,

eliminar todo su contenido

Página 3, líneas 8 a la 12,

eliminar todo su contenido y sustituir por “Sección 2.- La Comisión podrá celebrar vistas públicas; citar funcionarios y testigos; requerir información, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta Resolución, de conformidad

con el Artículo 31 del Código Político de Puerto Rico de 1902.

Sección 3.- La Comisión presentará un primer informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de los próximos noventa (90) días contados a partir de la aprobación de esta Resolución y un informe final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de concluir la Séptima Sesión Ordinaria de la Décimo Novena Asamblea Legislativa.

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.”

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para aprobar las enmiendas en Sala.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueba.

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para aprobar la Resolución del Senado 719, según ha sido enmendado.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Aquellos que estén a favor dirán que sí. Aquellos que estén en contra dirán que no. Aprobado.

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, la medida propone enmiendas en Sala al título, para que se lean.

SR. APONTE DALMAU: Adelante con las mismas.

ENMIENDAS EN SALA

En el Título:

Línea 2,

eliminar “abarcadora”

Líneas 4 y 5,

eliminar “Núm.” en ambas instancias

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueban.

SR. APONTE DALMAU: Próximo asunto.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 45, titulado:

“Para enmendar el Artículo 597 ~~del Capítulo XII~~ del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933, según enmendado; y el ~~inciso (1) del~~ Artículo 2 de la Ley ~~Núm. 282-1999~~, según enmendada, conocida como “Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario”, ~~a fin de eliminar el requisito de que los albaceas tengan que obtener~~ a los fines de acelerar la ejecución de la última voluntad del testador mediante la eliminación de las cartas testamentarias; requiriéndose en su lugar

la otorgación de un acta notarial como requisito para aceptar el nombramiento de ejecutor de la herencia hecho en un testamento; disponer sobre la validez de las cartas testamentarias expedidas por un Notario autorizado o por el Tribunal en o antes del 31 de diciembre de 2023; y para otros fines relacionados. atemperar a dicho efecto las normas vigentes.”

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 45, propone enmiendas en su informe, para que se apruebe.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara, con enmiendas al informe, para que se aprueben las mismas. No habiendo objeción se aprueba.

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, la medida propone enmiendas en Sala, para que se lean.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante.

ENMIENDAS EN SALA

En la Exposición de Motivos:

Página 1, párrafo 1, línea 4,

Página 1, párrafo 1, línea 5,

Página 2, párrafo 1, línea 4,

Página 2, párrafo 2, línea 7,

Página 2, párrafo 2, línea 9,

Página 2, párrafo 3, línea 1,

Página 2, párrafo 3, línea 7,

Página 3, párrafo 2, línea 1,

Página 3, párrafo 4, línea 5,

eliminar “nuestro” y sustituir por “el”

antes del “.” insertar “puertorriqueño”

eliminar “nos”; eliminar “a nuestro” y sustituir por “al”

eliminar “Nuestro” y sustituir por “En Puerto Rico, el”

eliminar “debemos” y sustituir por “se debe”

eliminar “nos”; y después de “a” insertar “esta Asamblea Legislativa a”

eliminar “artículo” y sustituir por “Artículo”

eliminar “Nuestro” y sustituir por “El”; después de “civil” insertar “puertorriqueño”

eliminar “a nuestro” y sustituir por “al”

En el Decrétase:

Página 5, línea 20,

después de “Puerto Rico” insertar “o que se encuentren tramitándose a la fecha de aprobación de esta Ley en sede notarial,”

Página 5, línea 21,

después de “foro” añadir “o sede”

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueban.

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para aprobar el Proyecto de la Cámara 45, según ha sido enmendado.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Aquellos que estén a favor del Proyecto 45, dirán que sí. Aquellos que estén en contra dirán que no. Aprobado.

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, la medida propone unas enmiendas en el título, para se aprueben.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante con las mismas. No habiendo objeción, se aprueban.

SR. APONTE DALMAU: Próximo asunto.
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante.

SRA. HAU: Señor Presidente, para un breve receso.
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, breve receso.

RECESO

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.
Señora Portavoz.

SRA. HAU: Señor Presidente, solicito se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día de hoy, para su reconsideración, el P. del S. 299, el cual fuera devuelto por Ejecutivo.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, que sea reconsiderado.

SRA. HAU: Señor Presidente, para que se llame la medida.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del Proyecto del Senado 299, titulado:

“Para enmendar los Artículos 3.4 y 3.7 de la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como “Código de Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, a fin de especificar y reafirmar la intención legislativa en cuanto a que la convicción de un contratista del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por alguno de los delitos establecidos en la Ley conlleva la rescisión inmediata del contrato sin discreción alguna por la agencia pertinente; disponer que el Gobierno, a través del Secretario de Justicia, tendrá el deber de reclamar indemnización al amparo del Artículo 5.2 de este Código, así como sustentar por escrito los fundamentos específicos para la determinación de radicar o no dicha acción; y para otros fines.”

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Señora Portavoz.

SRA. HAU: Señor Presidente, la medida tiene enmiendas en Sala, para que se lean.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante.

ENMIENDAS EN SALA

En el Decrétase:

Página 2, línea 28,

Página 2, entre las líneas 28 y 29,

eliminar “““““”

insertar “Las agencias ejecutivas que tengan la obligación de rescindir un contrato al amparo de lo establecido en esta Ley, deberán aprobar un plan de transición y contingencia para asegurar la continuidad de los servicios esenciales.””

Página 2, línea 37,

eliminar “tendrá el deber de” y sustituir por “podrá”

Página 2, línea 38,

después del “.” eliminar todo su contenido

Página 2, línea 39,

eliminar todo su contenido

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Señora Portavoz.

SRA. HAU: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueban las mismas.

SRA. HAU: Señor Presidente, para que se apruebe el P. del S. 299 en su reconsideración, según ha sido enmendado.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 299 en su reconsideración, aquellos que estén a favor dirán sí. Aquellos que están en contra dirán que no. Aprobado.

SRA. HAU: Señor Presidente, la medida tiene enmiendas en Sala al título, para que se lean.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante con las mismas.

ENMIENDAS EN SALA

En el Título:

Línea 7,	eliminar “tendrá el deber de” y sustituir por “podrá”
Línea 8,	después de “Código” eliminar todo su contenido
Línea 9,	antes de “;” eliminar todo su contenido

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Señora Portavoz.

SRA. HAU: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas en Sala al título, según han sido leídas.

SRA. HAU: Señor Presidente, próximo asunto.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante.

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 894, titulado:

“Para crear la “Ley de salario base para los y las profesionales del trabajo social en Puerto Rico” a los fines de establecer un salario base para los profesionales del trabajo social tanto en el sector público como en el sector privado; establecer la responsabilidad de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico para viabilizar el cumplimiento de esta ley en el sector público; facultar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para velar por el cumplimiento de esta ley en el sector privado; establecer mandato de creación de escalas salariales; y para otros fines relacionados.”

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Señora Portavoz.

SRA. HAU: Señor Presidente, la medida tiene enmiendas al informe, para que se aprueben.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueban.

SRA. HAU: Señor Presidente, la medida tiene enmiendas en Sala, para que lean.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante con las mismas.

ENMIENDAS EN SALA

En la Exposición de Motivos:

Página 2, línea, 4,

Página 2, párrafo 1, línea 10,

Página 2, párrafo 2, línea 5,

Página 2, párrafo 2, línea 6,

Página 2, párrafo 2, línea 7,

Página 2, párrafo 2, línea 8,

Página 2, párrafo 2, línea 9,

Página 2, párrafo 3, línea 1,

Página 3, línea 10,

Página 3, línea 11,

Página 3, línea 12,

Página 3, línea 13,

Página 3, párrafo 1, línea 4,

Página 3, párrafo 1, línea 5,

Página 3, párrafo 2, línea 3,

Página 3, párrafo 2, línea 4,

Página 3, párrafo 2, línea 7,

Página 3, párrafo 2, línea 8,

Página 4, línea 1,

Página 4, línea 4,

Página 4, línea 6,

Página 4, línea 7,

Página 4, tabla, línea 2, quinta columna,

Página 5, párrafo 1, línea 1,

Página 5, párrafo 1, línea 2,

Página 5, párrafo 2, línea 2,

Página 5, párrafo 2, línea 3,

Página 5, párrafo 2, línea 14,

eliminar la nota al calce 1 y todo su contenido

eliminar la nota al calce 2 y todo su contenido

después de “siete” insertar “(67)”; después de “por ciento” eliminar “(67%)”

después de “tres” insertar “(33)”; después de “por ciento” eliminar “(33%)”

eliminar “62%” y sustituir por “sesenta y dos (62) por ciento”

eliminar “38%” y sustituir por “treinta y ocho (38) por ciento”; y después de “ocho” insertar “(88)”

eliminar “(88%)”

eliminar “nuestra” y sustituir por “la”

después de “Puerto Rico” eliminar la “,”

eliminar “y por ende” y sustituir por “y, por ende,”

eliminar la nota al calce 3 y todo su contenido; eliminar “podemos augurar que” y sustituir por “se puede asegurar que”

antes y después de “también” eliminar las “,”

después de “setenta” insertar “(70)”; después de “por ciento” eliminar “(70%)”

eliminar “h” y sustituir por “hora”

eliminar “o \$14.35 la hora” y sustituir por

“(\$14.35/hora)”

después de “Sociales” insertar “,”

después de “Unidos” insertar “,”

eliminar “la hora” y sustituir por “/hora”

después de “Sueldos” insertar “,”

después de “34” insertar “,”

después de “social” insertar “,”

eliminar “171” y sustituir por “Núm. 171 de 11 de mayo”

eliminar “EEUU” y sustituir por “Estados Unidos”

eliminar “que hemos” y sustituir por “,”

antes de “los” eliminar todo su contenido

eliminar “, en” y sustituir por “. En”

eliminar “muchas profesionales deciden” y

sustituir por “toman la decisión de”

eliminar “aspiramos” y sustituir por “se aspira”

En el Decrétase:

Página 6, línea 6,

Página 6, línea 8,

Página 6, línea 9,

Página 7, línea 8,

Página 8, líneas 5, 16 y 20,

Página 9, línea 3,

Página 9, líneas 6, 9, 12,

Página 9, línea 18,

Página 11, línea 9,

Página 11, línea 11,

Página 12, línea 13,

Página 12, línea 14,

Página 12, línea 16,

Página 13, línea 3,

antes de “, excepto” eliminar todo su contenido y sustituir por “siguiente”

eliminar “(CPTSPR)”

después de “los” insertar “y las”

eliminar “estatales” y sustituir por “del Gobierno Central”

después de “homologación” insertar “, “ en todas las instancias

después de “contratos” insertar “,”

después de “homologación” insertar “,” en todas las instancias

eliminar “bases” y sustituir por “base”

eliminar “detrimental para las finanzas” y

sustituir por “perjudicial para las finanzas y pondría en riesgo la continuidad de la

operación”

eliminar “,”

eliminar “y/o” y sustituir por “o”

eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno”

eliminar “y/o” y sustituir por “o”

eliminar “,”

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Señora Portavoz.

SRA. HAU: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueban.

SRA. HAU: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada...

SRA. RODRÍGUEZ VEVE: Señor Presidente.

SRA. HAU: ...señor Presidente, antes de aprobar la medida hay un turno sobre la misma de la senadora Joanne Rodríguez Veve.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante senadora Rodríguez Veve.

SRA. RODRÍGUEZ VEVE: Muchas gracias, señor Presidente.

Hoy me toca nuevamente asumir una postura políticamente antipática, que muchos probablemente catalogarían como una postura contraproducente, desde el punto de vista político electorero, es decir de la política pequeña. Y es que resulta que a algunos le gusta repartir el dinero que no es suyo bajo el lema de justicia social, compañeros hace unos meses legislamos para aumentar el salario mínimo, proyecto al cual le voté a favor y que hoy día ya es Ley. Y le voté a favor, porque creo que si bien el Gobierno debe tener un rol limitado sobre la regulación de la actividad económica, también creo que hay unos mínimos que el Gobierno debe garantizar y entre esos mínimos debe estar un salario digno, pero hoy nos encontramos con otro proyecto de ley mediante el cual la Legislatura pretende decidir sin ninguna evaluación de impacto económico, sin ninguna lógica de naturaleza de estudio del mercado, estudio de viabilidad, etcétera, pretende decidir esta Legislatura que a unos profesionales en específico, tanto del sector público como del sector privado, compañeros, tanto el sector público como del sector privado, se les garantice un salario por encima del salario mínimo que ya legislamos en este Recinto.

Y no tengo la menor duda, compañeros, que definitivamente a mí también me gustaría que los trabajadores sociales ganaran mucho más y tuvieran un salario más alto, pero no solamente los trabajadores sociales, que me gustaría que todos los profesionales pudieran recibir un salario más alto, tanto del sector público como del sector privado. La pregunta es ¿por qué hoy legislamos sobre esto para los trabajadores sociales y mañana no para cualquier otro tipo de profesionales que también queramos que ganen más dinero? Es decir, ¿por qué unos sí y otros no? Cuando aquí evidentemente la única lógica que se está utilizando es ganar más votos en las Elecciones de 2024, porque ustedes crean compañeros que bajo esta lógica politiquera no tengan la menor duda que hoy son para unos, mañana será para todos. Entonces, me pregunto: ¿para qué legislamos un salario mínimo? ¿Qué sentido tiene lo que estamos haciendo desde el punto de vista de una política económica para el país? Pero claro, ante el miedo del costo político de asumir posturas que no son taquilleras, que no son simpáticas, por las que probablemente muchos no te aplaudan, aun sabiendo que esta legislación es un desacierto desde el punto de vista de una política pública económica, sensata. Algunos pretenden que los tentáculos del Gobierno sigan creciendo para controlarlo todo, ese el verdadero espíritu del Proyecto del Senado 894, que el Gobierno cada vez controle más y más no solo en su propio y natural espacio público, sino además que controle cada vez más en el sector privado.

Y esto compañeros, tengo que decirles que es propio de los Gobiernos de izquierda, es propio del Gobierno que creen en el estatismo, en el paternalismo, en la dependencia extrema del aparato del Estado. Y de eso sabe muy bien el sector privado en este país, de eso saben muy bien los empresarios, porque saben que el Gobierno es su mayor y principal dolor de cabeza, porque lejos de facilitar, complica. Y ahora, como si no fuera suficiente con las complicaciones que existen en este país, para emprender, para ser gestores de nuestro propio desarrollo, entonces también, esta Legislatura pretende crear castas de profesionales a quienes se le garantice mediante ley una mayor paga que al resto de los trabajadores. Y como dije, sin ningún criterio económico, sin ningún estudio de viabilidad y sin ninguna otra consideración realmente que sencillamente complacer para ganar votos. Esa es la realidad, y no estoy diciendo que no sean profesionales que merezcan ganar más, por supuesto que lo merecen como lo merecen muchos otros, el problema es cómo se están haciendo las cosas, con la insensatez con la que se está legislando.

Y yo les garantizo compañeros, que estas medidas populistas no nos llevarán a un país de verdadera justicia social, sino a un país de estancamiento, donde la posibilidad de emprender será la excepción y la dependencia en el Gobierno será cada vez mayor. Sé que es muy simpático repartir dinero, sobre todo si el dinero no es de ustedes, eso es facilísimo, muy fácil. Pero, ese no es mi rol, mi rol es ser responsable en mi gestión legislativa me cueste o no me cueste votos.

Son mis palabras, señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Muchas gracias compañera Rodríguez Veve.

Reconocemos su turno al compañero Juan Oscar Morales Rodríguez.

Adelante compañero.

SR. MORALES: Muchas gracias, señor Presidente, y buenas tardes a todos los compañeros.

En la mañana de hoy, en la tarde de hoy nos encontramos viendo el Proyecto del Senado 894, que cuando usted lo lee, pues definitivamente tenemos que llegar a la conclusión de que es un proyecto que busca mejorar las condiciones salariales de unos profesionales, pero no se nos puede olvidar compañeros y compañeras, que nosotros estamos aquí para legislar de manera responsable, no podemos legislar en búsqueda de reconocimiento político y de poder atender a un sector de la profesión de los trabajadores sociales. Y nosotros, tenemos que evaluar y ver el porqué al día de hoy nosotros estamos en la situación que estamos con una Junta de Control Fiscal, porque unos Gobiernos y otros no han sabido -¿verdad?- administrar y llevar las finanzas de Puerto Rico de manera correcta.

Y este proyecto que lo que busca -y no tengo deuda de la buena intención que puedan tener algunos compañeros en mejorar las condiciones salariales-, pero cuando usted lee el proyecto no hay una sola fuente de pago identificada para nosotros poder hacer justicia salarial. Y la pregunta es, ¿eso no fue lo mismo que nos ha llevado al desmadre que nosotros tenemos y que nos ha costado una Junta de Control Fiscal? En adición a eso cuando leemos el informe del proyecto, nos llama la atención, señor Presidente, los comentarios de la agencia del Departamento de la Familia donde ellos sugieren que este proyecto se le consulte a la Oficina de Recursos Humanos, la OATRH, pero nunca le solicitaron a esta oficina la licenciada Maldonado que se expresara con relación a este proyecto, aun sabiendo que el Gobierno de Puerto Rico ha anunciado hace un año atrás, de que está en el camino de implementar lo que es un plan de reclasificación y retribución que será efectivo retroactivo al 1ro. de enero del 2023 y que el señor Gobernador ha anunciado que próximamente, ya para el mes de marzo se va a estar implementando ese plan, pero no le solicitamos a esa oficina. De igual manera el Departamento de la Vivienda recomendó solicitar opinión a OGP y a la AAFAF y en el informe que tenemos aquí ante nuestra consideración emitido por la Comisión de Hacienda, tampoco aparece ninguna expresión, ninguna postura de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la AAFAF, que son yo creo que importantísimas tenerlas.

De igual manera con la de Recursos Humanos, la Junta de Control Fiscal sí se expresó y la Junta de Control Fiscal dice, que esta medida según está redactada, era incompatible con el Plan Fiscal que se sometió. La Junta de Control Fiscal, la que decide ahora aquí en la Colonia qué cosas se hacen y qué cosas no se hacen. Pero cuando leemos esto de la Junta de Control Fiscal, me llama la atención la conclusión que hace nuestra Comisión de Hacienda donde dice y cito: “concluyo que el Proyecto del Senado 894, no es significativamente incompatible con la escala recomendada en este borrador producto del análisis de la OATRH,” o sea, no es significativamente incompatible y escúchenme esto, “por lo que esta se ajusta a los fondos aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal mediante el Plan Fiscal certificado en el 2022”. Pero yo leí anteriormente que la Junta había expresado que era incompatible con el Plan Fiscal, así que aquí alguien no está diciendo la verdad, señor Presidente, este informe de por sí es un informe contradictorio que carece de veracidad que responsablemente este Senado no debe darle paso al mismo, no debe de darle paso al mismo porque nosotros, vuelvo y recalco, recordemos por qué estamos en la situación financiera que estamos, por tomar decisiones que no necesariamente eran las correctas, eran simpáticas, pero no eran las correctas.

Así que yo llamo la atención a compañeros y compañeras del Senado, a que una cosa es lo que dice la Junta de Control Fiscal, pero en nuestra Comisión de Hacienda nos dice que sí que se ajusta al Plan Fiscal aprobado mediante del 2022. Yo, mi petición, señor Presidente y demás miembros del Senado, es que este Proyecto se devuelva a la Comisión de Hacienda y se le consulte a la Oficina de Recursos Humanos para que emita una opinión de acuerdo al plan establecido con la implementación de la retribución que se le va a estar otorgando próximamente a todos los empleados públicos.

Así que mi petición, señor Presidente, es que se devuelva a la Comisión de Hacienda este Proyecto hasta tanto y cuanto no tengamos una posición oficial de la Oficina de Recursos Humanos.

SRA. HAU: Señor Presidente, para un receso.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Breve receso.

RECESO

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Compañera Portavoz.

SRA. HAU: Señor Presidente, no hay objeción a la moción planteada por el compañero Juan Oscar Morales.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción planteada por la moción que presentara el compañero Oscar Morales Rodríguez del Proyecto del Senado, según ha sido enmendado, 894 sea devuelto a Comisión. No habiendo objeción, aprobada.

- - - -

SRA. HAU: Señor Presidente, para un receso en Sala.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, receso.

RECESO

SRA. HAU: Señor Presidente, proponemos se conforme un Calendario de Votación Final donde se incluyan las siguientes medidas: P. del S. 45, P. del S. 299 en su reconsideración, P. del S. 533, P. del S. 992, P. del S. 1000; R. del S. 719; y P. de la C. 45.

Señor Presidente, para que la Votación Final se considere como el Pase de Lista Final para todos los fines legales y pertinentes.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Si no hay objeción, así se acuerda. Tóquese el timbre. Si algún senador o senadora quiere abstenerse o tiene un voto explicativo, este es el momento. Que se abra la Votación.

SRA. SOTO TOLENTINO: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Compañera Migdalia Padilla.

SRA. SOTO TOLENTINO: Wandy Soto Tolentino.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Perdon, perdón. Compañera Wandy Soto.

SRA. SOTO TOLENTINO: Un honor para mí tener ese nombre también.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Compañera Wandy Soto, adelante.

SRA. SOTO TOLENTINO: Para en la reconsideración del Proyecto del Senado 299 mi voto en contra, pero con un voto explicativo.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueba.

Se extiende la Votación cinco (5) minutos más.

SRA. MORAN TRINIDAD: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Compañera Nitza Moran.

SRA. MORAN TRINIDAD: Para que algún técnico venga a revisar la pantalla, la tengo negra completamente.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Alguno de los técnicos que pueda asistir a la compañera.

Se extiende la Votación cinco (5) minutos más.

Se cierra la Votación.

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas:

P. del S. 45

“Para enmendar el Artículo 5.14 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de extender el alcance de las penas y elementos del delito asociado a la prohibición de proveer información falsa sobre un estado de emergencia general o individual y para otros fines.”

P. del S. 299 (rec.)

“Para enmendar los Artículos 3.4 y 3.7 de la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como “Código de Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, a fin de especificar y reafirmar la intención legislativa en cuanto a que la convicción de un contratista del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por alguno de los delitos establecidos en la Ley conlleva la rescisión inmediata del contrato sin discreción alguna por la agencia pertinente; disponer que el Gobierno, a través del Secretario de Justicia, podrá reclamar indemnización al amparo del Artículo 5.2 de este Código; y para otros fines.”

P. del S. 533

“Para enmendar el inciso (34) del apartado (a) de la Sección 1031.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de eximir a los integrantes del Cuerpo de Oficiales de Custodia y a los Oficiales de Servicios Juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación de tributación por las partidas de ingreso devengadas por concepto de horas extras trabajadas; y para otros fines relacionados.”

P. del S. 992

“Para enmendar la Sección 1031.01 (b)(10)(A)(iii) del Subcapítulo A del Capítulo 3 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de excluir del ingreso bruto la cantidad total de cualquier deuda condonada por concepto de préstamos estudiantiles por el Gobierno de los Estados Unidos de América; y para otros fines relacionados.”

P. del S. 1000

“Para enmendar el Artículo 2.048 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; enmendar la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 5 y 7, y añadir un nuevo Artículo 10-B, en el Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”; y enmendar los Artículos 1 y 6 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, mediante la cual se autoriza al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública a expedir los denominados “certificados de antecedentes penales”, con el propósito de restituir la facultad del Departamento de Corrección y Rehabilitación para expedir el denominado “Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar”, y para permitir el empleo de ex confinados en el servicio público municipal, salvo por las excepciones enumeradas en esta Ley, en aras de fomentar su reinserción en la comunidad como personas productivas y útiles y restaurar el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.”

R. del S. 719

“Para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el establecimiento e implantación de la política pública declarada en la Ley 129-2005, según enmendada, conocida como “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y en la Ley 62-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante.”

P. de la C. 45

“Para enmendar el Artículo 597 del ~~Capítulo XII~~ del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico ~~de 1933~~, según enmendado; y el inciso (1) del Artículo 2 de la Ley Núm. 282-1999, según enmendada, conocida como “Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario”, ~~a fin de eliminar el requisito de que los albaceas tengan que obtener~~ a los fines de acelerar la ejecución de la última voluntad del testador mediante la eliminación de las cartas testamentarias; requiriéndose en su lugar la otorgación de un acta notarial como requisito para aceptar el nombramiento de ejecutor de la herencia hecho en un testamento; disponer sobre la validez de las cartas testamentarias expedidas por un Notario autorizado o por el Tribunal en o antes del 31 de diciembre de 2023; y para otros fines relacionados. ~~atemperar a dicho efecto las normas vigentes.~~”

VOTACIÓN

Los Proyectos del Senado 45, 533, 992, 1000; y el Proyecto de la Cámara 45, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia I. González Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, María de L. Santiago Negrón, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos y Ramón Ruiz Nieves, Presidente Accidental.

Total 25

VOTOS NEGATIVOS

Total 0

VOTOS ABSTENIDOS

Total 0

La Resolución del Senado 719, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia I. González Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Keren L.

Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, María de L. Santiago Negrón, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos y Ramón Ruiz Nieves, Presidente Accidental.

Total 18

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:

Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago y Thomas Rivera Schatz.

Total 7

VOTOS ABSTENIDO

Total 0

El Proyecto del Senado 299 (rec.), es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia I. González Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, María de L. Santiago Negrón, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos y Ramón Ruiz Nieves, Presidente Accidental.

Total 17

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:

Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz y Wanda M. Soto Tolentino.

Total 8

VOTOS ABSTENIDOS

Total 0

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Por el resultado de la Votación, todas las medidas han sido aprobadas.

Señora Portavoz.

SRA. HAU: Señor Presidente, para volver al turno de Mociones.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se acuerda.

MOCIONES

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame:

Moción Núm. 2023-0121

Por la senadora Rosa Vélez:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Yedlimar A. de Jesús Centeno, lanzadora del equipo de la *Albergue Olímpico Baseball Academy* (AOBA), por su ejecución destacada en el deporte del béisbol.

SRA. HAU: Señor Presidente, para que conforme a la Regla 32.1 la Comisión de Gobierno sea relevada de la consideración de la R. C. del S. 338.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, aprobado.

SRA. HAU: Señor Presidente, para presentar una Moción a su nombre Ruiz Nieves y de esta servidora Gretchen Hau para enviar un mensaje de reconocimiento y felicitación a la fundación Banco de Ojos del Leonismo Puertorriqueño, institución que celebra su Semana del 11 al 5 de febrero de 2023, en colaboración con los Clubes de Leones de Puerto Rico. Esta organización sin fines de lucro fundada en el 2004 se dedica a ayudar a personas de escasos recursos y médico-indigentes por medio de un programa de donación de tejido de córnea y otros servicios, para que superaran sus condiciones visuales y eviten la ceguera. Son cientos de puertorriqueños que gracias a estos servicios recuperan su visión y vuelven a tener una vida normal y una mejor calidad de vida.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, se aprueba dicha petición y Moción.

Señora Portavoz.

SRA. HAU: Señor Presidente, para unir a la senadora González Huertas a las Mociones 2023-088, 89, 90 y 120.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueba.

SRA. HAU: Señor Presidente, para unirme a las siguientes Mociones: 2023-0058, 0086, 0087, 0089 a la 120.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueba.

SRA. HAU: Señor Presidente, para unir a Javier Aponte a las Mociones del Anejo A, desde la 86 a la 120.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueba.

SRA. HAU: Señor Presidente, para también unir al senador Javier Aponte a la Moción número 58.

Para corregir. Para unir al senador Javier Aponte a las Mociones del Anejo A.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueba.

SRA. HAU: Señor Presidente, para unir al senador Rivera Schatz a las Mociones 58, 86, 87; de la 93 hasta la 118.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueba.

SRA. HAU: Señor Presidente, para unir a la senadora Keren Riquelme a las Mociones 86, 88, 90, 93, 94, 114, 115, 58; 116 a la 120.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueba.

SRA. HAU: Señor Presidente, para unir al senador Dalmau Santiago a la moción presentada por esta servidora, a la cual usted también es autor, con relación a la Fundación Banco de Ojos del Leonismo Puertorriqueño que fue presentada de forma verbal.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueba.

Señora Portavoz, quiero enviar un reconocimiento y reconocer a los estudiantes de la Escuela Pedro Colón Santiago del pueblo de Juana Díaz que nos visitan hoy en las gradas. Jóvenes, gracias por estar aquí, este es su Senado, gracias por decir presente y saben que seguimos trabajando por el pueblo de Juana Díaz como su Senador; Marially González, la compañera Gretchen Hau y Albert Torres, y todo el Senado de Puerto Rico.

Bienvenidos al Senado.

Señora Portavoz.

SRA. HAU: Señor Presidente, como Cuestión de Privilegio, también quiero saludar desde el Hemiciclo a los jóvenes de la Escuela Pedro Colón Santiago, con quien tuve el placer de subir y saludarles. Gracias, jóvenes, por estar aquí, gracias por decir presente. Y ya saben lo que hablamos, dense la oportunidad. Nos vemos.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Señora Portavoz.

Compañera María de Lourdes Santiago.

SRA. SANTIAGO NEGRÓN: Señor Presidente, para unirme a la Moción 2023-0120 y también a la moción reconociendo al Banco de Ojos, presentada por la senadora Hau.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se acuerda.

SRA. HAU: Señor Presidente, para unir al senador William Villafañe a las Mociones 58 a la 120.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueba.

SRA. HAU: Señor Presidente, para unir a la senadora Wandy Soto Tolentino a las Mociones 89 y 120.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueba.

SRA. HAU: Señor Presidente, para una moción a nuestro camarógrafo Gerardo Ortiz, de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del Senado de Puerto Rico, quien cumple hoy 60 años de edad y hace ocho (8) años labora para el Senado, pero hace treinta (30) años de los cuales labora para los medios de comunicación.

Felicidades.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Así se aprueba. Y muchas bendiciones y felicidades al compañero y sobre todo mucha salud.

SRA. HAU: Señor Presidente, para solicitar un receso.

Señor Presidente, antes de solicitar el receso, solicitamos excusar de los trabajos de hoy...

SRA. ROSA VÉLEZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Compañera Elizabeth Rosa.

SRA. ROSA VÉLEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Para que este Alto Cuerpo apruebe la Moción 2023-0121 para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento a la joven arecibeña Jeydimar De Jesús Centeno, lanzadora del equipo del Albergue Olímpico Béisbol Academy, por su ejecución en el deporte del béisbol.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, se aprueba la moción presentada por la compañera Elizabeth Rosa.

SRA. GONZÁLEZ HUERTAS: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Compañera Marially González.

SRA. GONZÁLEZ HUERTAS: Para unirme a la moción presentada por la compañera Elizabeth Rosa.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueba.

Compañera Portavoz.

SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Compañero Vargas Vidot.

SRA. HAU: Señor Presidente, para unirlo a usted y al presidente Dalmau Santiago a la Moción 121.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueba.

Compañero Vargas Vidot.

SR. VARGAS VIDOT: Sí, es para pedir que se me pueda unir a la Moción 2023-0058.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueba.

SRA. RIVERA LASSÉN: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Compañera Ana Irma Rivera Lassén.

SRA. RIVERA LASSÉN: Para unir nuestra delegación a la Moción 2023-120 y a la Moción de la senadora Elizabeth Rosa.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueba.

Señora Portavoz.

SRA. HAU: Señor Presidente, para excusar de los trabajos legislativos de hoy al senador Rubén Soto y al compañero Juan Zaragoza.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, debidamente excusados a todos los fines a los compañeros.

SRA. HAU: Señor Presidente, próximo asunto.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante.

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE

(El señor Bernabe Riefkohl; la señora Santiago Negrón; el señor Vargas Vidot; y la señora Rivera Lassén solicitan Turnos Iniciales al Presidente).

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Compañero Rafael Bernabe había pedido un Turno Inicial.

SRA. SANTIAGO NEGRÓN: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Compañera María de Lourdes Santiago. Vargas Vidot y el compañero Gregorio Matías.

SRA. RIVERA LASSÉN: Yo también tenía uno, señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Compañera Ana Irma Rivera Lassén.

Adelante, compañero Rafael Bernabe.

SR. BERNABE RIEFKOHL: Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas personas han expresado indignación y sorpresa con la noticia que vemos en el periódico de hoy de la prohibición de un libro sobre Roberto Clemente en un distrito escolar en la Florida y la indignación es justificada, pero la sorpresa no es justificada, esta prohibición es parte de una política que se está implantando en muchísimos distritos escolares en Estados Unidos para combatir lo que la derecha en ese país, la derecha reaccionaria llama los estudios críticos sobre la raza, que no es otra cosa que una campaña para que no se discuta el tema del racismo en las escuelas de muchos lugares en Estados Unidos. Es una parte de una política que quiere borrar parte de la historia.

Los pueblos tienen aspectos admirables en su historia, todos los pueblos, y todos los pueblos tienen aspectos en su historia que no son admirables y los pueblos avanzan en la medida en que estudian su historia críticamente. Y aquí se quiere ir al contrario de todo eso, quieren que no se hable de lo que fue la esclavitud, quieren que no se hable de lo que fue la segregación racial, quieren que no se hable de lo que fue el genocidio de los pueblos indígenas, quieren que no se hable de lo que ha sido la situación de la mujer en la sociedad moderna todavía hasta el presente, quieren que no se hable de la situación de las comunidades LGBTT.

Ahí se plantea que hay lugares donde ya se le puede imponer una condena de hasta cinco (5) años a un maestro o maestra por haber presentado literatura que alguien ha juzgado que es obscena. Más que recordar el hecho de que muchas de las obras en la literatura mundial que hoy consideramos clásicos, como el *Ulises* de James Joyce, para coger un ejemplo que viene a la mente inmediatamente, se consideraron obscenas en su momento.

Bajo esta política de eliminar textos obscenos de las escuelas y las bibliotecas públicas en muchos lugares en Estados Unidos, se han retirado obras de Toni Morrison, se han retirado obras de Alice Walker, de las autoras afroamericanas más importantes en décadas recientes, porque son grandes obras literarias, pero qué problema, hay algunos momentos en algunas de esas obras que hay una relación amorosa entre dos mujeres y ya esa obra literaria tan importante queda excluida de los ojos de los jóvenes en estas escuelas.

Yo me pregunto qué harían estos censores con una obra como *el Póstumo, el transmigrado* de Alejandro Tapia, que se escribió en 1882, en el cual un hombre reencarna en el cuerpo de una mujer y ese hombre en el cuerpo de una mujer empieza darse cuenta de todas las injusticias que sufre la mujer, y a mitad de la novela el narrador de la obra de Tapia empieza a referirse al protagonista, que se llama Póstumo envirginiado, porque está en el cuerpo de Virginia, se empieza a referir a él como él o ella, él/ella, y empieza a decir que el héroe o heroína, y se refiere a su héroe en esa novela como un híbrido bisexual. Yo estoy seguro que esa obra sería absolutamente eliminada según estos censores, esta obra -repito- que escribió Alejandro Tapia no hace diez (10) años ni veinte (20) años, en el 1882, muy adelantado para su época.

Pero esa política que se está estableciendo no cae del cielo, es producto de que en las últimas décadas ha habido grandes avances en la lucha de la mujer, grandes avances en la lucha contra el racismo, grandes avances en la lucha de los derechos de la comunidad LGBTT. Y siempre que uno empieza a retar un privilegio, el privilegio se defiende y por eso aparecen todas estas políticas que yo describí en un turno anterior hace no mucho tiempo como las políticas de la internacional del odio.

Y a lo que voy es a que no podemos indignarnos de que se prohíba el libro de Roberto Clemente si no nos indignamos de otras cosas. Con la misma lógica que nos indignamos que se quiera censurar un libro de Roberto Clemente tenemos que exigir que se implante el currículo de perspectiva de género, porque el rechazo del currículo de perspectiva de género es parte de la misma agenda de los que están censurando un libro sobre Roberto Clemente.

El señor DeSantis, el Gobernador de Florida, ha dicho que lo que está detrás de la agenda de la perspectiva de género y detrás de la agenda de querer discutir críticamente el problema del racismo en las escuelas es una agenda política. Y a mí me está tan raro que un líder político diga que es malo tener una agenda política, todo el mundo tiene una agenda política, la pregunta es qué agenda política usted tiene. Y la agenda de DeSantis y la agenda de la derecha internacional y la agenda de la internacional del odio, que tiene sus sucursales en Puerto Rico, es la agenda de la discriminación, es la agenda de la censura, es la agenda de la ignorancia.

Y nosotros tenemos una agenda y es una agenda política también, que es la agenda de la igualdad y es la agenda del examen crítico de la realidad, y es la agenda de la lucha en contra de la opresión.

En Estados Unidos agradidamente no todo el mundo es DeSantis y no todo el mundo es Trump, sino que también hay fuerza democrática, fuerzas progresistas. Nosotros le mandamos nuestra solidaridad a todos los que en Estados Unidos están luchando contra esa barbaridad y nosotros en Puerto Rico seguiremos luchando también como parte de la internacional de la solidaridad y la de la internacional de la democracia de la cual somos parte.

Muchas gracias.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Muchas gracias al compañero Rafael Bernabe. Reconocemos en su turno a la compañera María de Lourdes Santiago.

SRA. SANTIAGO NEGRÓN: Muchas gracias, señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante.

SRA. SANTIAGO NEGRÓN: La vida de Roberto Clemente Walker, que tanto representa para los puertorriqueños y las puertorriqueñas, que de una manera tan singular entraña nuestra identidad como pueblo por su extraordinario talento atlético, por su valentía al enfrentar el racismo en el deporte, por su humanidad, por su muerte trágica, todo lo que es nuestro eterno veintiuno (21) aparentemente entraña un gran peligro moral para la niñez estadounidense, según los criterios de las autoridades escolares del Condado de Duval en Jacksonville, Florida, que al amparo de legislación aprobada el año pasado y que entró en vigor ahora en enero han ejecutado actos de censura en las bibliotecas escolares de esa jurisdicción y no es solo Roberto Clemente. Estima la buena gente de Jacksonville que también hay que expulsar de la posibilidad de que los niños y niñas sepan quién es al Dalai Lama, que es el líder espiritual del pueblo tibetano, su biografía también excluida; Malala, la joven paquistaní que a los 17 años recibió el Premio Nobel de la Paz; la biografía de Carlos Santana, el guitarrista de “rock’n roll”, que su peligro, su peligro aparentemente es haber llevado influencias latinoamericanas y africanas a la música estadounidense. Se ha excluido un libro que se llama Fray band, que es la historia de una familia de los pueblos originarios de Estados Unidos. Se ha condenado a la censura a un libro que se llama *The garden of my imaan* que relata la historia de Aliya, una adolescente musulmana que vive en Nueva Inglaterra y que está debatiendo si debe tomar el velo o no.

No es solamente contra los puertorriqueños, que bastante debería ser, hay un (1) millón de nuestras personas, un (1) millón de nuestra nacionalidad viviendo en ese Estado, es contra todo lo que represente diversidad. Y esto se hace en el país que se precia de haber nacido del “belting pods”, de la fusión de identidades, esto ocurre en el país al que llegaron emigrantes buscando libertad, pero que construyeron su nación sobre el dolor de la esclavitud, los esclavos obligados a generar riqueza en la tierra que se le usurpó a los pueblos originarios. Esos son los Estados Unidos.

Y por la cercanía que nos impone tanto nuestra relación de inferioridad política, como el hecho de que allí habita una parte tan importante de nuestra nacionalidad, nosotros no podemos quedarnos callados y calladas ante este episodio que parecería el reclutamiento del Ku Klux Klan para que decida qué van a aprender los niños y las niñas en la Florida.

He presentado la Resolución del Senado 739, a la cual gentilmente se han unido la senadora Rivera Lassén y el senador Vargas Vidot, para expresar el repudio del Senado al programa de censura instaurado en el Estado de Florida para remover los libros de las escuelas; y para solidarizarnos con la clase magisterial que puede enfrentar, una maestra puede pasar cinco (5) años en la cárcel si escoge enseñar sobre la vida de Roberto Clemente y a las autoridades de ese condado les parecía que nadie debe enterarse de quién fue Roberto Clemente.

De eso es lo que estamos hablando. Esta es la distopia completa. Las cosas que pensábamos que eran imposible que pasara dentro de un país que aspira a ser ejemplo de democracia, están ocurriendo. Esta es la mordaza, la censura, la cacería de brujas, esta es la erradicación de todo respeto a la diversidad sobre la que alegadamente se levantó ese país.

Y si aquí, y si aquí nos quedamos callados y calladas entramos en el combo del racismo, del exclusionismo y de la gente que representa lo peor de lo que es capaz el género humano encarnado en este momento en esas autoridades escolares del Estado de Florida, en la Legislatura del Estado de Florida y en el Gobernador de Florida.

Son mis palabras. Y solicitaré que en la próxima sesión -vamos a ver si de verdad sentimos que esto nos indigna- se considere mi Resolución número 739.

Son mis palabras.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Muchas gracias, compañera María de Lourdes Santiago. Reconocemos en su turno al compañero Vargas Vidot.

SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente.

No hay forma de no establecer un paréntesis antes de emitir lo que son mis palabras para precisamente unirme abierta y directamente a este reclamo, que es un reclamo de dignidad, y vamos a ver, como dirían en donde yo me crié, si el gas pela o no pela. Así que es bien importante esto.

Sin embargo, yo quiero utilizar este momento para algo que es absolutamente complejo, y es la expresión continua de violencia que se vive en nuestras calles, la inseguridad que sufren empresarios, empresarias, personas dueñas de negocios que despiertan y al otro día encuentran sus gasolineras saqueadas, la capacidad que tiene de organización ese llamado bajo mundo para establecer su operación en forma coordinada y lógica cuando hay cambios de turnos en la Policía, etcétera, etcétera.

El terror, señor Presidente, se apodera de las calles de día y de noche, la probabilidad de estar en medio de una balacera, como en Santurce, la probabilidad de múltiples “carjackings” en el mismo lugar, la probabilidad de cualquier otro evento delictivo dejándonos a la intemperie en términos de seguridad, es una realidad que lamentablemente estamos viviendo sin que veamos una forma de resolverla. De hecho, la peor forma es echarle la culpa a la Policía y la peor forma es creer que la violencia es el resultado de la ausencia de patrullas y no el resultado de haber perdido el horizonte en nuestro proyecto social.

Todavía seguimos tolerando un Departamento de Educación que no tiene ni siquiera horizonte, que no tiene otra cosa que ofrecer que no sea casi un cincuenta y un por ciento (51%) de deserción escolar. Todavía hay jóvenes adolescentes, niños y niñas, que no pueden entrar a un servicio de salud emocional porque los cambios en las transiciones entre una mafia aseguradora y otra mafia aseguradora no están organizadas de acuerdo a la posibilidad de que el ser humano sea el centro y lo deje de ser el bolsillo de esas codiciosas agencias.

Ese terror se ha apoderado de nuestro país, la violencia se ha convertido, señor Presidente, en una...se ha convertido en un protagonista que está permanentemente situado en nuestra cotidianidad. Día a día, todos los días tenemos que advertirle a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros familiares, ten cuidado donde estacionas, ten cuidado donde están las cosas, y nadie habla de eso. Todo lo

contrario, señor Presidente, los fenómenos que caracterizan un enorme quebranto del orden y de la paz social están presentes como un desafío, mientras la discusión pública nuestra gira alrededor de quién trae el último “chat” y el último chisme y quién se apuntó el último choteo o quién está para hacer los múltiples presidentes de los partidos, etcétera.

Es como si eso fuera lo importante en este país y mientras tanto nuestro pueblo, nuestro pueblo está agotado espiritualmente, nadie se atreve ni salir, no puedes estar en un “restaurant” porque ya es de día o de noche. Esto no debe de ser, esto no debe de relegarse a un segundo plano.

De manera que, mientras eso está en la discusión pública, estamos olvidando la imposición de asfalteras en los medios comunitarios, estamos olvidando la privatización de las costas, estamos olvidando las demandas de los campamentos Murciélagos, en Arecibo; Pelicano, en Aguadilla; Cemí, en Barrio Puntas, en Rincón; estamos olvidando los terribles terremotos y la mortandad que hay en Turquía; estamos olvidando la politiquería de un mensaje del Gobernador donde dice que todo está perfectamente bien mientras todos y todas sabemos que todo está perfectamente mal.

Así que yo quisiera que no nos olvidáramos que también es nuestro deber los deterioros de las carreteras, es nuestro deber el territorio LUMA que no sigue funcionando, es nuestro deber no olvidar al pueblo. Y como lo dijeron los Boys Scouts aquí, ellos nos ven como modelo. ¿Estaremos nosotros y nosotras cumpliendo con ese desafío o nos quedamos cortos en nuestra medida?

Gracias, señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Muchas gracias al compañero Vargas Vidot. El compañero Gregorio Matías no se encuentra en Sala. Compañera Ana Irma Rivera Lassén.

SRA. RIVERA LASSÉN: Muchas gracias, señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante.

SRA. RIVERA LASSÉN: Ciertamente, hubiera sido bueno que los Niños y las Niñas Escucha que estaban esta mañana aquí hubieran permanecido para escuchar estos turnos que hemos estado hablando, porque esos Niños y esas Niñas Escucha estaban en unas tropas integradas precisamente por las luchas que se han dado para el trabajo que tiene que ver con la equidad de género y, entre otras cosas, para que esos espacios fueran integrados como al parecer está sucediendo, y eso es gracias a una educación, una educación que tiene que ver con reconocer los discrímenes históricos que se dan en las sociedades.

Y en esa misma línea pues tengo que conversar sobre que eso es lo que está pasando, por ejemplo, en el Estado de la Florida cuando el Departamento de Educación allí acaba de decir que ha rechazado más de cincuenta (50) libros de texto, según dice la noticia y cito: “Rechazados más de cincuenta (50) libros de texto de matemáticas del plan de estudios del próximo año escolar, citando referencias a la teoría crítica de la raza, entre otras razones de los rechazos”.

Ciertamente -y cierro la cita-, ciertamente, es impresionante escuchar y leer esto, como decía la compañera Santiago, parecería que estamos en tiempos de Ku Klux Klan, yo creo que es una mezcla de estar en tiempos del Ku Klux Klan cuando campeaba por su respeto y parece que quieren volver a hacerlo y en algunos sitios lamentablemente están ganando terreno, pero es una mezcla del Ku Klux Klan con las peores historias que escuchamos de la inquisición y la quema de brujas, que al final la quema de brujas era quemar aquellas personas que representaban algún tipo de amenaza a quienes controlaban muchísimos de los espacios públicos.

Y la humanidad cuando tiene miedo de nuevos conocimientos desde las instituciones del poder reprime aquellas ideas que le son extrañas, extrañas simplemente por desconocimiento. Como le pasó a Galileo, a Galileo Galilei, cuando se le osó decir, osó decir que las teorías de quién era que daba la vuelta a sol, si era la Tierra al sol o el sol a la Tierra; cuando osó decir Copérnico también en este caso

que los planetas, incluyendo la Tierra, giraban en torno al sol; y en el caso de Galileo Galilei, como astrónomo italiano, ciertamente sufrieron todo lo que era la persecución de la inquisición.

Y por ahí tendríamos muchas otras historias, como Miguel Servet, que fue quemado vivo, quemado vivo por simplemente tener teorías distintas a lo que en ese momento se llamaba la verdad.

Pero ciertamente las teorías críticas que están reprimiendo son las teorías que cuestionan esa manera en que nuestra sociedad no permite el paso de aquellos grupos que han sido discriminados por la razón que sea. Y entonces lo que estas personas dicen es que no podemos hacer sentir mal a las personas, vamos usando el tema del racismo, por ejemplo, a las personas blancas que puedan estar usando sus privilegios que reconocen en la sociedad como personas blancas, enseñándole la historia del racismo, ¿para qué?, para que la entiendan y para no repetirla. Porque lo que estas personas están diciendo es que el racismo no se debe enseñar como una vergüenza de la humanidad. Entonces, a las personas que han sido el objeto del racismo ese dolor no importa, el que importa es aquellas personas que usan sus privilegios para ser racista.

Yo sé que aquí este Senado, por ejemplo, aprobó, igualmente la Cámara, y ya es ley, la Ley 24 del 2021, donde el pueblo de Puerto Rico reconoce que tenemos un problema de racismo y tenemos que vencerlo y que tenemos que avanzar hacia sociedades integradas y que no sean excluyentes por razón del racismo. Pero no solamente eso, la Ley 24 que aprobamos habla sobre el orgullo de nuestra afrodescendencia.

Me pregunto si aquí todo lo que esto implica y que se supone que sea mandato de la Ley estaría prohibido, según DeSantis en el Estado de Florida. Porque una de las cosas que hacemos, desde ese punto de vista y lo que dice esta Ley, es sacar como parte del orgullo de nuestra historia las historias y las aportaciones de todas las personas de diferentes grupos, en este caso hablando del tema de raza, que porque la historia no les reconoce no conocemos las grandes historias y aportaciones a nuestra sociedad.

En el caso nuestro, en Florida están reprimiendo todas las aportaciones que estén en el libro sobre la historia y la vida de nuestro Roberto Clemente. De eso se trata este asunto.

Otros temas también, por ejemplo, de Tony Morrison, Premio Nobel de Literatura.

Pero, sin duda, de lo que estamos hablando es de total ignorancia, estos son leyes ignorantes y leyes que no reconocen que los pueblos para avanzar y para vencer todos los temas de exclusión primero tienen que reconocer la exclusión. Si usted quiere vencer el racismo, por ejemplo, tiene que reconocer que existe; si usted quiere vencer el discrimen por razón de género tiene que reconocer que existe.

Así es que quiero decir estas palabras porque me parece que lo que está pasando en Florida y en otras partes de Estados Unidos tenemos que mirarlo con mucho cuidado. Y estamos en el mes en Estados Unidos sobre la historia de las personas negras y en Puerto Rico el mes que viene vamos a estar celebrando todo lo que tiene que ver de las aportaciones de nuestra afrodescendencia.

Esas son mis palabras, señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Muchas gracias a la compañera Ana Irma Rivera Lassén. Compañero Portavoz.

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, antes de solicitar un receso de los trabajos quiero, para efectos de récord, hacer constar que también he radicado una Resolución Concurrente sobre las expresiones del gobernador DeSantis.

Señor Presidente, terminados los turnos, vamos a solicitar un receso de los trabajos del Senado de Puerto Rico hasta el próximo lunes 13, a las once de la mañana (11:00 a.m.).

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): El Senado de Puerto Rico recesa los trabajos los trabajos hasta el próximo lunes, 13 de febrero, a las once de la mañana (11:00 a.m.), siendo hoy jueves, 9 de febrero de 2023, las tres y cuarenta y siete minutos de la tarde (3:47 p.m.) de hoy.

Receso.

**INDICE DE MEDIDAS
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DÍA
9 DE FEBRERO DE 2023**

MEDIDAS

PÁGINA

P. del S. 45	24040 – 24041
P. del S. 533	24041 – 24042
P. del S. 894	24042
P. del S. 992	24043
P. del S. 1000	24044 – 24045
R. del S. 719.....	24045 – 24047
P. de la C. 45	24047 – 24048
P. del S. 299 (rec.).....	24049 – 24050
P. del S. 894	24050 – 24055